

Número 70 / octubre 2003 / 7 €

1
el
desorden
internacional

Cancún-OMC
Lo conseguimos. *Josep Maria Antentas y Josu Egireun* 7
Unión Europea
Los trabajos de la Convención sobre el futuro de Europa.
G. Buster 15
Por una refundación democrática y social de la Unión Europea. *Javier Aguilera, Manuel Colomer, Oskar Matute, Manuel Monereo, María Dolores Nieto y Jaime Pastor* 25
Italia
Rifondazione: un debate sobre los movimientos sociales.
Gigi Malabarba, Flavia D'Angeli, Franco Turigliatto 31
Argentina
Una perspectiva 'desde abajo' sobre el gobierno Kirchner.
Daniel Campione 39
Brasil
El avance de la reforma agraria en Brasil. *Luiz Felipe Nelsis* 47
México
EZLN: un viraje importante. *Guillermo Almeyra* 53
Irak
La guerra de ocupación. *Charles André Udry* 57
Recortes
África y la compasión Made in USA. *Redacción "a l'encontre"* 61
II Asamblea preparatoria del Foro Social del Mediterráneo. *Pedro Belmonte, Juan Antonio Conesa* (Ecologistas en Accion Region Murciana) 63
Se acerca el Foro Social Europeo. *Josu Egireun* 65

2
miradas
voces

Carlos Pagán 67

3
plural
plural

La privatización es un robo
El dominio público contra la privatización del mundo. *Daniel Bensaid* 73
Estado y apropiación social. *Thomas Coutrot* 83
El debate sobre la financiación de las pensiones. *Michel Husson* 90

El feminismo transnacional y la lucha por la justicia global. *Johanna Brenner* 96

4
voces
miradas

Suniti Namjoshi 111

5
notas y
documentos

Más allá del caso Tamayo-Sáez. La política de los negocios y las urnas. *Jaime Pastor* 117
"Intentamos llevar una práctica asamblearia y defendemos un sindicalismo participativo" *Entrevista a Luis Blanco, miembro de la Comisión Coordinadora de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)* 122

Propuesta gráfica de "seVende"

Redacción:

Josep Maria Antentas
G. Buster
Manuel Colomer
Antonio Crespo
Josu Egireun
Mikel de la Fuente
Manuel Garí
Verónica Gil
Alicia López
Justa Montero
Alberto Nadal
Carmen Ochoa
Jaime Pastor
Juana Perelstein
Miguel Romero
Pilar Soto
Pedro Venero

Diseño original:

Jerôme Oudin &
Susanna Shannon

Dirección de arte:

Jaime Gil Sánchez

Maqueta:

Escala 7

Redacción,
administración
y suscripciones:
c/ Limón, 20 - Bajo ext. dcha.
28015 - Madrid
Tel. y Fax: 91 559 00 91
vientosur@vientosur.org

Imprime:
Perfil Gráfico, S.L.
C/ Medea, 4 - 1º C
Edificio Ecu, Madrid

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:
7 euros (IVA incluido)

www.vientosur.info

Han colaborado en es número:

Guillermo Almeyra
Periodista. Colaborador entre otras muchas publicaciones del diario mejicano *La Jornada*.
Daniel Bensaïd
Profesor de Filosofía, universidad de Paris VIII.
Johanna Brenner
Coordinadora de Estudios de Mujeres de la Universidad del Estado de Portland, Oregón. Es autora de *Women and the Politics of Class* (Monthly Review, 2000).
Daniel Campione
Profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Thomas Coutrot
Economista.
Flavia D'Angeli
Forma parte de la dirección de Rifondazione Comunista. Militante de la IV Internacional.
Michel Husson
Miembro de la Fundación Copernic y del Consejo Científico de Attac-Francia.
Gigi Malabarba
Senador en representación de Rifondazione Comunista. Militante de la IV Internacional.
Luiz Felipe Nelsis
Jefe del Gabinete del Ministro de Desarrollo Agrario brasileño, Miguel Rossetto.

La “privatización del mundo” es el programa máximo del capitalismo. En los últimos veinte años ha avanzado con una velocidad vertiginosa a lomos de la globalización neoliberal. Ahí se enraízan la mayoría de los estragos que sufre la humanidad y los enemigos de cualquier proyecto emancipador.

Tres artículos reflexionan sobre este tema desde distintos puntos de vista. **Daniel Bensaid** parte en su texto de los debates de los primeros movimientos sociales críticos del capitalismo sobre la “cuestión de la propiedad”. Dedicó una atención especial a las contradicciones entre la socialización del trabajo intelectual y la apropiación privada de sus productos, incluyendo los aspectos más concretos y actuales vinculados con los derechos de patente. Finalmente polemiza con las corrientes que postulan conceptos como “cybermercado”, “cognitariado”..., a las que considera, a nuestro entender con buenas razones, afectadas de un “determinismo tecnológico furioso”.

Thomas Coutrot tiene como objeto central de su reflexión la “apropiación social, a partir de un debate con un texto de la Fundación Copérnico. No hemos reproducido este documento porque pensamos que el interés del artículo de Coutrot leído aquí, interés que es muy grande, se basa no tanto en esa polémica, como en la ideas que Coutrot desarrolla, especialmente respecto al papel del Estado, un tema fundamental que, afortunadamente, vuelve a ser objeto de reflexión desde la izquierda alternativa, tras una etapa en la que la, por otra parte muy justificada reapropiación de ideas de la tradición libertaria, archivó un problema que es imposible de eludir, en la teoría y en la estrategia de la izquierda. Coutrot incluye propuestas muy interesantes sobre formas nuevas de democracia (“*Este movimiento de democratización radical, puede ser denominado ‘autogestión’ en el caso de la economía y ‘desestatalización’ en el caso de la política*”).

En fin, **Michel Husson** se ocupa de uno de los aspectos de la “privatización” de mayor impacto y más graves consecuencias sociales: todo lo que afecta al sistema de pensiones. Husson ha escrito numerosos trabajos sobre este tema, en los que ha logrado una envidiable y rara combinación de rigor científico y punto de vista militante. En este caso se ocupa de uno de los terrenos en los que es más difícil la polémica con los “privatizadores”: la supuesta “imposible” financiación de los sistemas públicos de pensiones.

El " caso CAM (Comunidad Autónoma de Madrid)" es una manifestación particular de los problemas que se analizan en *Plural*. De hecho, el artículo de **Jaime Pastor** podría haber ido en esta sección. Lo hemos incluido finalmente en "Notas y Documentos" porque su centro de interés es el análisis de los conflictos políticos que ha revelado este caso Tamayo-Saéz. Pastor tras establecer las relaciones entre "corrupción y globalización", y los antecedentes de este tipo de problemas en etapas políticas anteriores, examina críticamente las reacciones de los distintos partidos. Concluye con propuestas de "otra democracia" frente a frente a "unos sistemas que se dicen democráticos y que, en realidad, se encuentran cada vez más sometidos a los dictados de los poderes económicos, ya sean globales, nacionales o locales".

Una autocrítica que aparece sistemáticamente en los balances sobre los encuentros del proceso de Porto Alegre es la débil (o en todo caso, menos fuerte de lo que sería necesario) participación del movimiento feminista. **Johanna Brenner**, una feminista de los EE UU, estudia este problema desde "el impacto de la globalización neoliberal en la vida de las mujeres la vida de las mujeres y en las posibilidades de responder a la dominación masculina, tanto en el centro como en la periferia del sistema capitalista mundial", analiza sus posibles y diversas causas (entre otras, "las tensiones entre las ONGs de mujeres y los sindicatos y los silencios estratégicos sobre aborto y orientación sexual"), y propone algunas alternativas para superar lo que constituye sin duda una de las debilidades fundamentales del "movimiento por la justicia global".

Hubo "descarrilamiento" en Cancún y nos felicitamos por ello. Pero la satisfacción por haber contribuido a impedir un malísimo acuerdo, que era el único posible, no debe ocultar que los problemas fundamentales (AGCS, TRIPs...) siguen sobre la mesa y que la aparición del Grupo de los 22 es un factor nuevo interesante (aunque muy lejos por el momento del "movimiento de los países no alineados"), pero que el movimiento anti-globalización debe estudiar con atención y definir una orientación apropiada, si queremos evitar más confusión de la que ya hay. Efectivamente, Cancún ha mostrado una vez más las capacidades del movimiento para la crítica y la acción social, en este caso, con experiencias de desobediencia civil de especial interés. Pero en materia de análisis, ideas, propuestas, etc., no parece que se avance mucho. **Josep Maria Antentas** y **Josu Egireun** estuvieron en Cancún y hacen balance de la experiencia.

Entramos en la etapa decisiva del proceso de la " Constitución europea" . **G. Buster** analizada a fondo el borrador constitucional y concluye en las líneas generales de una propuesta por "otra Europa necesaria y posible".

No cabe duda de que el análisis del proyecto de Constitución y la posición política y de voto ante ella va a ser uno de los grandes debates de la izquierda europea en los próximos meses. Los resultados de la votación en el Parlamento europeo ha dado ya algunos signos significativos: votaron a favor 335, entre ellos, miembros del GUE/NGL como Alonso Puerta y Cossuta (algo menos sorprendente de lo que puede parecer en un viejo estalinista), el PSE casi en pleno (incluyendo a toda la familia del PSOE) y algún personaje significado como Cohn Bendit; se abstuvieron 53, entre los cuales Jové, Maset y Bergaz de IU, como medida de compromiso entre los que estaban por el NO y los que preferían el SI; también se abstuvo una personalidad “verde”: Alain Lipietz; en fin, votaron en contra 106, entre ellos, el sector que merece llamarse coherente del GUE/NGL (entre ellos Krivine, Laguiller, Vachetta”. El texto que publicamos “*Por una refundación democrática y social de la Unión Europea*” firmado por seis miembros del Consejo Político Federal de IU es una valiosa contribución a este debate.

Rifondazione Comunista es una referencia para toda la izquierda alternativa europea, especialmente por los debates y propuestas que presenta sobre las relaciones entre los partidos políticos y los movimientos sociales. A partir de la experiencia del fracaso del referéndum de los días 15 y 16 de junio pasado, este debate se ha profundizado y pensamos que merece la mayor atención. **Gigi Malabarba, Flavia D’Angeli, Franco Turigliatto** han escrito una magnífica aportación a esa discusión, que trasciende de los problemas concretos de la situación italiana.

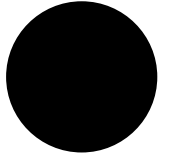
Finalmente, seguimos con atención, como es habitual, la evolución de los acontecimientos en América Latina. Brasil, Argentina y México estarán también presentes en nuestros próximos sumarios.



SE VENDE

SE VENDE

1 el desorden internacional



Cancún-OMC

Lo conseguimos

Josep Maria Antentas y Josu Egireun

La Vª Cumbre Ministerial de la OMC situaba al movimiento contra la globalización neoliberal ante un doble reto: por una parte, hacer fracasar la cumbre tras el desastre de Seattle y el paréntesis de Doha; y, por otro, profundizar en la coordinación y la articulación de los movimientos sociales, en especial a partir de la red de movimientos puesta en marcha en Porto Alegre, que en Cancún tenía su primera experiencia práctica después del Foro Social Mundial.

La situación era contradictoria: por una parte, la falta de consenso previo a la cumbre en la propia OMC hacía planear el fantasma de Seattle sobre Cancún. Además, la constitución del Grupo de los 21 encabezado por Brasil, que actuaba como un ariete contra la línea de flotación del tándem EE UU-UE, creaba condiciones favorables para el movimiento; pero, por otra, la debilidad de los efectivos desplazados hacia Cancún, debido en parte al emplazamiento geográfico de la ciudad, y la división interna entre los movimientos mexicanos expresada, sobre todo, a través del Foro Internacional Indígena y Campesino y el Foro de los Pueblos, limitaba en parte el potencial del movimiento.

El grueso de los militantes desplazados a Cancún provenían, lógicamente, del mismo México, pero también cabe destacar una significativa presencia de norteamericanos, básicamente de ONGs, y de grupos de acción directa no violenta, así como una importante delegación surcoreana, con unos 180 miembros, que se convertiría en la protagonista de la contra-cumbre. El número de europeos desplazados hasta Cancún fue, en cambio, muy reducido, casi testimonial.

En un plano más general, la cumbre de la OMC llegaba en un momento general también contradictorio. Por un lado, existe una creciente crisis del capitalismo y de

las políticas neoliberales, para las cuales las horas parecen correr en sentido contrario, y un aumento de las resistencias sociales, pero, al mismo tiempo, las victorias concretas conseguidas por los movimientos sociales, a nivel nacional o mundial, siguen siendo muy escasas. La cumbre empezaba también con la sensación de que Irak puede irse convirtiendo en un pantano para quienes tomaron la iniciativa de invadirlo, si bien es difícil pensar que el movimiento antiglobalización pueda volver a repetir la función tractora que desempeñó para el 15-F.

Un momento contradictorio

Las movilizaciones en Cancún confirmaron, precisamente, que en la vinculación entre la lucha contra la guerra y las políticas neoliberales queda mucho por hacer. Aun cuando la lógica de la guerra ha estado muy vinculada a la denuncia de las políticas neoliberales e, incluso, una de las líneas críticas contra la OMC es que el desarrollo de sus políticas conduce a la militarización del planeta, como la vía para imponer el dominio político, económico y militar de las potencias sobre el resto de países; aun cuando uno de los logros del movimiento contra la globalización neoliberal ha sido desencadenar la mayor movilización jamás vista contra una guerra anunciada, la traducción del caudal político contra la guerra en una movilización social contra las políticas neoliberales ha sido muy limitada. Por un lado, pesan aún los años de derrota política del movimiento obrero ante las políticas neoliberales así como las políticas dominantes en las confederaciones sindicales mayoritarias. Por otro lado, el movimiento antiglobalización no fue capaz de plantear una jornada unitaria de movilización contra la OMC y la guerra en torno la cumbre de Cancún, y ha habido una cierta dispersión de esfuerzos entre la semana de protestas contra la OMC, la jornada del 27 de septiembre contra la ocupación de Irak y Palestina y, en general, ha habido muchas dificultades para introducir la cumbre de Cancún en las agendas de los movimientos sociales de cada país y para arrastrar a aquellos sectores que se movilizaron contra la guerra pero no forman parte del movimiento antiglobalización.

Con todo, la movilización habida en Cancún, más de 20.000 personas enfrentando la cumbre, junto a la firme posición del Grupo de los 21 (que al final quedó en 23), encabezado por Brasil, logró contribuir al fracaso de los objetivos de los EE UU y la Unión Europea, lo que constituye una clara victoria del movimiento, una victoria que marcará su futuro, en México y fuera de él y, que en lo inmediato, es una inyección de fuerza y moral importante para hacer frente a la cumbre del ALCA en Miami, el próximo noviembre.

La movilización en Cancún se articuló a través de distintos espacios: El Foro Internacional Indígena y Campesino, el Foro de los Pueblos, el Foro Internacional de las Mujeres, el Foro Sindical Internacional organizado por los sindicatos independientes mexicanos, varias actividades organizadas por ONGs y organizaciones extranjeras, el Campamento de la Juventud formado por un par

de caravanas de jóvenes y estudiantes provenientes de Mexico DF y Chiapas, el centro de Indymedia, y también el Foro Parlamentario Internacional. Hubo también varias reuniones de coordinación de movimientos sociales, en especial sobre el tema de la guerra y también de la Red de Movimientos Sociales creada en Porto Alegre. A lo largo de la semana todos ellos fueron espacios de encuentro y reflexión sobre multitud de temas, si bien la dinámica real de la movilización giró en torno al día 10, soportado fundamentalmente por el movimiento indígena y campesino, y la manifestación del día 13, articulada principalmente por los sindicatos independientes, y las caravanas de estudiantes y jóvenes. Hubo un desfase temporal importante en la llegada y partida de los principales contingentes y grupos en Cancún, de forma que no hubo un solo gran momento de protesta, sino dos momentos centrales, los días 10 y el 13. El contingente campesino realizó sus actividades los primeros días y se retiró en gran parte el día 10, mientras que otros grupos mexicanos, como los sindicatos y otros, llegaron los días previos a la manifestación del 13 o el mismo 13. Las caravanas estudiantiles y los internacionales permanecieron prácticamente toda la semana en Cancún. Del 9 al 13 un sinfín de iniciativas menores (la más fuerte la del día 9, una marcha hacia la valla que cerraba la zona oficial, de unos mil jóvenes), que tuvieron en jaque a la Cumbre. Algunas de ellas tuvieron lugar dentro del recinto de la cumbre oficial o en la zona roja de acceso restringido, fueron las movilizaciones *inside* que complementaban las *outside*, como las innumerables acciones de protesta dentro del Palacio de Congresos por parte de organizaciones sociales acreditadas, o el bloqueo por más de cuatro horas de la carretera principal frente al Palacio por parte de unas 150 personas el día 12.

Las principales actividades y la irrupción indígena y campesina

De todos ellos, el espacio más relevante fue el del Foro Internacional Indígena y Campesino. En parte porque el acuerdo sobre agricultura, terriblemente agresivo para las comunidades agrarias y campesinas, era la llave de todas las negociaciones en la OMC y, sobre todo, porque el movimiento indígena y campesino, en especial Vía Campesina, no sólo tuvo una comprensión política acertada de este fenómeno, sino que pudo llevar a cabo un reto que en su momento parecía inalcanzable: movilizar 10.000 campesinas y campesinos y gente de comunidades indígenas al centro de Cancún para hacer frente a la OMC, al tiempo que definir un proyecto alternativo y sellar una alianza entre el movimiento campesino y el indígena.

Un proyecto alternativo basado en la defensa de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los recursos naturales (semillas, agua y tierra) como bienes de los pueblos al servicio de la humanidad, y una alianza que une las luchas campesinas actuales a los 500 años de resistencia indígena y la usurpación de la tierra, pero,

también, una alianza que se extiende al resto de los movimientos sociales. Fue a través del Foro Campesino como el EZLN unió su voz a las movilizaciones en Cancún a través de la comandante Esther, el comandante David y el subcomandante Marcos. Ésta fue la principal participación del zapatismo en Cancún, importante desde el punto simbólico y moral, pero menor a efectos reales de lo que hubiera sido deseable. La irrupción de estos 10.000 campesinos y campesinas, de las comunidades indígenas (gente humilde que tuvo que desplazarse durante más de 40 horas para acampar a la intemperie), supone un paso importante en el desarrollo del movimiento, y una de las especificidades de Cancún.

Las movilizaciones: una lucha directa, radical y diversa

La manifestación del día 10 fue la primera gran acción en Cancún. Pretendía mostrar la voluntad inquebrantable de los movimientos de “hacer descarrilar” a una OMC que llegaba tocada a Cancún. Unas 10.000 personas, en su mayoría campesinos marcharon desde la Casa de la Cultura hasta el Kilómetro 0, inicio de la zona hotelera de acceso restringido y de la valla metálica que cerraba el paso a los manifestantes. Al llegar a la valla, el esfuerzo tenaz de docenas de manos juntas, con el impulso inicial de los campesinos coreanos, pudo abrir un boquete, mostrando la decisión y empuje de los manifestantes en la primera gran acción de la Cumbre. No se llegó a más porque aquello hubiese derivado en una batalla campal entre manifestantes y policías, y el objetivo no era ese. Así lo entendió Vía Campesina, que organizó una retirada ordenada de la manifestación.

El factor determinante de la jornada del día 10 fue, sin embargo, el suicidio de Lee Kyung Hae. Porque su muerte, la de un líder campesino llegado de Corea, de la *Korean Advanced Farmers Federation*, una organización moderada, él mismo galardonado en 1985 como “agricultor universal” por el Gobierno de Corea y la FAO, adquirió una carga simbólica decisiva: una muerte provocada por la desesperación a la que conducen las políticas de la OMC, una OMC que, como rezaron todas las pancartas (dentro y fuera de la Cumbre) a partir de ese instante, “mata campesinos”. En los dos días posteriores, se realizaron varios actos de homenaje al “hermano Lee” tanto en el Km.0 (a partir de entonces rebautizado Campamento Lee, porque allí acampó la delegación de Corea) como en la Casa de Cultura –que albergaba el Foro Indígena y Campesino– y acciones de protesta en el interior de la Cumbre. El grupo artístico Tekpatl Sin Fronteras, compuesto por universitarios de la UNAM que rindieron su homenaje particular a Lee Kyungn con un mural, escribieron sobre él: *En el agua, la paciencia / en el viento, la ilusión / en la tierra, la esperanza/ en el futuro, el corazón.*

La muerte de Lee actuó también como catalizadora de la movilización, porque a partir de ahí los distintos asentamientos de manifestantes se convirtieron en un hervidero de discusiones y propuestas: ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿con qué objetivos?

Así sucedió con la preparación de la manifestación del 13, a pesar que el grueso del contingente campesino no pudo permanecer en Cancún hasta tan tarde. La forma en que el movimiento abordó la acción del día 13, tanto Vía Campesina, como los estudiantes o los grupos de acción directa fue clara. Se partía de la constatación que la movilización del día 10, el derrumbe de la verja y la muerte de Lee habían permitido acumular un capital político que no se podía echar por la borda por una mala definición de las protestas el día 13; al mismo tiempo, estaba claro que la movilización del día 13 no podía quedar en una simple movilización que terminase en un mitin. En palabras de Paul Nicholson, de Vía Campesina, se buscaba una movilización “*que supusiera un salto cualitativo respecto al día 10, que transmitiera un mensaje políticamente fuerte y que mostrara la rabia contenida de los manifestantes por la muerte de Lee*”, pero que no fuera violenta.

La manifestación del día 13: un modelo de acción directa

El acuerdo al que se llegó fue el siguiente: la manifestación llegaría hasta el Kilómetro 0, donde se realizaría el mítin final, y después, los manifestantes que quisieran, con la delegación coreana a la cabeza, marcharían hasta la valla (desplazada cien metros atrás por la policía después del día 10 y convenientemente reforzada) para proceder a tumbarla mediante cuerdas. Al resto se le pidió que se quedara en el Kilómetro 0, en solidaridad. Se acordó también que la primera línea de la acción la ocuparan las mujeres, quienes llevaban huevos para arrojarlos a la policía y tenían como misión sujetar las manos a aquellos/as que quisieran tirar piedras y sólo si no lo lograban iban a pedir la colaboración de los hombres. El servicio de seguridad corrió a cargo del *Black Bloc*, quienes manifestaron estar de acuerdo con el esquema de movilización en la reunión preparatoria la víspera, y su voluntad de impedir “infiltraciones” dentro su bloque durante la marcha.

La manifestación reunió a unas 10.000 personas, esta vez con una composición diferente a la del día 10. El contingente campesino fue más reducido, y destacaron en la marcha el amplio número de jóvenes y estudiantes, así como también una buena delegación de algunos de los sindicatos independientes y democráticos mexicanos, en especial el Sindicato Mexicano de Electricistas y en menor medida del Frente Auténtico del Trabajo y otras organizaciones. Una vez llegado hasta el final, la acción en la valla funcionó a la perfección. Después de un largo trabajo, las soldaduras de la doble valla metálica que cerraba el paso saltaron por los aires, arrastradas por tres grandes trenzas de cuerda de la que tiraban cientos de manifestantes; el homenaje a Lee Kyung se pudo realizar al otro lado de la verja, frente a un férreo cordón policial, sin provocación ni altercados. Y allí ardieron los símbolos de la OMC y la bandera americana.

Esta acción, fue una buena expresión de lo que es una acción directa, que integra la movilización de masas y que sitúa el punto de inflexión no en el daño físico que puede ocasionar la acción, sino en el efecto político de la misma. En cierta medida se puede decir que haber comprendido bien ésto, haber definido dónde estaba el elemento de ruptura política y una conclusión ordenada de la misma fue el logro principal.

La acción se desarrolló en un contexto político muy particular, marcado por el liderazgo y la autoridad moral que la delegación coreana y el movimiento campesino obtuvo después de la muerte de Lee, que permitió crear una comunidad de intereses entre los diferentes sectores que integraban la movilización. Esto, juntamente con el buen hacer de Vía Campesina y los grupos de acción directa no violenta, permitió establecer un diálogo abierto entre todos los sectores implicados en la acción, y que no hubiera fricciones ni problemas. El único punto débil fue la no integración y participación de los sindicatos independientes mexicanos en toda la acción, que no se sintieron concernidos por la misma, quizá por falta de discusión previa.

La presencia del sindicalismo mexicano independiente en Cancún, aparte de su presencia en la manifestación, se realizó también a través de la organización de un Foro Sindical Internacional, con unos 300 participantes. Hubo también otros foros sindicales como el organizado conjuntamente entre la CUT brasileña, la COSATU surafricana y la KCTU coreana, “voces del Sur hacia una solidaridad real Norte y Sur” y la Conferencia de Sindicatos Globales organizada por la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres). Ésta última tuvo una orientación moderada, y una lógica interna distinta a la del conjunto de actividades de la contracumbre.

Al final, a pesar de todas las dificultades, la movilización tanto en la calle como en el interior del Palacio de Congresos y la firmeza del grupo de los 23 logró hacer fracasar la Vª Cumbre Ministerial. No supone la muerte de la OMC, pero supone una victoria importante para el movimiento y sus efectos aunque difíciles de predecir, se dejarán sentir en el movimiento. El mismo día 14, tanto las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales hablaban que tras Cancún nada iba a seguir como antes. Se referían al aumento de su nivel de diálogo y entendimiento o, si se quiere, al descenso de su nivel de desencuentro. La cumbre del ALCA en Miami en noviembre será el próximo test para el movimiento en el continente americano.

La primera experiencia de la Red

Pero para construir un futuro de esperanza hay que articular las luchas y en el último Foro Social Mundial de Porto Alegre se constituyó una Red Mundial de Movimientos Sociales que tuvo su primer bautismo en Cancún. ¿Qué balance, qué elementos de reflexión podemos extraer de la experiencia de Cancún?

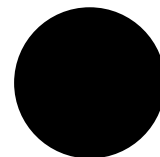
Ya en la primera asamblea de la Red el día 8, se puso de manifiesto la dificultad real para traducir en compromisos y dinámicas de trabajo práctico la actividad de la Red, así como la poca fuerza numérica de la representación internacional de los movimientos comprometidos con la Red en Cancún, lo que debilitaba el trabajo de coordinación y articulación a realizar durante la Cumbre. La necesidad de articular mejor los planos local-global, y las diferentes luchas locales y nacionales en el plano internacional fueron también objetivos necesarios señalados. La actividad de la Red de cara a este tipo de acontecimiento no debería reducirse al encuentro de quien acuda sobre el terreno, sino en ir construyendo un movimiento y un proceso que se comprometa en lo global y en lo local de forma más estable.

La situación específica en Cancún, donde los diversos movimientos mexicanos tenían poco contacto entre sí debilitó sensiblemente todo el trabajo de articulación y coordinación de los movimientos sociales, a pesar que los movimientos internacionales y el equipo de la secretaría brasileña de la Red de movimientos intentó actuar como un elemento unificador de los diferentes espacios mexicanos y propició la creación de reuniones de coordinación diarias para planificar las tareas. Parece importante pues tomar nota de esta cuestión para futuros acontecimientos, buscando la forma en que se puede reforzar el trabajo de la Red de movimientos sociales previo a las cumbres, para ir consiguiendo un compromiso mayor y una articulación real entre los movimientos. En todo caso las reuniones de los movimientos sociales en Cancún dieron una declaración conjunta como fruto y esto es algo positivo.

Por último, hay tres cuestiones más, en relación a la OMC, sobre las que conviene reflexionar hacia delante.

La primera, tiene que ver con la dialéctica entre los movimientos sociales y los gobiernos de los países que se oponen al dictado de las potencias dentro de la OMC. Los movimientos sociales no estamos al margen de cómo actúan esos países y, como ha ocurrido en Cancún, la referencia a su actitud y el apoyo al bloque ha sido un elemento estructural de la lucha. Hasta el presente, el problema se ha resuelto de una forma satisfactoria: apoyo a esos gobiernos en los conflictos dentro de la Cumbre, pero con independencia política clara; es decir no comprometiéndose en su agenda, que en este caso concreto abogaba por más comercio, sólo que en otras condiciones. Pero desde algunos sectores del movimiento esta posición no está tan clara, como lo muestra la propuesta que en su día puso encima de la mesa Oxfam ante la cumbre de Johannesburgo, justamente criticada por Vandana Shiva y Walden Bello.

En segundo lugar, y tras haber hecho fracasar la Vª Cumbre Ministerial, la pregunta que nos viene encima es: y ahora, ¿qué? Para las grandes potencias, la alternativa al multilateralismo estancado de la OMC son los acuerdos bilaterales, que dejan en una posición muy débil a los países pobres y en vías de desarrollo (tal como lo puso de manifiesto el famoso Plan Brady en relación al frente creado contra la deuda externa, que se vino abajo en cuanto las negociaciones entraron en el terreno de la bilateralidad). Es importante, por tanto, poder



fortalecer las movilizaciones contra los acuerdos de libre comercio bilaterales, dentro de las grandes potencias económicas y en los países pobres, buscando una mejor coordinación de las luchas y las resistencias.

La tercera cuestión es que el fracaso de Cancún no supone la muerte de la OMC ni que se hayan creado condiciones para empezar a hablar en torno a otro modelo de organización multilateral. Este fracaso deja intacto todo el programa de Doha (sobre AGCS, TRIPS, etc.) que tiene plazo para el 2005 y que tendremos que esforzarnos en hacerlo también “descarrilar”. Declaraciones como las del Comisario Europeo Pascal Lamy demandando otro modelo de negociaciones que no sea tan “democrático” porque éste impide llegar a acuerdos, hace pensar en una posición aún más agresiva de las grandes potencias para el futuro inmediato.

El fracaso de la OMC ha sido un logro importante para el movimiento contra la globalización neoliberal. El día 14 en Cancún había dos frases que circulaban de boca en boca: “*Lo conseguimos*”, “*Es un triunfo de la humanidad*”. Pero a pesar de ello no es más que un paso en un camino en el que, por todo lo descrito hasta aquí, queda mucho por hacer y en el que competimos contra reloj contra las políticas neoliberales. Por eso, el reto que tenemos por delante es doble: hacer crecer al movimiento: amplificar la crisis de las políticas neoliberales, construir alianza entre los movimientos sociales... en el menor tiempo posible y avanzar sin dilación en la articulación de los mismos. No en el papel, sino en la práctica. Sólo así el futuro será de esperanza.

Los trabajos de la Convención sobre el futuro de Europa

G. Buster

“Puesto que queréis, sin tratar de lo que fuere conforme derecho y razón, se hable de hacer lo mejor que pueda practicarse en nuestro provecho, según el estado de las cosas presentes, justo y razonable es, no pudiendo hacer otra cosa, que conservemos aquello en que consiste nuestro bien común, que es nuestra libertad”.

Tucídides, “Historia de la Guerra del Peloponeso”. Cap. XI

Terminados sus trabajos, la Convención ha entregado a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), reunidos en el Consejo Europeo de Salónica, su propuesta de Constitución Europea. A pesar de la escenificación del reencuentro entre la “vieja” y la “nueva” Europa, divididas por la guerra de Irak, los debates de fondo sobre el futuro de la UE continuarán en los próximos meses en la Conferencia Intergubernamental, que inaugurará Berlusconi a comienzos de octubre en Roma.

Como en el período 1989-1991, la UE se encuentra de nuevo en una encrucijada. Entonces, el derrumbe de las “democracias populares” de Europa del Este y la URSS, la I Guerra del Golfo y el estallido de la guerra en los Balcanes, empujaron a las clases dominantes europeas a dar un salto cualitativo en la construcción de la UE con el Tratado de Maastricht, la unión económica y monetaria y la perspectiva de la ampliación hacia Europa Central. Ahora, los atentados del 11 de Septiembre, la II Guerra del Golfo, la agudización de la competencia económica internacional en medio de una doble recesión y los efectos de la ampliación, vuelven a obligarla a dar un nuevo paso en la construcción de un aparato supra-estatal capaz de articular y defender los intereses de las burguesías europeas.

Por los desafíos a los que tiene que hacer frente, en los terrenos económico, militar y diplomático, la UE tiene que asumir funciones propias de un Estado, al menos en la medida en que está obligada a competir con EE UU y Japón, y dotarse para ello de una legitimidad y de un apoyo popular del que carece casi por completo. Esta es la razón y la necesidad de una Constitución Europea.

En las democracias liberales, una constitución es el documento legal básico que fundamenta la legitimidad del Estado frente a los ciudadanos. Presupone un pacto social para el bien común y, en nombre de él, el Estado gestiona, de acuerdos con los límites fijados por la constitución, la soberanía popular. Tras esta mitología, sin embargo, se encuentra el reparto del poder de las clases dominantes para la defensa de sus intereses en las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Tras el disfraz de la igualdad política de los ciudadanos en la constitución, se esconden las desigualdades sociales y económicas del mercado capitalista. Para mantener esta ficción, el Estado se separa y se coloca por encima de la sociedad civil sobre el pedestal de la constitución.

El hecho mismo de que el documento base jurídico de la nueva legitimidad de la UE se presente como una constitución, y no meramente como un tratado diplomático intergubernamental, es una señal tanto de la ambición política de las clases dominantes europeas de crear una Europa-potencia a partir de la UE, como de la necesidad de una legitimidad reforzada en la que sustentarlo. Pero de nuevo, los juegos de palabras no pueden ocultar la verdadera naturaleza de este documento, que no surge de la voluntad soberana de los pueblos de Europa, sino de la decisión de los gobiernos de los Estados miembros de la UE.

En la más pura tradición liberal conservadora, la Conferencia intergubernamental hará suyo y trabajará sobre el borrador preparado por un comité técnico designado entre parlamentarios estatales, europeos y representantes directos de los gobiernos y de la Comisión que, a pesar del rimbombante nombre de Convención, no tienen mandato popular alguno. Aunque se someta a un proceso de referéndum en la mayoría de los estados miembros –pero solo en Irlanda y Dinamarca es obligatorio y determinante– seguirá siendo una Carta otorgada a través de un acuerdo intergubernamental en la que el poder, en este caso los jefes de gobierno de los Estados miembros, interpreta los intereses de sus súbditos y les reconoce unos derechos, delimitando generosamente su propio campo de acción.

Los orígenes del debate constitucional europeo

Tras la II Guerra Mundial, las veleidades políticas federalistas de los padres fundadores de las Comunidades Europeas, los Schuman, Monnet, Spaak, Gaspari... fueron rápidamente subordinadas a las realidades políticas de la Guerra Fría, dando paso al llamado “método comunitario” para avanzar en la unidad europea. Es decir, una visión funcionalista y gradual basada en dar una respuesta institucional común a las necesidades de regulación de los mercados en la Europa de post-guerra en aquellos aspectos en los que la expansión de las fuerzas productivas superase las fronteras de los Estados existentes.

Esta situación perduró, con avances progresivos, sobre todo bajo la Comisión Delors, hasta el Tratado de Maastricht. Pero la ampliación a la UE de los 25, la introducción del euro y la necesidad de desarrollar una capacidad militar en la nueva situación internacional de finales de los años 90, llevó al Consejo Europeo de Niza, en diciembre del 2000, a discutir un primer reparto de poder en las instituciones comunitarias entre los Estados miembros y a abrir el debate sobre el futuro de la UE.

Las circunstancias políticas internas no podían ser más negativas y ponían de relieve el “déficit democrático” en la UE: el *No* en el referéndum danés sobre el Tratado de Amsterdam y el *No* en el primer referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza. La tasa media de abstención en las elecciones al Parlamento Europeo era del 50,2%, llegando al 76,7% en Gran Bretaña y el 70% en los Países Bajos. Tampoco las circunstancias exteriores eran mucho más positivas: caída del euro frente al dólar, subordinación diplomática y militar de la UE ante EE UU en los Balcanes.

Quizás por ello, el debate de ideas sobre el futuro de la UE abierto en Niza, a pesar de los primeros encontronazos sobre si debía construirse con un modelo federal o a partir de los acuerdos intergubernamentales de los Estados miembros, rápidamente encontró un terreno de consenso, que acotó en gran medida Jaques Delors. La ampliación exigía diferenciar entre la “Europa espacio” surgida de la extensión del mercado único y la “Europa potencia” constituida en su seno por aquellos estados miembros capaces de avanzar en una “cooperación reforzada”, que marcaría el camino de un “modelo común de sociedad” abierto a todos los estados miembros de la UE. No se trataba por tanto de una “UE a la carta”, con integraciones asimétricas y variables, como las de Gran Bretaña o Dinamarca, sino un solo modelo, aunque con un camino evolutivo y gradual para llegar a él, que conformarían un centro y una periferia en la UE.

Este esquema exigía delimitar claramente el “modelo”, las reglas de constitución de las “cooperaciones reforzadas”, la toma de decisiones a distintos niveles para la “Europa potencia” y la “Europa espacio” y los mecanismos reguladores comunes, con garantías para todos los Estados miembros. La propuesta de Delors, apoyada desde dentro de la Comisión por amplios sectores de su burocracia, y desde fuera por Joschka Fisher, apuntaba a una “federación de estados-miembros”, con un fuerte papel de la Comisión, que vería aumentada sus competencias en el mercado interno, pero con su subordinación estratégica al Consejo, de quién dependería el desarrollo de la política exterior y de seguridad a través de los mecanismos intergubernamentales.

Por su parte, la Comisión Prodi propuso organizar los debates sobre la constitución en tres fases: 1) un período de “reflexión abierta”; 2) una “reflexión estructurada”, con la convocatoria de una convención consultiva que prepararía un borrador de constitución siguiendo el método de debate utilizado para la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales adoptada en el Consejo Europeo de Niza y 3) su discusión final en una Conferencia intergubernamental en el 2004.

La primera fase brilló por su ausencia, a pesar de los fondos gastados por la Comisión, por la falta de interés de los Estados miembros en sacar el debate de los círculos de la burocracia y la academia. La falta de debate, los bloqueos de los estados miembros y la experiencia de la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales llevaron a la Presidencia belga a crear una “comisión de sabios”, compuesta por Delors, Dehane, Amato y Geremek que diseñaría el funcionamiento de la Convención en la “Declaración de Laeken”, aprobada por el Consejo Europeo en diciembre del 2001.

La Convención de 2002-2003

La segunda fase se plasmó en una Convención que, a pesar de los orígenes históricos revolucionarios de su nombre, no tenía nada de representativa. Se trataba de una serie de comisiones de trabajo y un pleno, compuesto por 105

europarlamentarios, miembros de los parlamentos nacionales y representantes de los gobiernos de los 25 Estados miembros y de la Comisión, además de otros 102 suplentes, designados con oscuros criterios. La presidencia recayó en uno de los viejos iconos de la derecha francesa, Valery Giscard d'Estaing, ayudado por Dehane y Amato. Desde el primer momento, los debates estuvieron dominados por las discusiones en el Presidium entre los representantes de los gobiernos y Giscard, que impuso el curioso procedimiento de no votar nunca en la Convención e interpretar él los consensos alcanzados.

A pesar de que la Convención organizó sus trabajos en diez grupos, ocho meses después, en octubre de 2002, sólo dos habían acabado sus informes y la tarea parecía imposible. Pero el Presidium trabajaba desde julio discretamente en lo que se llamó el “esqueleto” de Giscard, que fue distribuido el 28 de octubre. El documento diseñaba la estructura institucional y constitucional, marcaba las líneas generales de acción y procedimiento y las cláusulas generales de aplicación, ratificación y revisión del tratado constitucional.

A partir de ese momento, la dinámica de la Convención cambió. A pesar de las críticas iniciales a Ana de Palacio, la ministra de Exteriores española, por compaginar su cargo y su puesto en la Convención, Francia y Alemania designaron como miembros a sus ministros de Asuntos Exteriores, Villepin y Fischer. Y también hubo cambios significativos en los representantes de Países Bajos, Portugal e Irlanda.

La propuesta de Giscard incluía una clara referencia a la “*gestión federal de ciertas competencias comunes*”. Se dejaba abierto un posible cambio de nombre de la UE. Incorporaba al texto la Carta de Derechos Fundamentales, a pesar de las reticencias en este sentido del Consejo Europeo de Niza. Establecía los tres campos de competencias comunitarias, mixtas y nacionales, aunque con un único sistema institucional que acababa con los tradicionales “tres pilares” creados en Maastricht. Otorgaba al Parlamento Europeo la facultad de censurar a la Comisión y creaba un Congreso de los Pueblos de Europa como una asamblea de representantes de los parlamentos estatales. Incluía ya los elementos centrales de una gobernanza económica neoliberal, incluido el presupuesto cero comunitario y la autonomía del Banco Central Europeo. Pero no entraba en debates centrales como el reparto de votos entre los Estados miembros, acordado en el Consejo Europeo de Niza, o la gestión intergubernamental de la política exterior y de seguridad.

A comienzos de diciembre, la Comisión hizo su propia propuesta. O mejor dicho, sus propuestas. Porque para sorpresa de propios y extraños, además de la comunicación oficial titulada “*Paz, Libertad, Solidaridad*”, que ya había provocado intensos debates internos en la Comisión y era el resultado de un difícil consenso, el periódico *Le Monde* recibió otra propuesta, de contenido mucho más federal, que recibió el nombre de “*Penélope*”. Esta segunda había sido redactada a petición de Prodi por un grupo de altos funcionarios “deloristas”, coordinados por François Lamoureux, y contaba con el apoyo de los comisarios “deloristas” Lamy, Busquen, Schreyer y Diamantopoulou.

De hecho, Prodi había entregado pocos días antes una copia de “*Penélope*” a Giscard, que, al parecer, creyó que se trataba de la posición oficial de la Comisión. Pero en cuanto se reunió ésta, Kinnock encabezó el escándalo contra Prodi, exigiendo una inmediata rectificación. Al día siguiente, Prodi presentó la comunicación oficial al Parlamento Europeo y a la Convención. Giscard aprovechó la ocasión para humillar a los “deloristas”, señalando que el preámbulo de “*Penélope*” –inspirado en el del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero como un homenaje al federalismo de los padres fundadores–, era un documento viejo y sin actualidad, incapaz de servir para el futuro. Y en cuanto a la comunicación oficial de la Comisión, simplemente la ignoró.

Aunque en el juego de poder interno de la Convención, Giscard había marginado de golpe a la Comisión, parte de los elementos propuestos, tanto en la comunicación oficial como en “*Penélope*”, serían recogidos por los Estados miembros pequeños frente a los grandes y por los sectores más federalistas. La Comisión era contraria a la creación de un presidente estable del Consejo, extendía las competencias comunitarias a todos los sectores, incluida la política exterior y de seguridad con el nombramiento de un comisario como ministro de Asuntos Exteriores comunitario, y convertía la doble mayoría simple de países y población, así como la codecisión del Parlamento Europeo y el Consejo, en el mecanismo habitual de funcionamiento de la futura UE.

Los Estados miembros intervinieron rápidamente para recuperar la iniciativa política en los debates. Blair había anunciado su posición el 28 de noviembre en una conferencia en Cardiff. Su visión del futuro de la UE se basaba en gran medida en un borrador de tratado intergubernamental elaborado por el profesor de Cambridge Alan Dashwood. La base de esta propuesta era el doble equilibrio de poderes entre el Consejo y la Comisión, con su doble y distinta legitimidad y responsabilidad (“*accountability*”). Se podía aceptar que el presidente de la Comisión fuese elegido por el Parlamento Europeo y no designado por el Consejo siempre que esa elección escapase “*a las luchas políticas que lo hicieran prisionero de una mayoría parlamentaria*”, es decir, si fuese elegido por dos tercios. Por el contrario, el presidente del Consejo debería ser estable, acabando con las presidencias semestrales rotatorias entre los Estados miembros. Y para ello debería ser designado entre los antiguos miembros del Consejo para períodos largos de varios años, siendo ayudado por presidencias sectoriales de Estados miembros también largas. Era una forma muy directa de defender el funcionamiento de un “directorio” de los grandes Estados miembros y dar legitimidad institucional a las “cooperaciones reforzadas”. La propuesta fue apoyada inicialmente por Aznar y Chirac.

Los Estados miembros pequeños, encabezados por Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, hicieron pública a su vez su posición a comienzos de diciembre, motivados por el temor de que la Comisión, la tradicional protectora de sus derechos institucionales, hubiera quedado marginada en los debates. “*La Unión*

debe tener instituciones comunes fuertes, con una extensión del método comunitario y un reforzamiento de las instituciones que defienden el interés común". Para este grupo de Estados, el presidente de la Comisión debería ser elegido por el Parlamento con una mayoría de dos tercios y confirmado igualmente por el Consejo, invirtiendo el actual procedimiento. Al mismo tiempo se oponían tajantemente a cualquier elección de un presidente del Consejo que rompiera el actual régimen rotatorio.

El debate quedó zanjado en gran parte, sin embargo, con las conclusiones de la Cumbre franco-alemana con ocasión del 40 Aniversario del Tratado de Reconciliación entre ambos países, a mediados de enero. En una muestra de la importancia del eje Paris-Berlín como verdadero motor de la UE, Chirac y Schröder hicieron propio todo un esquema constitucional que acabaría prevaleciendo. Alemania aceptó la idea de un futuro presidente del Consejo por un período de dos años y medio y Francia la elección del presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo. El ministro de Asuntos Exteriores comunitario sería designado por el Consejo, pero ocuparía una de las vicepresidencias de la Comisión, operando en su seno en los temas de competencia comunitaria y fuera en los de asuntos exteriores y defensa, que seguirían siendo de naturaleza intergubernamental. El tratado constitucional incluiría la posibilidad de "cooperaciones asimétricas", se ampliarían las áreas de codecisión Parlamento-Consejo, y, sobre todo, se defendía la necesidad de una "cláusula de solidaridad" europea anti-terrorista, independiente de la OTAN, y de una fuerza militar europea con capacidad operativa propia en todos los terrenos.

Los debates finales y la imposición del consenso

El acuerdo franco-alemán dio un nuevo marco a los debates de la Convención y eliminó de entrada toda una serie de propuestas, como la de un Congreso de los Pueblos de Europa de Giscard. A pesar de la importancia de las cuestiones institucionales planteadas, la Convención no organizó nuevos grupos de trabajo y los debates preparatorios se trasladaron al Presidium.

El 22 de abril, Giscard distribuyó el borrador de los 15 artículos institucionales, que daban cuerpo a una UE gobernada por un "directorio" desde el Consejo Europeo, con un presidente estable, como la "más alta autoridad de la Unión", por encima del Consejo de Ministros, el Parlamento o la Comisión. Sus reuniones serían trimestrales y el presidente del Consejo estaría asistido por un vicepresidente y dos jefes de gobierno, elegidos en régimen de rotación anual, el ministro de Asuntos Exteriores comunitario y los presidentes del ECOFIN y del Consejo de Justicia y Seguridad. El Consejo Europeo, dotado de esta estructura permanente, se convertía en un auténtico gobierno europeo al que quedaría subordinada la Comisión, por mucho que su legitimidad quedará

anclada en el Parlamento. El Consejo de Ministros, por su parte, conservaba a la vez sus funciones legislativas y ejecutivas. La propuesta de Giscard había incorporado en la práctica a las posiciones franco-alemanas la visión británica de un sistema institucional paralelo y contrapuesto, con doble legitimidad.

El borrador institucional de Giscard incluía también la extensión de la doble mayoría (de Estados miembros y de población) como método habitual de toma de decisiones comunitario, rompiendo el complejo reparto de poder y votos para establecer la mayoría cualificada y las minorías de bloqueo decidido en el Consejo Europeo de Niza.

Cuando el pleno de la Convención se reunió el 30 y 31 de mayo, Giscard se encontró con un auténtico frente del rechazo organizado por los representantes de los gobiernos español y danés, Dastis y Christophersen, que sumaba además, por razones muy diversas de intereses nacionales distintos, a Gran Bretaña, Polonia, Austria, Irlanda, Lituania y Chipre, en defensa del respeto estricto de las decisiones institucionales del Consejo Europeo de Niza. Este frente del rechazo pro-Niza bloqueó de hecho el funcionamiento del Presidium y obligó a Giscard, con la ayuda de Dehane y Amato, a construir su propio bloque de alianzas, haciendo concesiones a los otros componentes de la Convención.

El primer objetivo de Giscard fue integrar plenamente en el consenso franco-alemán a Gran Bretaña, aceptando todas las “líneas rojas” de su representante Peter Hain: las competencias fiscales y de seguridad social seguirían siendo nacionales, sin intentos de armonización; no a la función legislativa del Consejo con la doble mayoría, para conservar su naturaleza intergubernamental; no comunitarización de ningún aspecto de la política exterior y de seguridad; e incorporación del texto de la Carta de Derechos Fundamentales solamente si iba acompañada de un título interpretativo que diese prioridad en estos temas a la jurisdicción estatal y evitase cualquier extensión de derechos sociales desde las leyes comunitarias.

El siguiente paso fue ganar a los Estados más pequeños y a la propia Comisión, buscando un nuevo equilibrio en el reparto de competencias e institucional. El Parlamento sería elegido por sufragio universal, pero no con un criterio proporcional, sino “decrecientemente proporcional” para favorecer a los Estados miembros más pequeños. El número de diputados sería de 736 y no los 700 de la primera propuesta. Elegiría al presidente de la Comisión por mayoría simple y no cualificada. El presidente de la Comisión elegiría a su vez, de entre ternas presentadas por los Estados miembros, a trece comisarios, teniendo en cuenta el principio de rotación, y daría su “acuerdo” al ministro de Asuntos Exteriores designado por el Consejo Europeo, sometiéndose la Comisión a un voto de confianza del Parlamento. El Consejo Europeo no sería un rival de la Comisión y no dispondría de una estructura permanente, aunque sí de un presidente, elegido por dos tercios, y la doble mayoría como mecanismo de procedimiento consistiría en una mayoría de Estados y 3/5 (en vez de 2/3) de la población de la Unión.

Con estas concesiones y el fuerte respaldo de las grandes naciones y de los tres grupos políticos mayoritarios del Parlamento Europeo, Giscard disolvió el frente del rechazo en las dos primeras semanas de junio sin ceder en la revisión de los acuerdos del Consejo Europeo de Niza y aislando completamente a España y Polonia. El “consenso” se impuso finalmente el 13 de junio entre brindis de champagne y los acordes de la *Oda a la Alegría* de Beethoven.

El Consejo Europeo de Salónica acogió el 19 y 20 de junio el borrador de la Convención como “una buena base” para los debates de la Conferencia intergubernamental. Tras agradecer a Giscard, Dehane, Amato y todos los miembros y suplentes participantes sus esfuerzos, saludó la utilidad de la Convención, irónicamente sin duda, como “un foro de diálogo democrático”.

¿Una rebelión de Shays en la UE?

Los debates en la Convención han estado marcados desde el principio por el antecedente de los debates de la Convención de Filadelfia de 1787 que redactó la Constitución de los EE UU. Conviene quizás recordar su contexto histórico.

Tras el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la visión liberal atomista de la separación de poderes y del estado de la sociedad civil, se escondía una defensa de un gobierno supra-estatal lo suficientemente fuerte como para defender con barreras proteccionistas el nuevo mercado americano, el cobro ejecutivo de las deudas privadas y públicas acumuladas en la guerra de independencia, la leva de impuestos para mantener un ejército permanente capaz de expropiar las tierras indias y mantener la esclavitud.

En el verano de 1786 las distintas revueltas campesinas comenzaron a organizar en milicias a los veteranos de la guerra de independencia para defenderse de la incautación de las fincas por impago de deudas y para exigir la impresión de papel moneda de los parlamentos estatales elegidos por sufragio censitario entre las oligarquías locales. La represión de las revueltas y el intento de juzgar a sus dirigentes en Massachussets extendió como la pólvora la rebelión, dirigida por Daniel Shays, hasta que la intervención del Ejército la aplastó en sangre y fuego. La impronta de la *Rebelión de Shays* en la Convención de Filadelfia fue tan determinante que los allí reunidos limitaron la celebración de elecciones a la Cámara de Representantes, pero con leyes electorales distintas decididas en cada Estado por los mismos parlamentos estatales que designarían los senadores federales y los compromisarios para la elección del presidente y del Tribunal Supremo.

La ratificación de la Constitución de Filadelfia encontró importantes resistencias populares, sobre todo en Nueva York. Para defenderla, Madison, Hamilton y Jay publicaron en la prensa una serie de artículos, conocidos como los “*Papeles Federalistas*”, en la que recordaban que el objetivo de un gobierno federal era mantener la paz en una sociedad civil recorrida por conflictos causados por “*la distinta y desigual distribución de la propiedad. Aquellos que*

son propietarios y aquellos que no lo son siempre han tenido intereses distintos en la sociedad (...) En una república grande es más difícil que puedan descubrir su fuerza y actuar solidariamente quienes así sienten". La necesidad de dotar a la constitución independentista de una legitimidad popular llevó en 1791 a adoptar una serie de enmiendas conocidas como la Carta de Derechos. Pero no por casualidad los principios de la Declaración de Independencia –“*el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad*”– se convirtieron en la Constitución de Filadelfia en el “*derecho a la vida, la libertad y la propiedad*”.

Desde la huelga del sector público en Francia de 1995, Europa ha vivido su propia versión de la *Rebelión de Shays* con las movilizaciones contra los Consejos Europeos, como expresión de la globalización capitalista, y la resistencia sindical contra las reformas neoliberales impulsadas desde Bruselas, primero en nombre del Pacto de Estabilidad y después de la flexibilidad del mercado laboral y la reforma del sistema de pensiones. *The Economist* (28 de junio del 2003) dedicaba un artículo, con el título “Los peligros de la Europa política”, a comentar esta revuelta social que era el escenario de fondo de los debates de la Convención europea:

“Los manifestantes, a pesar de toda la violencia que les acompaña y la naturaleza incoherente de sus quejas, tienen una agenda reconocible. Como dicen sus pancartas, están contra la ‘Europa del Capital’ y a favor de la ‘Europa social’ (...) Aunque muchos puedan menospreciar a los manifestantes como una banda de drogatas y anarquistas, las encuestas sugieren que sus exigencias de una ‘Europa más social’ cuenta con un amplio respaldo. En un reciente Eurobarómetro, el 90% de los ciudadanos europeos dice que ‘la lucha contra la pobreza y la exclusión social’ debe ser la primera prioridad de la Unión, frente al 63% que considera que debe ser el ‘éxito de la moneda única’ o el 31% que piensa que debe ser la ampliación (...) ¿Qué ocurriría si los votantes dejan de aceptar que las reformas impulsadas por la UE son ejercicios tecnocráticos para el bien común europeo y empiezan a verlos como decisiones muy políticas sobre las que tienen muy escaso control democrático? (...) Hay indicios de que esto es precisamente lo que está empezando a ocurrir. A comienzos de los 90, el 72% de los ciudadanos europeos consideraba que la pertenencia de su país a la Unión era ‘algo bueno’; hoy sólo lo piensa el 54%”.

La clave para que esta revuelta incipiente tome cuerpo y se proyecte en la vida política europea con su propio programa independiente, depende sobre todo de que se rompa la cadena ideológica que ha mantenido atados a sectores importantes del sindicalismo europeo a las Comunidades Europeas desde sus inicios y a la UE después. Una cadena cuyo eslabón más débil es el mito de un “modelo social europeo” basado en el pacto y la cogestión social con los grandes sindicatos de la CES, que sería el fundamento del estado de bienestar europeo y que permitiría una redistribución mayor de la renta en la UE en comparación con EE UU o Japón. Y la conclusión estratégica de ese mito –cuyo origen histórico es la correlación de fuerzas real tras la lucha antifascista en la II Guerra Mundial en los 50 y la oleada

de luchas a finales de los 60 y comienzos de los 70– es que es posible nuevas reformas sociales si, con la presión social y el *lobby* en la UE, se pueden comunitarizar los temas sociales de la misma manera que ya hoy lo están los temas económicos y utilizar a la UE de gran nivelador social en Europa.

La convicción de que esta estrategia reformista del “sindicalismo europeísta” ha fracasado y es un callejón sin salida comienza a extenderse en el marco de las reformas neoliberales impulsadas por la Comisión y que han tenido como respuesta una cadena de huelgas generales sectoriales y nacionales en un número muy importante de Estados miembros. El debate actual en el IGM alemán, el sindicato más poderoso de la UE, tras el fracaso de la huelga por la extensión de los derechos laborales a la antigua Alemania del Este, es todo un símbolo de esta situación. Porque para impulsar las reformas neoliberales del “Espíritu de Lisboa”, los gobiernos, sean conservadores o social-demócratas y verdes, necesitan dividir al movimiento sindical y cooptar a un sector importante de la burocracia sindical para evitar la generalización de la resistencia. Las dificultades de Schröder en Alemania son conocidas, pero también las de Blair en Gran Bretaña, donde en los últimos años distintas corrientes de izquierda sindical están desbancando a las direcciones “blairistas” en las elecciones sindicales, o en Austria, que ha vivido su primera huelga general en 50 años, para no hablar de Italia o Francia.

En este sentido, el borrador de constitución de la Convención cierra las puertas a cualquier esperanza de que la estrategia del “sindicalismo europeísta” sea factible como estrategia, porque hace ley el modelo de gestión económica neoliberal y sigue confinando en los estados miembros la cuestión social. La FGT de Bélgica ya ha denunciado este carácter de la Constitución Europea y ha llamado a una campaña de defensa de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores europeos.

Los temas europeos han estado como tal ausentes en buena parte de las preocupaciones del movimiento contra la globalización capitalista. Pero en los próximos meses, bajo la intensa propaganda de los medios de comunicación, subvencionados por los estados miembros y la UE, los ciudadanos europeos se van a ver inevitablemente confrontados a un debate político sobre la Constitución. A comienzos de octubre, Berlusconi inaugurará la CIG en Roma; en mayo tendrá lugar la ampliación a los nuevos estados miembros de Europa Central y, pocos días antes, se pretende cerrar la CIG. En junio, tendrán lugar las elecciones al nuevo Parlamento Europeo y en una parte importante de los estados miembros se convocarán referendos sobre la Constitución Europea.

El movimiento de resistencia tiene su propia cita en el Foro Social Europeo de París-Saint Denis, en el mes de noviembre, que debe servir de catalizador para crear una visión conjunta y alternativa de otra Europa posible a la de la UE neoliberal. La tarea de la izquierda alternativa europea es impulsar todos estos debates y contribuir a la confluencia en las luchas de resistencia contra la Europa del Capital de todos los movimientos sociales y sindicales, para poner la bases de una Europa de los trabajadores y los pueblos.

Ante el “Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”

Por una refundación democrática y social de la Unión Europea

Contribución de Javier Aguilera, Manuel Colomer, Oskar Matute, Manuel Monereo, María Dolores Nieto y Jaime Pastor al debate en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida

La Convención, después de 15 meses de trabajo, ha entregado al Consejo Europeo de Salónica su borrador de Constitución Europea. En un momento histórico caracterizado por la hegemonía internacional de los EE UU, impuesta por la fuerza de las armas en Irak, y una nueva oleada de reformas neoliberales y recortes de los derechos de los trabajadores en la Unión Europea, el borrador de Constitución responde plenamente a los intereses y al proyecto de las clases dominantes europeas. No podía ser de otra forma porque tanto la composición de la Convención como su mandato para elaborar el borrador de la Constitución habían sido dictados por los jefes de Estado y de gobierno europeos sin tener en cuenta la soberanía popular.

Los juegos de palabras no pueden ocultar la verdadera naturaleza de este documento. No se trata de una auténtica Constitución Europea, surgida del poder soberano de los pueblos de Europa. Es un mero Tratado constitucional, elaborado y otorgado por los gobiernos de los estados miembros en una Conferencia intergubernamental, en la más pura tradición liberal conservadora, como cuando las coronas europeas interpretaban los intereses de sus súbditos y limitaban generosamente sus propios poderes otorgándoles cartas de derechos.

Un tratado constitucional anti-democrático y neoliberal. El borrador de la Convención no da respuesta al profundo “déficit democrático” que existe en la Unión Europea desde su creación, sino que lo consolida. Incorpora la Carta de Derechos Fundamentales, pero los limita en el Título VII exclusivamente a las leyes de ámbito europeo y sin que éstas puedan tener precedencia sobre las leyes nacionales existentes en ningún caso. Esta “línea roja”, impuesta por el gobierno Blair, hipoteca en el futuro cualquier intento de extender a toda la Unión Europea los derechos democráticos y sociales más avanzados que puedan adoptarse en los Estados miembros más progresistas o a nivel comunitario. La Unión Europea seguirá construyéndose de manera asimétrica por lo que respecta a sus derechos y libertades.

No es casualidad que la palabra “federación” desapareciera del artículo primero en las primeras sesiones de la Convención. La referencia a la voluntad de los “ciudadanos y los Estados” del art. I-1-1 no puede ocultar que las competencias de la Unión surgen del principio de “atribución” de los Estados miembros, que son los únicos que las poseen en el proceso constituyente (art. I-9-2). La referencia a los “pueblos” de Europa, que aparecía en el primer borrador discutido en la Convención, ha desaparecido de la versión final, se proclama el respeto a la “integridad territorial” de los Estados y con todo ello se quiere impedir cualquier posibilidad de ejercicio del derecho de autodeterminación, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ni siquiera se reconoce el derecho a decidir libremente la

propia identidad de los ciudadanos en el contexto de la UE, porque el art. I-8-1 impone la doble nacionalidad de los actuales Estados miembros y de la Unión.

El borrador constitucional de la Convención define claramente las funciones de los Estados miembros reduciéndolas en sus obligaciones ante sus ciudadanos a los elementos básicos de la concepción liberal: el mantenimiento de la ley y el orden, la seguridad interna y la defensa de su territorio (art. I-5-1). Cualquier referencia a la “democracia social avanzada” –recogida en distintas Constituciones de después de la II Guerra Mundial como consecuencia de la resistencia antifascista–, como la del art. I-3-3, que fue en su primera redacción la expresión de la presión de la Confederación de Sindicatos Europeos (CES), ha quedado desfigurada por el veto de la patronal europea (UNICE) al exigir la inclusión de la condicionalidad de una “alta competitividad”.

De hecho, el borrador constitucional pretende hacer ley todo el programa de reformas neoliberales impulsadas en nombre del “Espíritu de Lisboa” y contra el que se han movido cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas por la justicia global y sindicalistas en toda Europa. El art. I-3-2 insta un mercado único en el que la “competencia sea libre y sin distorsiones”; el art. I-3-4 garantiza el libre comercio; el art. I-4-1, la libertad de circulación de las personas, pero sobre todo de comercio, servicios, capital y establecimiento; mientras que el art. I-11-3 otorga competencias a la Comisión para promover y coordinar la política económica; para las políticas sociales utiliza solamente un condicional porque las competencias seguirán siendo de los estados miembros; el art. I-29-3 atribuye al Banco Central Europeo plena autonomía para conducir la política monetaria común fuera de todo control de los ciudadanos; el art. I-53-2 establece por ley el equilibrio presupuestario y el presupuesto cero, prohibiendo a la UE endeudarse de cualquier forma, mientras que seguirán siendo exclusivamente los Estados miembros quienes decidan el monto del presupuesto europeo, sin participación del Parlamento Europeo

Manteniendo estrictamente las competencias de los Estados miembros por lo que se refiere a la política exterior y de defensa de la Unión, el borrador de Constitución de la Convención introduce a la UE en la “globalización armada”. De entrada subordina la política exterior y de defensa de la UE a la hegemonía de EE UU a través de la OTAN (art. I-40-2). Crea un Ejército europeo con “capacidad operacional”... de acuerdo con los “principios de la Carta de las Naciones Unidas”, los mismos que fueron utilizados por Bush, Blair y Aznar para justificar el ataque a Irak, violando el art. 51 de la misma Carta de la ONU, que establece de manera expresa la competencia general del Consejo de Seguridad en materia de paz y guerra. ¿Por qué no se cita el art. 51 de la Carta de la ONU o se incluyen formulas de rechazo a la guerra como la que aparece en la actual Constitución italiana? Pero el borrador va más allá y convierte en ley la lucha antiterrorista a través del art. I-42 en nombre de la solidaridad comunitaria.

El entramado institucional de la UE, que garantiza la Europa potencia en su política exterior y de defensa, la “Europa fortaleza” frente a los emigrantes y la Europa neoliberal frente a sus trabajadores, queda sometido en el borrador de la Convención a un Consejo y a un Consejo de Ministros, éste ejecutivo y legislativo a la vez, que establecen un funcionamiento dominado por los intereses de las grandes potencias europeas, el llamado “directorío”, en la Unión. La igualdad de los Estados miembros queda sacrificada no sólo ante la nueva presidencia del Consejo, designada por los jefes

de Estado y de gobierno entre sus antiguos colegas, sino también en la propia Comisión, que hasta ahora era la garantía misma de esa igualdad. El borrador recoge asimismo en forma legal las “cooperaciones reforzadas” entre una parte de los Estados miembros, creando una Unión asimétrica y con distintas velocidades y derechos. El “método comunitario”, basado en los equilibrios internos institucionales establecidos por el Tratado de Roma, es la primera víctima de la “alta competitividad”.

Otra Europa es posible: por una refundación democrática y social de la UE. El borrador de Constitución de la Convención –en cuya redacción han participado los partidos neo-liberales y social-liberales, pero no la izquierda transformadora y alternativa europea–, no es aceptable en sus actuales términos.

Los próximos meses exigen de la izquierda alternativa europea, de los sindicatos, organizaciones no gubernamentales y populares, de los movimientos sociales un especial esfuerzo para defender sus reivindicaciones y exigir una refundación radical democrática y social de la Unión Europea. La Constitución que apruebe la Conferencia Intergubernamental de jefes de Estado y de gobierno no puede ser la que recoge el proyecto y los intereses de las clases dominantes europeas y niega los de los trabajadores y los pueblos.

Como han puesto de manifiesto las inmensas manifestaciones por la justicia global de los últimos años, así como la resistencia de los trabajadores y sus sindicatos contra los recortes de sus derechos, pensiones y en defensa de los servicios públicos, otra Europa es posible y necesaria.

Por una Europa pacífica, frente a la Europa potencia. Proponemos que se incluya entre los primeros artículos de la Constitución Europea, uno en el que la UE “*rechaza la guerra como instrumento de agresión contra las libertades y la independencia de otros pueblos y como medio de resolver las disputas internacionales*” y considere ilegal cualquier acción militar que viole el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo creemos necesario que la Constitución Europea recoja el principio de desmantelamiento unilateral de las armas de destrucción masiva en territorio de la UE y proponga un proceso de desarme multilateral controlado y verificado por la ONU. La Unión debe apostar por la disolución de los bloques y alianzas militares, en una interpretación estricta del art. 51 de la ONU. Asimismo, la UE debe establecer entre sus objetivos de política internacional impulsar un nuevo “constitucionalismo global”, mediante un Contrato Democrático de los Pueblos, para el establecimiento de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la lucha contra las enfermedades contagiosas y las epidemias.

Por una Europa democrática y de los pueblos, frente a la Europa del “déficit democrático”. Creemos imprescindible restablecer la soberanía popular y su poder constituyente en lo referente a todos los temas europeos, sin limitarla a los estrechos límites de los estados miembros actuales. La Constitución Europea debe recoger el principio de autodeterminación, con el que se crearon una parte importante de los estados miembros después de la I Guerra Mundial y en coherencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene que recoger la igualdad jurídica de todas las lenguas europeas, sin

perjuicio de que fije una o varias lenguas francas para el funcionamiento interno de sus instituciones. Debe otorgar el poder legislativo exclusivamente al Parlamento Europeo y a un Congreso de los Pueblos europeos, constituido por representantes de los parlamentos estatales, nacionales y regionales de la UE. Los parlamentos estatales, nacionales y regionales deben tener derecho de veto, en base a una mayoría cualificada, para la no aplicación en su territorio de cualquier medida o ley comunitaria, abriéndose automáticamente un proceso de arbitraje constitucional, siempre que ello no atente al respeto a derechos fundamentales individuales y colectivos. La Comisión debe responder ante el Parlamento Europeo, que debe tener plenos poderes para, a través de un voto de censura, destituir al presidente de la Comisión o a cualquiera de los comisarios en cualquier momento. El Consejo Europeo mantendrá con la Comisión el derecho de iniciativa legislativa pero no las funciones legislativas y su misión será la coordinación de la aplicación de las directrices comunitarias en los estados miembros decididas por la Comisión. Deberá haber una regulación flexible de las distintas fórmulas de democracia participativa, entre ellas la iniciativa legislativa popular y el derecho de referéndum, así como propuestas que faciliten la intervención ciudadana en los procesos de deliberación y decisión y en el control y revocación de cargos públicos, exigiendo la mayor transparencia informativa y la depuración inmediata de responsabilidades en cualquier caso de corrupción.

Por una Europa de la igualdad en la diversidad, frente a la Europa de los derechos desiguales y xenófoba. Exigimos la eliminación del Título VII que condiciona e interpreta la Carta de Derechos Fundamentales y crea ciudadanos europeos de primera o de segunda sin establecer una igualdad de derechos para todos. Por la garantía plena de todos los derechos para todas las personas residentes en la UE, independientemente de su procedencia, incluido el reconocimiento de su derecho a la ciudadanía tras un plazo máximo de cinco años de estancia en cualquier país de la UE. Por la incorporación plena a la Carta de Derechos Fundamentales de todos aquellos derechos establecidos legalmente por sentencia en el Tribunal de Justicia Europeo.

Por una Europa basada en la igualdad plena de las mujeres y en su autonomía, frente a la Europa discriminatoria y patriarcal. Exigimos el compromiso de remover todos los obstáculos –en la política, en los distintos ámbitos de trabajo y de vida cotidiana– que impiden avanzar hacia un proceso real de emancipación de las mujeres, así como a favor del reconocimiento de la libertad de opción sexual, mediante medidas como la incorporación en la Constitución de la norma de paridad de géneros en los principales órganos comunitarios, la lucha contra la feminización de la pobreza y el reparto del trabajo doméstico, el derecho a la contracepción y al aborto y el reconocimiento de plenos derechos para las parejas de hecho.

Por una Europa social, frente a la Europa neoliberal del “Espíritu de Lisboa”. La Constitución Europea debe recoger un nuevo contrato social y ciudadano que asegure la satisfacción universal de las necesidades básicas de los ciudadanos europeos a través de servicios públicos como la seguridad social, la salud, la educación, la justicia, la energía, el agua, las telecomunicaciones y la vivienda. Aunque la responsabilidad sea de los estados miembros, la Constitución debe asegurar la obligación de la UE de intervenir en aquellos

campos en los que los estados miembros no puedan garantizar unos derechos básicos iguales para todos los ciudadanos europeos independientemente de su lugar de residencia para asegurar el pleno ejercicio de su ciudadanía.

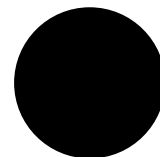
A este fin, la Unión debe ejercer una política redistributiva a favor de los sectores de la población y las regiones más deprimidas. El Parlamento y el Congreso de los Pueblos Europeos deberán fijar un presupuesto comunitario, hasta el 5% del PIB comunitario, capaz de hacer frente a estas obligaciones con contribuciones directas de los estados miembros y estableciendo impuestos europeos. Estos impuestos europeos serán preferentemente sobre las energías no renovables, un 1% sobre la venta secundaria de títulos y bonos y sobre las transacciones internacionales de capitales y los cambios de divisas. El Banco Central Europeo dependerá del Parlamento Europeo, que aprobará las directrices económicas propuestas por la Comisión y cada cinco años someterá a referéndum unas orientaciones estratégicas económicas y sociales comunitarias para asegurar la más amplia participación ciudadana en los presupuestos.

El Pacto de Estabilidad, que hoy ahoga la economía europea y pretende hacer recaer las consecuencias de la recesión sobre los trabajadores, será sustituido por un Pacto por un Desarrollo Sustentable y un Nuevo Pleno Empleo, que tenga en cuenta también la necesidad de repartir y compartir los distintos tiempos de trabajo y de vida, liberando a la Constitución de los límites artificiales del presupuesto “cero”, del actual “modelo” de precarización del trabajo asalariado y de la concepción productivista de la economía, permitiendo así al Parlamento y al Congreso europeos recuperar el control sobre la economía europea para asegurar un auténtico “modelo social europeo”. Para ello se creará un Fondo Europeo de Solidaridad que funcione como un estabilizador automático frente a las crisis y recesiones, que podría llegar a un 1% del PIB comunitario. La Constitución Europea recogerá por ley la semana de 35 horas en toda la UE, el principio de igual salario para igual trabajo y el derecho a un ingreso suficiente para todos y todas.

Por una Europa dispuesta a hacer las paces con el planeta Tierra, frente a la Europa del “Prestige” y del despilfarro. La Constitución Europea debe recoger un contrato generacional para la producción y distribución de energía, incluido el cierre de todas las centrales nucleares en la UE ligado a un plan europeo de sustitución y seguridad energética y de fomento de las energías renovables. También promoverá una nueva cultura del agua, con el objetivo de lograr un equilibrio y racionalidad del uso y renovación de los ecosistemas acuáticos. Apostará por el cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto y la reducción de los niveles de gases contaminantes y contribuirá a crear las condiciones para un nuevo modelo de producción, transporte y consumo que sea compatible con la supervivencia del planeta.

Por una Europa laica, frente a la imposición de una Europa “cristiana”. Frente a una derecha que pretende imponer un trato discriminatorio a favor de las instituciones religiosas cristianas y generar un rechazo de las otras culturas y religiones presentes en Europa, reivindicamos la laicidad plena y el respeto de la diversidad dentro de la Unión.

Somos ciudadanas y ciudadanos europeos: ejerzamos nuestros derechos



No nos hacemos ilusiones. A pesar de lo moderado de la mayoría de las reivindicaciones aquí expuestas, que son sólo un hilo conductor de las exigencias democráticas y sociales básicas de movimientos sociales y sindicatos, para defender nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos europeos necesitamos una amplia movilización de educación y debate popular. La izquierda alternativa europea no puede sustituir la soberanía constituyente de los pueblos europeos, pero puede y debe volcarse en una campaña por otra Europa posible que desemboque en las elecciones al Parlamento europeo y los referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea que adopte definitivamente la Conferencia Intergubernamental.

Frente a la Europa conservadora, liberal o social-liberal que defiende los derechos de las clases dominantes europeas, la izquierda alternativa europea debe reconstruir la alianza más amplia con los movimientos sociales, con los sindicatos y organizaciones ciudadanas en general, y definir un bloque social, cultural y político lo más amplio posible que aspire a la hegemonía en la defensa de los derechos democráticos y sociales de los ciudadanos y ciudadanas y los pueblos de la Unión Europea. La celebración del próximo Foro Social Europeo en noviembre en París-Saint Denis tiene que ser una gran oportunidad para avanzar por ese camino.

19 de julio de 2003

Italia

Rifondazione: un debate sobre los movimientos sociales

Gigi Malabarba, Flavia D'Angeli, Franco Turigliatto

[El pasado 24 de junio ha tenido lugar un importante debate de reorientación en la dirección de Rifondazione Comunista, que en muchos de sus términos es parecido a los que se está planteando la izquierda alternativa en el Estado español. Tras el fracaso en el referéndum por la extensión de los derechos laborales a las pequeñas empresas y contra la flexibilización del despido del 15 y 16 de junio, que no tuvo la participación necesaria del 50% de los electores, Rifondazione se ha interrogado por los límites del “movimiento de movimientos”, por el problema de su representación política y por la política de alianzas necesaria para derrotar a Berlusconi. Por un lado, Rifondazione, contra todos los otros partidos políticos, ha sido capaz de sumar 10.300.000 votos a favor del “sí”, pero no han sido suficientes para alcanzar la victoria. Por otra, es más necesaria que nunca una política de alianzas que permita responder a las aspiraciones del movimiento de derrotar a Berlusconi y dar una salida electoral a las gigantescas movilizaciones de estos años, sin subordinar al mismo tiempo el movimiento a las políticas neoliberales del centro –izquierda, representado en Italia por el Olivo.

El debate ha sido inevitablemente tenso y duro. Quienes puedan leerlo directamente en italiano harán bien consultando los diferentes resúmenes de las intervenciones en la página de Liberazione <http://www.liberazione.it/documenti.asp>. En algunos momentos han aparecido viejos resabios heredados del eurocomunismo y del PCI que pedían de manera prioritaria una alianza con el Olivo, subordinando la autonomía del proyecto político que representa Rifondazione y sus propuestas de lucha contra el neoliberalismo a las exigencias electorales del centro-izquierda. Por otro lado, ha hecho falta un análisis más objetivo sobre la potencialidad del “movimiento de movimientos” y también de sus límites, sobre todo a la hora de construir una alternativa política que vuelque en un cambio en la correlación de fuerzas las movilizaciones en la calle.

La síntesis alcanzada supone sin duda un paso adelante y muestra la madurez política que ha ido construyendo Rifondazione, plasmada en una resolución aprobada por una amplia mayoría de la dirección. El texto que reproducimos aquí fue la aportación realizada al debate por la corriente Bandiera Rossa, que participa en la dirección del PRC y que votaron favorablemente las conclusiones, de las que queremos reproducir un párrafo significativo: “En otoño hay que construir una campaña de movilización que ligue las cuestiones sociales a la defensa de la ampliación de los espacios democráticos. Quienes se han movilizado en la batalla del referéndum –tanto las fuerzas organizadas como los casi 11 millones de electores que han votado “sí”– representan un punto de partida en el que apoyarse(...) Las expectativas de lucha a nivel de masas contra la política del centro-derecha y las prácticas concretas alternativas surgidas del movimiento permiten avanzar y abordar la fase que se abre y dar respuesta a las exigencias de una alternativa planteando el problema de un nuevo tipo de relaciones entre el PRC y lo que ha representado hasta ahora el Olivo, proyectando una alternativa programática en torno a los contenidos surgidos de los conflictos reales y de la oposición social. No se trata de una relación programática entre dos sujetos, sino de una relación entre numerosos socios, abierta a los movimientos en la forma en la que los propios movimientos decidan que quieren participar”. G. Buster]

El referéndum ha representado, sin duda, una derrota. Pero el verdadero problema no es limitarse a los meros datos numéricos o a hacer una interpretación funcional de acuerdo con los diversos proyectos políticos, sino comprender el significado real de esta derrota, analizar su origen, sus consecuencias en la actual fase política y sus implicaciones para el futuro. Solamente si se analiza desde esta perspectiva –que va desde el pasado hasta el futuro– se podrá dar una explicación más definida a esos “misteriosos” once millones de votos que, contra las consignas de todos los aparatos del país –patronales, políticos y sindicales, a excepción de la CGIL–, han apoyado nuestra batalla

El referéndum y la fotografía de la correlación de fuerzas social

Esta afirmación se daba por supuesto hasta ahora en los comentarios y en las valoraciones escuchadas, que han pasado por encima sin considerarla (pero también paso lo mismo con las predicciones sobre el resultado del referéndum: nadie había previsto una participación inferior al 30%). Sin embargo, el núcleo estratégico de la cuestión está ahí. Basta con prestar atención a las recientes derrotas obreras: el fallido convenio colectivo del metal; la FIAT; miles de despidos en diversas fábricas; la adopción del “paquete Biagi”, la ley 30 y con ella una nueva oleada de precarización formidable. Podemos añadir el convenio del sector público, que ha sido malo, el reflujo en las movilizaciones por la escuela pública –después de una fase de grandes movilizaciones– y el posterior retroceso en tantos otros sectores neurálgicos para la lucha social. La propia “astucia” desplegada por los ayudantes de vuelo de Alitalia es una muestra de la dificultad de organizar una huelga en el sector del transporte. En un marco más general hay que tener en cuenta la larga fase de reflujo, derrotas y dificultades que han caracterizado los últimos veinte años, marcados por la política de pacto social, la subordinación a las prioridades empresariales y la afirmación de un “liberalismo moderado”. En suma, veinte años de derrotas que han reducido a la clase obrera a una situación de minoría social de la que todavía no ha conseguido salir. La misma posición de la CGIL –que ha apoyado el referéndum, pero sin poner toda la carne en el fuego y sobre todo sin modificar su estrategia de pacto social, como demuestra su reciente acuerdo sobre la competitividad con la patronal de Cofindustria–, no ha ayudado a salir de este impasse. Para no hablar de la DS y, sobre todo, de las dificultades con las que tropieza Rifondazione para revertir esta tendencia.

La derrota ¿es la última de una onda larga o la primera de una nueva fase de reconstrucción? Pero a pesar de este contexto, diez millones y medio de personas han salido de sus casas el 15 y 16 de junio y han depositado su “sí” en las urnas. Habrá a quién esta dinámica le parezca un ejercicio de autoconsolación, o insuficiente, o incluso para muchos haya sido un aliento de esperanza. Pero es imprescindible analizar este fenómeno –y para ello será muy útil

una radiografía más “científica” del voto— para intentar entender si la derrota es la última de una larga serie o si por el contrario indica algo nuevo. Esta es la cuestión decisiva. Si inscribimos el voto del 15 de junio en el triste calendario caracterizado por la derrota de la FIAT de los 80, y en consecuencia, del referéndum sobre la escala móvil de 1985, podemos construir una serie histórica que será imprecisa porque no tendrá en cuenta las luchas recientes, el ciclo de movilización del movimiento, el cambio generacional en las fabricas y toda una serie de otros factores. ¿Hubiera sido posible convocar este referéndum hace unos años? ¿Hubiera tenido la suficiente credibilidad y capacidad de trabajo el frente de fuerzas que lo han apoyado?

En realidad, es más probable que el referéndum sea sólo la primera derrota de una nueva fase de recuperación que está surgiendo en medio de grandes dificultades. Un análisis de los referéndum de los últimos siete años —en la mayoría de los casos derrotados— muestra que la participación en los mismos —gracias al esfuerzo de movilización de los proponentes— se ha situado siempre alrededor de los 11 millones de votantes. En el 2000, en el referéndum para la abolición de la cuota proporcional, los “sí” han sido “sólo” 11.637.000. El resultado del 15 de junio, en este sentido, no es muy distinto de los de otros referendos.

Pero sí es muy diferente en que por primera vez tenía un contenido de clase muy concreto. El debate sobre la precariedad ha estado en la calle, en las masas, mientras que hace solo unos años se hubiera reducido a los círculos políticos y sindicales. El referéndum ha sido capaz de revertir una tendencia y, a la vista del resultado, ha registrado, más que provocado, un hecho social. Su resultado debe colocarse en una nueva fase social marcada por la correlación social de fuerzas negativa, pero en la que es posible después de mucho tiempo hablar de luchar contra la precariedad, de extender los derechos, de luchar contra el neoliberalismo.

Para algunos, el resultado del referéndum es una forma de medir el estado de la lucha de clases, un coeficiente que registra la nueva densidad de la resistencia a las políticas neoliberales y, en este caso, de la determinación a extender un derecho básico. Y esta tasa es aún insuficiente, baja. Depende, para ser más elevada, de la capacidad de relanzar la movilización, de la eficacia de la acción de nuestro partido, de un análisis atento sobre el papel y la naturaleza del movimiento y, sobre todo, de una acción específica en el plano social que tenga efectos sobre las relaciones de fuerzas desfavorables.

Fuerza y límites del movimiento y el binomio unidad/radicalidad. Ya hemos señalado los aspectos positivos de los 11 millones de votos en el referéndum. Pero todos creíamos que el escenario sería distinto. Nadie había imaginado una tasa de participación inferior al 30%. Y es necesario preguntarse por qué. Por el momento puede ser útil referirse a dos claves de interpretación: el papel del movimiento y el funcionamiento del mecanismo unidad/radicalidad.

En el Partido, en su periódico, flota la idea de que el movimiento había agotado su propio ciclo. Los datos del referéndum señalan un voto que viene esencialmente de la “zona roja”, de los viejos sedimentos de la DS y del PRC (es decir, del PCI).

Ninguno, al parecer, del movimiento. En realidad las cosas son más complejas. Por lo que se refiere al movimiento, hay que decir que aparecen claramente unos límites que hemos tratado de subrayar en otras ocasiones, a veces solos: el movimiento se mueve en una onda simbólica, en la crítica ética a lo existente, apurándose en torno a algunos acontecimientos, pero sin traducirse en un movimiento cotidiano con mecanismos de radicalización, capaz de batallar por ejes definidos, carente de objetivos declarados y sin un programa con el que obtener la victoria. Y es así en Génova, después de Génova, en Florencia o en Porto Alegre. Hoy esa realidad es patente: en el voto del referéndum, el “pueblo del Foro Social” forma parte, sin duda, de los 11 millones (sobre todo en la participación más alta en las grandes ciudades), pero no produce efectos en cadena, no establece relaciones fuertes en el territorio, en los puestos de trabajo, en otros lugares que permita “contaminar” al resto de la población. Desde este punto de vista, al movimiento le queda aún mucho por hacer, sobre todo en su capacidad de actuar en profundidad, de echar raíces. Se juega en ello su supervivencia.

Es necesario, además, señalar otros límites y dificultades que no son tan aparentes:

- a) No hemos aún reflexionado a fondo sobre el estallido de la guerra de Irak y sus efectos sobre el movimiento por la paz. A pesar de las grandes manifestaciones del 15 de febrero, la guerra en Irak ha tenido lugar, aunque los hechos nos hayan dado la razón y no haya paz en Oriente Medio. Pero no hemos analizado aún los efectos sobre el “pueblo de la paz”, unos efectos sin duda contradictorios porque aunque las banderas pacifistas siguen colgadas de muchos balcones, la guerra ha dejado de ser una prioridad en la agenda política.
- b) No estamos en presencia de un movimiento similar al de los años 70, socialmente fuerte, enraizado en las fábricas, que se apoye en aparatos de masas (que podían ser criticados, pero que eran utilizados con frecuencia, como los sindicatos), inserto en un contexto “progresista” de la lucha de clases en el que aún no había tenido lugar la gran derrota histórica de fin del siglo XX.
- c) El movimiento, por historia y tradición, no “deposita” votos. No lo hace casi nunca y además no es su función principal. En los años 70 la primera victoria electoral sólo tuvo lugar siete años después del 68, y su principal beneficiario fue el PCI y no la izquierda revolucionaria. El movimiento representa la contestación al sistema, la apertura de nuevos horizontes, son precursores de nuevas instituciones democráticas, dotadas de mayor legitimidad que las existentes: anuncian un cambio de sociedad. Si no, serían solamente *lobbies* o carne de cañón de operaciones políticas sin escrúpulos.
- d) Los mecanismos de politización están aún en proceso de desarrollo en el movimiento. De una parte están los activistas más regulares, los militantes “históricos”, un voluntariado difuso; de otro, la dimensión de masas del movimiento. Hasta los años 80, el contexto era capaz de combinar en su seno movi-

miento y política, sociedad e instituciones, diversas generaciones. Pero ha saltado por los aires y los sujetos sociales viven hoy mucho más encerrados en sí mismos, haciendo mucho más difícil que se reconozcan los unos a los otros.

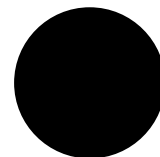
Este es uno de los méritos más importantes del movimiento antiglobalización haber permitido este reconocimiento, haber producido una síntesis que es siempre superior que la mera suma de todos los factores. Así ha sido en Génova, en Florencia, en Porto Alegre, el 15 de febrero y en la lucha contra la guerra. Todos ellos momentos importantes en la reconstrucción de una perspectiva histórica alternativa, de la que no se puede prescindir si se quiere superar la derrota de los 90. El movimiento contra el neoliberalismo tiene el mérito histórico de haber dado una nueva legitimidad a la hipótesis de que “otro mundo es posible”, convirtiéndose en una alternativa al neoliberalismo y la guerra. Pero como hemos señalado antes, estos grandes eventos no pueden compararse con la realidad de un movimiento cotidiano que sigue siendo difuso y gaseoso.

Por lo que se refiere al problema de la relación entre unidad y radicalidad, éstas han sido hasta ahora las características del movimiento, cuya magnitud y claridad de contenidos han permitido que se convirtiera en un fenómeno de masas. En el referéndum, hay que reconocerlo, ha faltado la unidad. No se puede, sin embargo culpar de ello a los promotores del referéndum, que han sido capaces de sumar nuevas fuerzas. Si el centro-izquierda hubiera sido capaz de recoger la oportunidad de revisar la herencia de la política neoliberal de sus años en el gobierno, y hubiese aceptado dar continuidad a la convergencia alcanzada en el movimiento contra la guerra, la batalla por el referéndum se hubiera beneficiado del efecto de atracción producido por la unidad de fuerzas tan diversas, lo cual habría sido un factor determinante para dar credibilidad a esta batalla. Pero para ello el centro-izquierda hubiera tenido que ser un centro-izquierda distinto del actual.

Unidad y radicalidad son sin lugar a dudas la fórmula de la victoria. Al menos eso ha demostrado el movimiento. Pero debemos insistir en este punto: no se puede eludir la radicalidad en nombre de la bandera de la unidad, como propone el DS, y el Olivo en general, que en este referéndum ha traicionado su posición social, escorándose del lado de la patronal de Cofindustria. Desde este punto de vista, el referéndum ha mostrado nítidamente una polarización entre las alianzas de clase de una parte y las alianzas políticas de otra. Y ambas no coinciden. Este dato representa el dato más importante de desequilibrio e incertidumbre de la política italiana. Una de las tareas futuras será remediar esta distorsión y reconstruir la sintonía entre las necesidades de clase y el sujeto político dispuesto a luchar por ellas.

Perspectivas políticas

De esta última consideración se deduce la principal indicación para una orientación política. Ante todo, la necesidad de restablecer una conexión entre la cuestión social y la dimensión política. Una de las responsabilidades más



graves del Olivo y del DS no es tanto la de haberse posicionado por el “no” en el referéndum, como la de haber alentado la no-participación en el mismo, privilegiando la autonomía de la política frente a la cuestión social. Y a la inversa, la fuerza del referéndum consistía en proyectar en la política, intentando incidir en ella, la cuestión social. Por ello, el referéndum era potencialmente la mejor salida de tres años de movilizaciones: utilizar un instrumento de alto contenido participativo, el movimiento de la participación democrática podía cambiar concretamente las condiciones de vida de millones de trabajadores y ciudadanos.

Priorizar la acción social. Esta conexión se establece, sobre todo, con la prioridad que hay que otorgar a la oposición social en el país en función de su incidencia sobre algunas relaciones de fuerzas desfavorables. Tras el voto en el referéndum hay que lanzar una segunda vuelta en forma de ofensiva social y de lucha contra el gobierno y Cofindustria. El “Comité por el Sí” y las estructuras del movimiento deben trabajar una plataforma común contra el gobierno. En esta plataforma tres cuestiones deben ser centrales:

- la oposición a la Ley 30 y a la reforma del mercado de trabajo, en nombre de una defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores contra la precariedad absoluta que quieren imponer los patronos con el beneplácito del gobierno,
- la defensa del Estado social, aquí y ahora, aliándose con las luchas que tienen lugar por el mismo motivo en Europa,
- una batalla por la defensa y la extensión de los derechos democráticos, en primer lugar de los emigrantes, como medida de una sociedad en la que tanto las leyes como los reglamentos deben ser iguales para todos y todas.

Tejer una red contra la precariedad. Pero las plataformas no bastan, también son necesarios instrumentos adecuados. El “Comité por el Sí”, la Mesa contra la Precariedad del FSE, han sido lugares que han permitido que diversas fuerzas y subjetividades sociales, sindicales y políticas hayan unido sus fuerzas contra la precariedad en una lucha común. La precariedad es hoy una característica central de la lucha de clases y el principal proyecto de las patronales italianas e internacionales que, tras haber impuesto la paz social, intenta ahora recortar los derechos fundamentales. Esta es la razón de que hayamos hablado del “precario-masa”, para subrayar una condición que no es reducible a una categoría social específica sino que afecta a todo el mundo del trabajo, incluidos los desempleados. Si existe un nuevo proletariado, un nuevo movimiento obrero, su lucha fundacional es el combate contra la precarización de la propia existencia. Para ello el sindicato es indispensable, aunque el sindicato solo no es suficiente: es necesario intervenir dentro y fuera de la producción, en el plano de las luchas y de las instituciones, unificando formas y experiencias muy diversas. Una manera puede ser contruir redes en las que converjan experiencias diversas

con objetivos comunes: una campaña común en la que converjan diferentes inspiraciones y experiencias, un método que hemos experimentado en la batalla por el referéndum y que es necesario recuperar y relanzar.

No a la huida al centro-izquierda. La cuestión social, la acción para cambiar la relación de fuerzas entre las clases, es la verdadera prioridad política en esta fase. La oposición social es el instrumento que debe permitir medir la capacidad de hablar al país, de dar una perspectiva inmediata a los 11 millones de personas que han votado “sí” en el referéndum y atraer a todos aquellos que no han votado pero que se interesan por la lucha por los derechos. Ésta es la prioridad y las relaciones con el centro-izquierda deben subordinarse a la capacidad de construir un proceso de lucha, que permita medir los puntos de divergencia y acuerdo. No tenemos dudas sobre la naturaleza del centro-izquierda, cuya dirección depende ante todo del reconocimiento de la patronal sea italiana o internacional (Cofindustria y FMI). Al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de unidad que anida en amplísimos sectores populares ansiosos de derrotar a Berlusconi. Pero esta exigencia necesita unidad y radicalidad. La única manera de hacerla vivir en concreto, más allá de pasillos secretos de la alquimia política, es la oposición social, un horizonte creíble de luchas sociales, sindicales y políticas. Y este horizonte debe abrirse ya, sin esperar a nuevas convocatorias electorales. Éste es el desafío que tienen delante el centro-izquierda, el movimiento, los sindicatos, las fuerzas alternativas: forjar la unidad de lucha en torno a una plataforma común. Sólo el desarrollo de esta estrategia, adhiriéndose a las reivindicaciones populares y de clase, puede dar forma a una alianza para derrotar a Berlusconi. De otra manera se corre el riesgo de caer en una huida “politicista”, poco útil a la hora de reforzar el movimiento y una perspectiva alternativa.

Por ello, la consigna no es el “acuerdo programático de gobierno con el centro-izquierda”: porque si adoptásemos esta consigna estaríamos velando la verdadera naturaleza del Olivo. Si invertimos la prioridad, nos arriesgamos a frenar la lucha social, subordinándola a las tácticas en la política institucional.

Para impulsar, apoyar y dar eficacia a la oposición política y social al gobierno de la derecha se debe, por el contrario, apostar a reforzar la convergencia de las distintas fuerzas que han apoyado el referéndum, haciéndolas confluir al mismo tiempo en un movimiento de lucha contra las medidas antisociales, la guerra y el neoliberalismo, sin “abandonarlo” de prisa y corriendo, tras la derrota, para volcar toda nuestra atención en el centro-izquierda.

La izquierda alternativa, un nuevo sujeto político. Del referéndum emerge también otra indicación. La escisión entre lo social y lo político, que ha hecho fracasar una batalla justa, mientras otros alegaban la “especificidad” sindical, ha caracterizado, aunque sea de otra forma, las vivencias del movimiento estos últimos años. Para recomponer esa unidad es necesario un

proyecto ambicioso. La debilidad, o mejor aún la deriva moderada de las principales estructuras del movimiento obrero, partidos y sindicatos, hace que la lucha sea más fragmentaria y dispersa y que sea más difícil que llegue a sedimentarse “políticamente”, entendiendo por político aquí la comprensión de la naturaleza de la lucha de clases. Y por lo tanto hace que el peligro de empantanarse en la esfera institucional sea doble, con los únicos horizontes posibles de convertirse en la izquierda del centro-izquierda, por una parte, y de un extremismo movimientista que haga de la práctica el único elemento identitario, rehuendo dar solución al problema del consenso.

Esta dificultad nos vuelve a situar en la cuestión de la existencia de un partido de clase que sea a la vez referente político, impulsor de luchas, de radicalidad social y de una nueva vitalidad social que hoy se necesita más que nunca. Y plantea las dificultades y debilidades de Rifondazione Comunista. El instrumento que necesitamos hoy para afrontar este problema debe ser capaz de un mestizaje entre lo político, lo social y lo sindical, que los instrumentos del movimiento obrero de los 90 han mantenido separados. ¿Es posible que de la experiencia de la lucha por el referéndum y de la vivencia del movimiento en estos últimos años surja una subjetividad de este tipo que sirva a la vez de elemento de resistencia política y de recomposición social? El ser o no ser de la izquierda alternativa depende de cómo se resuelva este problema. ¿Puede Rifondazione Comunista poner a disposición del nacimiento de una subjetividad más amplia que la de esos 11 millones del “sí”, su fuerza, sus ideas y su organización, de manera que tenga la fuerza suficiente para poder salir victoriosa en las duras pruebas de la lucha de clases que nos esperan en Italia y en Europa?

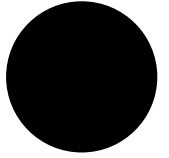
Roma, junio del 2003

Traducción: G. Buster

Argentina

Una perspectiva 'desde abajo' sobre el gobierno Kirchner

Daniel Campione



A menos de un mes de su asunción como presidente, K. (Kirchner) ha despertado expectativas no sólo en el conjunto de la población, lo que es habitual que ocurra en los comienzos de gestión, sino en un conjunto de intelectuales, periodistas y 'formadores de opinión' de talante más bien progresista, en gran parte no proclives a identificarse con políticos del peronismo, o al menos largamente distanciados de las propuestas políticas del Partido Justicialista, al que Néstor Kirchner pertenece.

Como candidato, el actual presidente desplegó una campaña opaca aún en el marco de una elección que se destacó por la mediocridad y la falta de entusiasmo.

Sin embargo, sus primeras manifestaciones en el sentido de gobernar menos pegado al poder económico, algunos gestos de identificación con la generación de 1973 (su asunción vino a coincidir con el 30 aniversario de la de Héctor Cámpora [*presidente considerado de la "izquierda peronista"*]), el duro rechazo a los avances del diario *La Nación* para condicionarlo, el anuncio de que desplazaría a varios generales de la cúpula militar, bastaron para generar un cambio de clima, del escepticismo generalizado a cierta expectativa.

Una vez asumido el mando, las expectativas crecieron de inmediato. Desde el gesto de mezclarse con 'la gente' durante las ceremonias de asunción, hasta algunos tramos de su discurso apuntados a diferenciarse de Duhalde, Menem y De la Rúa, la cordial relación con los visitantes Chávez, Castro y Lula, fueron el pretexto para comenzar a pensar, y a decir, que se iniciaba una etapa diferente en el país. Si bien nadie en su sano juicio podía siquiera dudar de que todos los gravísimos problemas de la sociedad argentina seguían allí, la voluntad de creer fue más fuerte que cualquier cauto raciocinio.

"K. era un presidente diferente", se dijo, y todos sus actos de gobierno comenzaron a ser leídos en clave de espíritu democrático y progresista. El 'que se vayan todos' pareció comenzar a pertenecer a un pasado lejano, y se inició la celebración del encuentro de un camino nuevo para la democracia argentina. Las advertencias sobre lo prematuro de tales apreciaciones no han sido lo más habitual.

Mirar hacia delante

K., tal vez con toda conciencia, removi6 sentimientos e identificaciones amortiguadas hacía tiempo. Perteneció a la camada de los que eran muy jóvenes en los años 70, a la misma generación que la mayoría de los desaparecidos y presos de la dictadura. Se manifiesta hoy una tendencia en los hombres y mujeres de edad similar a identificarse con él, a partir de que se atrevió a reivindicar esa pertenencia, si bien con un claro

‘beneficio de inventario’ que la acomoda a los límites permisibles por el clima de la época actual para los dirigentes ‘expectables’. La idea de una evolución armónica y no traumática de la coyuntura de mayo de 1973, eje central del libro de Miguel Bonasso [*escritor, periodista que acaba de ser elegido diputado nacional en listas afines a Kirchner*] *El presidente que no fue*, ha conferido a la nascente experiencia Kirchner el aura de una suerte de realización atrasada de aquél imposible. El impulso a ‘mirar hacia adelante’ y confiar en el futuro, la exhortación de mudar el ‘dolor país’ a ‘placer país’, ha sido oficiada por periodistas e intelectuales más o menos ‘progresistas’ más o menos de izquierda, desde las más variadas tribunas. ‘Confiemos en Kirchner’ parece ser la voz de orden de estos días, el escueto conjuro que parece aventar a un largo cuarto de siglo de pesadilla.

En todo caso, el ‘clima’ diferente que se vive hoy debe muchísimo a las protestas piqueteras que tomaron fuerza a partir de los episodios de Cutral-Co, al 19 y 20 de diciembre, a la virtual sublevación general que atravesó el verano de 2002 entre asambleas, recuperaciones de fábricas y asedio a los bancos.

De todo esto han tomado nota algunos dirigentes políticos (pocos) y entre ellos sin duda, Kirchner. Gobernar sin represión y sin profundizar el desprestigio de la dirigencia, no es posible si se mantienen los parámetros de la acción estatal y de la práctica de la política en la sociedad argentina.

Quizás la mejor forma de interpretar los primeros movimientos del presidente, desde el desplazamiento de los militares, al embate contra el presidente de la Corte Suprema, la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), la conducción del PAMI [*obra social de los jubilados, que les fue robada por medio de una privatización, encabezada por el ex-diputado menemista Barrionuevo. NT*], a la

Luchando contra la impunidad

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas por los gobiernos de Alfonsín y Menem, y los indultos otorgados por éste, aseguraron la impunidad total para los crímenes de los militares genocidas argentinos. Poderosas luchas populares reclamaron su derogación y finalmente el gobierno de Kirchner impulsó que el Parlamento las anulara.

En el Estado Español organismos de derechos humanos batallaron durante años con ese objetivo y parte de esa pelea fue la detención de los marinos Scilingo y Cavallo y el pedido de extradición de 46 militares implicados en los crímenes de la dictadura. En agosto, varios miembros de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) prestaron testimonio ante el juez Garzón en la causa contra Cavallo. Y al mismo tiempo el juez solicitó la extradición de los 46 que fueron detenidos en Argentina, pero el gobierno del PP negó el pedido, con lo cual el juez argentino Canicoba los puso en libertad. Pero la lucha continúa y la presión popular reclama el castigo a los culpables. Así lo manifiesta, con hermosas palabras, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

“Siete veces el juez Rodolfo Canicoba Corral nos explicó –durante la reunión que los organismos de derechos humanos mantuvimos con él para reclamarle que no

política reticente hacia algunas ‘privatizadas’, es la de integrarlos en una tentativa, con ciertos visos de seriedad, de recomponer la hegemonía en Argentina, de suturar el enorme desprestigio de la dirigencia. Para ellos se buscan blancos tan reconocibles como vulnerables, desde Nazareno a Barrionuevo, de Brinzoni a Eurnekian [*personajes típicos de la corrupción pública menemista. NT*] de modo de sintonizar con una operación de ‘limpieza’ reclamada por el sentido común, sin romper lanzas, al menos por ahora, con el núcleo mismo del poder.

Legimitimidad de ejercicio

Por tanto la orientación inicial del gobierno puede inscribirse en el intento de construir una legitimidad de ‘ejercicio’ para un gobierno que no la tiene de origen, y en un plano más ‘macro’ la tentativa de reconstruir lo que los politólogos convencionales llaman ‘governabilidad’, y que tiene más que ver con la recomposición de una hegemonía, de un consenso que se proyecte más allá de los límites de la clase dominante. La recomposición de un consenso tan deteriorado como el argentino actual requiere un armado complejo, en el que los propios capitalistas deben realizar concesiones, ciertos ‘sacrificios’ en aras de volver a tornar verosímil la idea de que las instituciones y el gobierno están orientados al ‘bien común’ y no a los intereses de los poderosos, verosimilitud que no se consigue sólo con el discurso o con medidas ‘superestructurales’ sino produciendo ciertas alteraciones en la distribución del ingreso, el acceso al trabajo, el poder relativo de las organizaciones de las clases subalternas.

pusiera en libertad a los asesinos— que no podía hacerlo en el marco del juicio de extradición.

... Sabemos cuanto quema la picana en la vagina o en los testículos. Cómo duelen los golpes en el estómago. Cuánto desespera el submarino. Sabemos lo que es el hambre, el frío y el miedo. Sabemos las marcas que deja haber parido vendada y atada. Sabemos el dolor infinito de ver, de oír cómo se llevan a nuestros compañeros...Y sabemos por qué la picana, por qué el submarino, por qué los golpes, por qué nos robaron nuestros hijos, por qué se llevaron a los compañeros. Porque queríamos y luchamos por un país distinto

... Y sabemos, ahora con un saber más intenso, más profundo, más rabioso, más urgente que en los 70, cómo duele la desesperanza de los jóvenes, el clamor de los jubilados, el hambre de los desnutridos, la angustia de los desocupados, el frío de los sin techo. Y cómo ofende la prepotencia, el dinero, la insolencia, la impunidad de los poderosos.

... Una vez más los jueces nos hacen sentir todo el peso de la injusticia. Sin embargo, como nuestro saber también es hoy el de cientos de miles, sabemos que las grietas que trabajosa y lentamente fuimos abriendo en el muro de la impunidad, están a punto de derrumbarlo y bajo sus escombros quedarán todos los que contribuyeron a construirlo”.

Construcciones de ese tipo suelen requerir o un acuerdo muy sólido al interior de las clases dominantes, o un aparato estatal con autonomía y autoridad suficientes para imponer determinadas soluciones aun contra la resistencia de fuertes sectores capitalistas. No está clara la posibilidad de contar con uno o con otro.

Por eso K. procura reinstaurar, en sus primeros discursos y actos, la idea de que tiene, si no una confrontación por delante, al menos disidencias con los titulares del poder económico y con lo más corrupto y antipopular de las instituciones políticas.

El inicio 'progresista' del gobierno de Kirchner tiene mucho que ver con una tentativa de lectura medianamente lúcida sobre la crisis integral, 'orgánica' de la sociedad argentina. La economía, destrozada por un largo proceso de desarticulación agravado por una recesión prolongada, con niveles de pobreza y desocupación tan inéditos para el país como difíciles de revertir.

K ha hecho un conjunto de gestos que tienen una orientación común: la búsqueda de revertir la imagen de un aparato estatal orientado sólo hacia los poderosos, de una dirigencia política sólo preocupada en perpetuar su poder y usufructuar sus cargos, sin otra relación con los sectores subalternos que el clientelismo, la manipulación y la cooptación de dirigentes sociales desaprensivos y corruptos.

De unas instituciones (parlamento, justicia, fuerzas armadas, policía) vueltas 'hacia adentro' dominadas por su lógica de corporación, y dispuestas a depredar el presupuesto público y captar recursos privados sin preocuparse por ninguna medida de racionalidad ni de legalidad.

No se trata de transformar ninguna relación social fundamental (eso no encuadraría en el 'capitalismo serio' cuya construcción eleva a objetivo central de su acción), pero sí de construir un consenso algo diferente, que limpie el terreno de las sobreactu-

Panorama electoral

Se están sucediendo elecciones en la Capital y provincias, en distintas fechas del año, como parte de la política diseñada por el ex-presidente Duhalde para distraer y dividir a los votantes, además de aprovechar el gobierno de Kirchner las peculiaridades locales para cimentar su poder e influencia nacional.

En agosto tuvieron lugar las elecciones para jefe de Gobierno (alcalde) y legisladores (concejales) de la ciudad de Buenos Aires. La participación fue similar a las generales de mayo, y el número de votos en blanco o nulos igualmente bajo, casi irrelevante, lo que muestra el poco eco de los llamados a la abstención o voto en blanco.

Los dos candidatos mas votados que pasaron a segunda vuelta son el actual alcalde, Ibarra, con el apoyo de Kirchner, y Macri, antiguo menemista, (y presidente de Boca!) habiendo obtenido éste una ventaja de 4 puntos. Los dos se atribuyen carácter de peronistas y marchan a una segunda vuelta posiblemente muy reñida. Finalmente, venció Ibarra, el candidato auspiciado por Kirchner.

aciones del gobierno Menem y posteriores. Las grandes 'reformas estructurales' están realizadas, recortar sus bordes, emproljar su juridicidad, atenuar sus peores efectos, se vuelve posible, y todo indica, necesario en términos políticos.

Algunos desafíos

Los movimientos de Kirchner, hasta ahora, acatan el horizonte de lo posible instaurado en la Argentina post-dictadura, pero desafían algunos aspectos de los nuevos límites, aun más estrechos, que se introdujeron en los años de Menem.

Las fuerzas populares tienen por delante la posibilidad de forzar una apertura mayor, que logre avanzar sobre los tabúes estatuidos ya en años de Alfonsín, pero eso a condición de no esperar que los cambios 'caigan del cielo'. La posición no debería ser de apoyo ni de expectación, sino de acción consciente y constante para exigir mayor profundidad en los cambios, la inducción de un carácter democrático de los mismos que rebase los estrechos marcos institucionales imperantes; el poner de acuerdo el discurso con los hechos, la presión para que se cumpla y se supere cualquier promesa que se haga.

El ciclo de insubordinación generalizada abierto el 19 y el 20 de diciembre, no es sostenible a mediano plazo para ningún poder. Un objetivo básico para el gran capital es desactivar las protestas, y sobre todo neutralizar el cuestionamiento universal expresado en el 'que se vayan todos', y volver a algún tipo de 'normalidad'.

Una 'normalización' posible era la de Menem y López Murphy, la continuidad abierta del proceso de concentración capitalista, con el componente de represión que fuera necesario para 'apaciguar' el conflicto social.

K., con el acompañamiento más ambiguo de amplios sectores del Partido Justicialista, apunta a impulsar otra propuesta: abandonar la línea de agresión más o menos abierta a las clases subalternas, y construir una alianza al interior de las

En cuanto a la presencia de la izquierda en la primera vuelta, lo más notable fue la votación de Zamora que consiguió un 12.5 %, superando su resultado del 2001 cuando logró un 10 %. Esto lo ubica como tercera fuerza en la capital. El resto de la izquierda, que acudió dividida como ya es una pésima costumbre, perdió votos y escaños. Así Política Obrera perdió el único concejal que tenía e IU perdió uno de los dos, con el 1.26 % del total. También los Humanistas (que en Argentina recogen votos de izquierda) perdieron el puesto que tenían.

Resumiendo, 8 concejales de Zamora y 1 de IU es el grupo de la izquierda en la Legislatura porteña, pero si se le hubieran unido los votos dispersos de otros grupos de izquierda, se elevaría el voto izquierda en la Capital a un 16 %, sin contar con el efecto acumulativo de una lista unificada. Es para tener en cuenta ese potencial electoral de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, sin olvidar claro, que es el distrito más politizado del país. Y que hablamos de una izquierda más allá de la socialdemocracia.

Daniel Pereira

clases dominantes que permita desarrollar otra política, que pueda apoyarse en una mayor intensidad en la utilización del trabajo que evite la desocupación, y una orientación al mercado interno que convierta el alza de salarios en un beneficio.

El problema es que el desarrollo capitalista avanza en otra dirección. Y la voluntad de los empresarios también: se ha vivido todo un proceso que busca consolidar un nuevo patrón de acumulación entre cuyos rasgos fundamentales está la 'flexibilización' del trabajo y la precarización de la fuerza laboral, para permitir una mayor explotación y reducir los 'costos' de la conflictividad social. No hay mucha disposición a volver atrás en ese camino. Sí a la posibilidad de bajar los costos de los servicios privatizados o reducir los márgenes de ganancias del sistema bancario, no mucho más. Y esto quiere decir bastante poco para desocupados que cobran ciento cincuenta pesos de subsidios, trabajadores con salarios más que deprimidos, jubilados condenados a la ruina perpetua, la inmensa masa de pobres que por añadidura ven destruirse el sistema público de salud y educación... no está claro cómo se incluye la solución de estos problemas, los más desgarradores, en la agenda del nuevo gobierno.

" Un país normal "

Por su lado, el poder económico ya se adelanta a 'marcar la cancha', a poner en blanco sobre negro que entiende por 'un país normal', otra consigna que forma parte de la retórica del nuevo gobierno.

Clarín del 15 de junio trae un conjunto de 'reformas' exigidas por el Departamento del Tesoro norteamericano, que coinciden con las demandas del FMI y atañen a reestructuración del sistema bancario (léase privatización o al menos 'pérdida de protagonismo' de lo que queda del sistema bancario estatal), renegociación de la deuda, incremento de las tarifas, derogación de todas las limitaciones a las ejecuciones hipotecarias y a las quiebras, ajuste fiscal en las provincias, mayor apertura económica. En fin, la continuidad y profundización del ajuste fiscal y de las reformas de libre mercado, de las políticas inauguradas con fuerza en la década de los 90'.

Y la negociación iniciada con el FMI promete seguir en esa misma línea, mas allá de algún gesto amable y autocrítica parcial 'para la galería'. Y el gobierno se manifiesta dispuesto a sentarse a negociar, a imitar a Lula y no a Chávez, como le han prescripto algunos voceros del *establishment*.

Frente a ese cuadro habría que matizar el espíritu de 'luna de miel' con el nuevo gobierno, separar la propia voluntad de creer, de las razones reales para la confianza.

Pareciera que las expectativas han bajado tanto, que muchos se lanzaron a festejar la posibilidad de que Argentina pudiera volver a ser 'normal'.

Y entonces la pregunta obvia ¿cuál es la 'norma' de esa normalidad?:

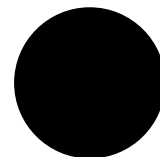
¿Una economía que crezca, aunque aumente la explotación y las diferencias sociales?

¿Un gobierno que no sea escandalosamente corrupto, aunque sus decisiones favorezcan a los grandes empresarios y a los acreedores?

O acaso la norma en este mundo de hoy no es también el dominio cada vez mayor del capital transnacionalizado, que precariza y despide trabajadores en el mundo entero, que arrasa con las culturas locales, destruye el medio ambiente, y destruye mediante la guerra áreas de la periferia.

La fragmentaria madeja de organizaciones sociales, políticas y culturales que han protagonizado la resistencia a partir de la segunda mitad de los 90, tienen que construirse un papel en el mantener las expectativas en alto, en no acotar sus esperanzas a lo que un eventual mejor manejo del aparato estatal y el poder político pueda deparar.

Un gobierno dispuesto a dejar de ‘bombardear’ sistemáticamente el nivel de vida de las mayorías y empeñado en conseguir bases de sustentación más amplias que las del clientelismo y la asistencia, a hacer ‘política’ de alguna otra manera que la vergonzosa administración de lo existente de los últimos años, debería ser un estímulo, crítico, de talante opositor, pero estímulo al fin, para conseguir una nueva relación de fuerzas, para volver a elevar las expectativas, para sacar los ejes de la discusión del interior de las clases dominantes. Quizás esas oportunidades lleguen a constituir lo más importante de esta nueva experiencia.





PRIVATIZAMOS

TUDO

A 100



Brasil

El avance de la reforma agraria en Brasil

Luiz Felipe Nelsis

La reforma agraria es un mandato previsto en la Constitución Federal y una acción que estructura un modelo de desarrollo capaz de distribuir renta y garantizar la generación de trabajo y renta a las amplias masas empobrecidas del campo. Desgraciadamente, nunca los gobiernos brasileños asumieron realmente un compromiso con su realización.

El pasivo agrario heredado por el gobierno Lula es gigantesco, principalmente en lo que se refiere a la infraestructuras de los asentamientos. De las más de 500.000 familias asentadas entre los años 1995 y 2002, el 90% no tienen abastecimiento de agua, el 80% no disponen de energía eléctrica y de acceso a carreteras, el 57% pudieron acceder a créditos para vivienda y el 53% no recibieron ningún tipo de asistencia técnica. El acceso a la tierra es sólo el primer paso para una reforma agraria fuerte y de calidad. Es necesario asegurar a los asentamientos las condiciones necesarias para la producción y la autosostenibilidad. Misión que el Estado brasileño no cumplió hasta hoy.

Para hacer viable un nuevo modelo de reforma agraria, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) desplegó desde comienzos de año una política en dos frentes: primero, garantizar un conjunto de políticas agrícolas propias para la agricultura campesina, capaz de darle condiciones de sustentabilidad económica, y en segundo lugar, una política masiva y cualificada de asentamientos.

En el primer aspecto, el gobierno Lula, a través del MDA, lanzó el mayor y más completo plan para la agricultura campesina que ha existido en Brasil. Aumentamos de 2 a 5,4 billones de reales el total de recursos para la agricultura campesina, renegociamos la deuda de más de 850.000 agricultores; instituímos un seguro para la protección del pequeño agricultor damnificado por las pérdidas de la zafra debidas a causas climáticas; creamos líneas de crédito específicas para mujeres, jóvenes, agroecología y agricultura forestal, entre otras, además de generar un ambicioso programa de compras del gobierno federal que garantiza al pequeño agricultor un precio mínimo y garantías de comercialización.

En el segundo aspecto, el gobierno se enfrentó desde el comienzo a obstáculos mucho más resistentes. La lucha por la propiedad y el poder rural en Brasil produjo un entramado legal repleto de protecciones a latifundio y obstáculos para la realización de una verdadera transformación agraria. Así, la Constitución brasileña que establece el mandato de realización de la reforma agraria, establece también la prohibición de la expropiación de propiedades por debajo de quince módulos rurales (medida de dimensión de áreas rurales, que varía en las diversas regiones del país), la prohibición de la expropiación de propiedades, incluso por encima de esa dimensión, que sean productivas; la indemnización

integral según el valor de mercado, tanto de la tierra como de las instalaciones que en ellas hubiere. O sea, a diferencia de todas las experiencias de reformas agrarias masivas que ha habido en el mundo, la legislación brasileña condiciona la compra de la tierra para su utilización en asentamientos.

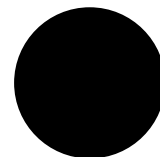
De este modo, el más importante condicionante para la masificación de la reforma agraria pasó a ser la disponibilidad financiera del Estado para soportar el peso de las expropiaciones. Ante la crisis fiscal brasileña, es aún mayor la exigencia de capacidad gerencial y política para generar alternativas que preserven el compromiso del gobierno Lula con la reforma agraria. Desde comienzos de año, el MDA ha buscado diversas alternativas para la obtención de tierras capaces de responder a la demanda social brasileña. El registro de las tierras públicas ocupadas indebidamente por terratenientes, la localización y el rescate para el sector público de tierras “*devolutas*” [*tierras que no tienen propietario definido o que son del Estado, pero frecuentemente están ocupadas por terratenientes. NT*], el acceso a la tierra de los devedores da uniao +[*empresarios deudores del Estado y cuyos bienes son confiscados; entre estos bienes hay grandes extensiones de tierra; la propuesta es destinarla a asentamientos de trabajadores rurales. NT*] y, lo más importante, la retirada de los gastos motivados por la obtención de tierras del concepto de gasto con impacto en el resultado primario /*.

Desde el inicio de esta difícil tarea quedaron claros los límites técnicos y gerenciales del equipo que estaba al frente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Elegido por el propio ministro al inicio del gobierno, el presidente del Instituto, Marcelo Resende, no correspondió a las expectativas que lo llevaron al cargo. Transcurridos siete meses de gobierno, era inevitable que el Ministerio hiciera una evaluación del trabajo realizado, el cual mostró un perfil ejecutivo débil y premioso en el INCRA y concluyó en que era necesaria y urgente una nueva dirección en el Instituto. Frente a la situación límite del campo y ante el compromiso de realizar la reforma agraria, el ministro Miguel Rossetto decidió sustituir al presidente que él mismo había nombrado unos meses antes. Fue elegido para sucederlo Rolf Hackbart.

Hackbart, uno de los dirigentes más antiguos y respetados de Brasil en temas agrarios, estudió economía en la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS). Trabajó en la Secretaría de Agricultura del Estado, donde conoció a Joao Pedro Stédile, con el que inició una larga y valiosa militancia común en el área agraria. Posteriormente, trabajó como economista y educación popular en el Centro de Asesoría Multiprofesional (CAMP) y participó en la primera ocupación de tierras de Brasil post-dictadura, en el latifundio Anoni. Tras varios

*/ Entre las condiciones exigidas por el FMI al gobierno Lula está alcanzar un superávit fiscal primario (excluyendo los pagos ocasionados por la deuda pública) del 3,75%; el gobierno Lula ha elevado unilateralmente este compromiso hasta el 4,25%. Esta medida ha sido criticada dura y unánimemente por todos los economistas de izquierda que han opinado sobre esta materia [*N. de T.*].

años de trabajo en esa ONG en los tres Estados del Sur del país, fundó el Departamento Sindical de Estudios Rurales (DESER) y en 1991 asumió la asesoría agraria del grupo parlamentario del PT en el Parlamento Federal, en donde permaneció diez años, hasta que pasó a ocupar el cargo de director del Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) en el gobierno del PT en Río Grande del Sur.



Carta de Via Campesina para Lula

Señor Presidente
Cancún, 12 de septiembre de 2003

La Vía Campesina Internacional, organización que aglutina a unos 60 millones de personas del campo en el mundo entero, quiere expresar la más profunda preocupación por el acoso militar del cual está siendo objeto el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, cuya sede en Sao Paulo ha sido cercada por la policía desde hace varios días y que, además, arroja ya el saldo del arresto de cinco dirigentes de los 11 amenazados con mandato de prisión, que se suman a decenas de trabajadores y trabajadoras sin tierra encarcelados en el país en este año.

Para nuestra organización, que sustenta su propuesta en la justicia social, los derechos humanos y la soberanía alimentaria, donde las personas del campo puedan vivir con dignidad, la propuesta de una reforma agraria integral, como la reivindicada por el Movimiento Sin Tierra, es una condición indispensable para garantizar el propio mantenimiento del campo como entidad social, que está siendo amenazado por la avidez de las corporaciones transnacionales y los grandes capitales.

Es también motivo de nuestra preocupación que estas acciones antidemocráticas, que ponen en entredicho el sustento democrático y de derecho con los cuales se identifica su país, se expresen ahora que usted, un luchador por los derechos de los trabajadores, gobierna el país.

Para nuestra membresía de los cinco continentes, reunida en Cancún (México) hoy 12 de septiembre de 2003, es inadmisibles que en su país y bajo su gobierno, se esté agudizando la tendencia a la criminalización de movimientos sociales, que actúan en pos de la obtención de los derechos humanos integrales para las personas del campo.

Esperamos tener una respuesta que explique a los y las campesinas del mundo el por qué en Brasil y bajo su gobierno se ha agudizado la arremetida contra los trabajadores rurales sin tierra, al punto que en lo que va del año se registran ya cuarenta y seis trabajadores rurales asesinados en su país, mientras continúa campeando la impunidad por casos similares registrados anteriormente.

Agradecemos su atención y reiteramos nuestra expectativa de un inmediato restablecimiento de los derechos de los trabajadores rurales y la vigencia de los derechos humanos en su país. Confiamos en que se erradicará la impunidad que pesa sobre los crímenes cometidos contra los trabajadores sin tierra y que Brasil impulsará una reforma agraria integral que permita restablecer los derechos económicos y sociales en el campo.

Hackbart formó a una generación de luchadores campesinos brasileños y sus estudios y análisis orientaron y orientan la lucha política del PT en los temas agrarios. Su nombramiento es la expresión del serio compromiso de realizar una reforma agraria masiva y de calidad en Brasil.

Ante esta sustitución hubo reacciones esperadas: la UDR, entidad que agrupa al latifundio más atrasado, denunció los vínculos de Hackbart con los movimientos sociales; los partidos de derecha protestaron por el perfil excesivamente izquierdista del nuevo presidente; el *Jornal o Estado de Sao Paulo*, portavoz de la derecha agraria, volvió a pedir la dimisión del ministro Rossetto. En los movimientos sociales, con la excepción de la Comisión de la Pastoral de la Tierra, entidad de la Iglesia en la que milita el ex-presidente, las entidades y movimientos (MST, CONTAG, etc.) se pronunciaron a través de una nota conjunta del Forum de la Tierra reconociendo la “*responsabilidad única y exclusiva del Ejecutivo para elegir y nombrar a las personas para ejercer cargos y ejecutar las tareas propias de gobernar*”. El MDA está confiado y optimista en que las políticas y el equipo que asume la gestión del INCRA se harán sentir en el avance de la reforma agraria en Brasil. El Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA) deberá estar presentado en un mes. Abarca estrategias, políticas, directrices y acciones a corto, medio y largo plazo, buscando proporcionar mayor democratización y efectividad en el acceso a la tierra para quienes la necesitan para su sustento y el de su familia, con la definición de los instrumentos y recursos financieros y logísticos que garantizan el desarrollo rural sustentable, capaz de crear más empleos y distribuir mejor la renta nacional y, consiguientemente, contribuir a la erradicación de la pobreza en Brasil.

Todas estas acciones se orientan a la realización de una reforma agraria masiva y de calidad, capaz de revertir un modelo histórico de abandono y exclusión de los asentamientos. Brasil no puede convivir más con tierras ociosas. El país necesita crecer, generar trabajo, renta y alimentos para su pueblo. El campo brasileño necesita ser definitivamente, un espacio de inclusión social, justicia, paz y producción.

“Si hay un nuevo movimiento de masas, Lula giraría más a la izquierda, cambiaría de modelo”

Declaraciones de Joao Pedro Stédile a Jornal do Brasil (3/08/2003)

(...) Nosotros heredamos doce años de gobiernos que aplicaron un modelo neoliberal que sólo aumentó la pobreza, las desigualdades sociales y el paro. Y la crisis es tan grande que hay un descenso del movimiento de masas en Brasil. En el fondo la derrota política de la clase trabajadora fue tan grande que las personas, para sobrevivir, buscaron salidas individuales. Y, lo que es peor, no las encontraron.

(...) Estamos en una situación muy difícil. La clase dominante, que acumuló mucho dinero en todos estos años, sabe que las diferencias sociales aumentaron. Por eso tienen tanto miedo a que haya un nuevo ascenso del movimiento de masas. Sabe que, si hubiera ese movimiento de masas, el gobierno Lula giraría más a la izquierda, cambiaría de modelo. Y por eso intentan criminalizar a esos movimientos, en la prensa, y usan todo su poder ideológico para evitar que haya movilizaciones sociales. Sólo así podrían seguir con sus privilegios.

(...) El papel del MST es organizar a los pobres. Dar conciencia a los pobres, para que la salida de la pobreza se haga de forma organizada, civilizada.

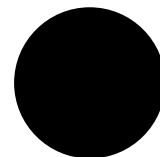
(...) Las movilizaciones sociales son el resultado de una contradicción que existe en nuestra sociedad. Por un lado, una sociedad rica y por otro, millones de pobres. ¿Cómo deben conseguir los pobres el acceso a los servicios públicos y a los derechos fundamentales? Organizándose y luchando. En Brasil, millones de pobres luchan por derechos republicanos de tener trabajo, tierra para trabajar, vivienda y educación. Sólo eso. Los pobres no quieren la “canasta básica”. Quieren trabajo y las élites de Brasil no les dejan. Entonces, cada vez que los pobres se organizan y luchan por esos derechos, es un gesto civilizatorio o, si se quiere decir así, republicano.

(...) Un gobierno popular como el gobierno Lula necesita que el pueblo se organice, si no sólo será un rehén de las presiones de los banqueros, de las constructoras, del capital extranjero, de los dueños de los medios de comunicación. Y de los parlamentarios conservadores que representan a la élite brasileña.

(...) En realidad, los cambios no dependen ni siquiera de la voluntad de Lula. Los cambios sociales en este país dependen de la capacidad del pueblo para organizarse. Si el pueblo se organiza, se moviliza por sus derechos, tendremos un gobierno progresista y un PT al lado del pueblo. Si el pueblo no se moviliza en estos cuatro años entonces sí estaremos en una situación muy pesimista.

(...) El gobierno tiene que cambiar el modelo económico. Si no lo hace, descarrilará el gobierno, Lula y la izquierda. Y para los pobres será una tragedia social. Nuestro esfuerzo, como movimiento y en la articulación de los movimientos sociales es justamente organizar al pueblo, movilizar al pueblo para ayudar al gobierno a cambiar el modelo económico. Por eso estamos discutiendo con el gobierno, para que adopte políticas económicas y sociales que ayuden a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.

(...) Cualquier dirigente político, cualquier intelectual, cualquier persona del pueblo sabe que en Brasil el socialismo no está a la orden del día. Lo que todos los movimientos sociales queremos es un nuevo proyecto económico y social, que



garantice los derechos fundamentales de la tierra, trabajo, vivienda, educación y cultura. Lo que queremos es construir una sociedad basada en valores de la tradición humanista, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia. Ese es nuestro proyecto. Un proyecto popular para Brasil.

“No es fácil entender cómo el gobierno brasileño puede persistir en esta macroeconomía suicida”

Declaraciones de Robert Brenner a Folha de Sao Paulo. 31/08/2003

(...) Las políticas económicas hiperausteras del actual gobierno brasileño representan una continuación de las desastrosas políticas neoliberales de la etapa de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Responden al legado de la deuda y la vulnerabilidad externa de FHC, profundizando aún más su programa. Pero la devastadora contradicción de este enfoque está clara. Con el fin de atraer inversiones extranjeras directas y capital a corto plazo, Brasil tiene que adoptar una política que favorece a los mercados financieros internacionales y al FMI: superávits fiscales para pagar los intereses de la deuda pública, tasas de intereses altísimas para disminuir la inflación.

Estas políticas actúan contra los requisitos del crecimiento económico. Deprimen el gasto privado en nuevas fábricas y equipos y el gasto público en infraestructuras, investigación científica, servicios sociales, etc. En estas condiciones, el mercado doméstico sólo puede, en la mejor de las hipótesis, estancarse.

No es sorprendente que esas políticas, durante los años 90, hayan propiciado un retroceso en el nivel de vida, un declive de la tasa de inversión, un colapso de la banca comercial y en la balanza corriente y un aumento del endeudamiento público y, en general, de la deuda externa. Tampoco sorprende que hoy no exista prácticamente acumulación de capital en Brasil, o que el desempleo sea mayor que bajo FHC, o que los salarios continúen cayendo o que la industria esté estancada.

En estas condiciones, el capital exterior entra en Brasil para explotar los altos intereses o para adquirir empresas a bajo precio, no para invertir en la producción. No es fácil entender cómo el gobierno brasileño puede persistir en esta macroeconomía suicida.

(...) Economistas de todas las tendencias comprenden que la única política viable en las condiciones recesivas vigentes sería estimular la demanda agregada mediante un aumento del gasto público y una caída de las tasas de interés.

(...) El gobierno brasileño está en condiciones de renegociar su deuda con el FMI. Incluso si Brasil tuviera que declarar una moratoria, sus relaciones con el capital internacional probablemente se volverían más saludables.

(...) Reintroducir controles de capitales es la condición mínima para la recuperación del crecimiento brasileño. Sin esos mecanismos, los capitales dejarán el país a la menor señal de inestabilidad financiera doméstica o ante el surgimiento de mejores perspectivas en el exterior. Peor aún, el capital extranjero saldrá a la menor señal de desarrollos políticos progresistas, como ocurrió en los tres meses anteriores a la toma de posesión de Lula.

Traducción: Miguel Romero

EZLN: un viraje importante

Guillermo Almeyra

La “treceava” (en realidad, decimotercera) “estela” del subcomandante Marcos marca un cambio importante con todas las anteriores. En primer lugar, la misma no es vieja ni descriptiva, ni está llena de retórica sino que es actual y concreta, y aborda con seriedad y profundidad problemas fundamentales tratando de eliminar el sectarismo. El intento de reforzar la autonomía en los municipios rebeldes chiapanecos refuerza también los elementos de doble poder frente al poder estatal y al federal. Es decir, fortalece la construcción de la democracia directa y la vieja idea de los municipios libres, por un lado, y la restructuración del territorio como tarea ciudadana, por el otro. Por eso los partidos y las autoridades chiapanecas pusieron el grito en el cielo, pues sienten que frente a ellos se yergue el germen de otro Estado. O sea, el que se está construyendo desde abajo hacia arriba en el aprendizaje de la disputa del poder, en la conciencia de los habitantes y en las relaciones sociales, para así dar coherencia práctica y programática al “partido-movimiento” de los oprimidos e impulsar más la modificación de las relaciones de fuerza entre las clases, para poder después disputar el poder central en todas sus múltiples manifestaciones.

Hay que saludar que en el EZLN se haya dirimido –al menos por lo que se puede leer– una discusión importante permitiéndole entrar a ver cómo construir relaciones nuevas que van más allá de las tradiciones comunitarias indígenas, del encierro local, de lo meramente étnico, sin dejar por eso de apoyarse en las comunidades, que se están renovando profundamente.

El largo silencio del EZLN que imperó hasta no hace mucho, pesó como una losa sobre la vida política de los explotados y oprimidos de este país, no porque los mismos esperasen “la línea” del EZLN sino porque no se puede encarar un cambio prescindiendo del zapatismo. Las desdichadas cartas a ETA y al juez Garzón reforzaron en los amigos del zapatismo una amarga sensación negativa y la idea de que en el EZLN reinaba una fuerte confusión.

Nueva política

Pero ahora, las muchas páginas de Marcos que leemos desde hace menos de diez días, aunque sigan teniendo muchas cosas innecesarias (¿a quién le interesa, en efecto, si las mujeres reconocen desnudo al Sup “a pesar de su pasamontañas?”), son textos que dan en cambio la impresión de una liberación psicológica de su autor y de una fase nueva en la relación entre el EZLN y lo que Marcos llama “la sociedad civil”, refiriéndose en realidad sólo a un sector –el progresista, se le habría llamado hace años– de aquella. Eso es oportuno, necesario y, si mi impresión fuese correcta, debería ser apoyado.

Sin embargo, todo cambio trae siempre aparejados peligros que, como no tengo páginas a mi disposición, mencionaré sólo de paso, a pesar de la importancia de estudiar y desmenuzar cuidadosamente esta “estela”. En primer lugar, Marcos reivindica justamente el derecho del EZLN de tener una política internacional y de pronunciarse en favor de los movimientos sociales vascos (no dice de ETA), argentinos, latinoamericanos, mientras que el EZLN hasta hace poco estuvo ausente de los foros contra el neoliberalismo, de la campaña contra la invasión de Irak, del debate sobre la situación en que se encuentra Cuba, del apoyo al movimiento campesino en su lucha contra el gobierno y la política neoliberal, de la discusión sobre el impasse en que se encuentra el movimiento indígena.

Si su nueva política declarada se concretase y llevase a dar a los zapatistas chiapanecos una nueva conciencia de la relación entre lo mundial y lo local, y de su propia fuerza e influencia a escala global, ayudando a abrirles ventanas culturales y políticas hacia el mundo, el mismo EZLN crecería políticamente y colaboraría mucho en la creación del pensamiento crítico, tan necesario en todos los movimientos sociales. Una participación en la batalla de las ideas contra el capital haría dar un salto enorme a un movimiento que oscila entre una definición social-indigenista fundamentalmente local y su caracterización como movimiento-partido con vocación nacional.

La construcción de las juntas de buen gobierno, piso superior de los municipios, busca regular el mercado y repartir de modo más justo los apoyos y los ingresos provenientes del comercio, además de construir una instancia para fijar normas y resolver litigios. En la lucha contra la fragmentación descentralizada de los territorios zapatistas existe, sin embargo, en germen, el peligro de una centralización burocrático-administrativa controlada por el aparato militar. En efecto, la concentración en éste de la “vocería” y el control del funcionamiento de las juntas por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (que “*en cada zona vigilará el funcionamiento de las juntas de buen gobierno*”, *La Jornada*, 29 de julio) refuerzan e institucionalizan lo que según Marcos ya sucedía (en las comunidades “*el EZLN se ha dedicado (...) a intervenir cuando hay conflictos o desviaciones*”, *La Jornada*, 28 de julio) y, por supuesto, a decidir qué es una desviación.

Burocracia

Sobre el peligro de burocratización administrativo-militar de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) hay que decir que Marcos tiene conciencia del mismo. En efecto, escribe (*La Jornada*, 28 de julio) que “*la estructura militar del EZLN ‘contaminaba’ de alguna forma una tradición de democracia y de autogobierno. El EZLN era, por así decirlo, uno de los elementos ‘antidemocráticos’ en una relación de democracia directa comunitaria*”.

Pero el peligro de centralización autoritaria no viene de la voluntad subjetiva del EZLN (que desea fortalecer la autonomía de las comunidades al crear las JBG), sino de la inevitable relación con el mercado, de la imposibilidad de una vida autárquica a pesar de la autonomía, del encierro de las mismas comunidades, de su falta de experiencia y visión regional y de las inevitables transformaciones en las comunidades mismas como resultado de la influencia cultural externa.

Por ejemplo, hay una gran transformación en la visión comunitaria de los cargos tradicionales, antes respetadísimos y base del poder en la comunidad.

Marcos mismo escribe (sin sacar las conclusiones, tan normal es el caso) que “no pocas veces” la comunidad utiliza el nombramiento a un cargo “para sancionar la desidia o el desapego de algunos de sus integrantes, como cuando a alguien que falta mucho a las asambleas comunitarias se le castiga dándole un cargo como agente municipal o comisariado ejidal” (lo cual implica cargas económicas y trabajo gratuito). O sea que los cargos ya no son siempre un honor al que se aspira o un deber de solidaridad y marca de conciencia comunitaria sino una pena, una carga.

En la estructura misma de la vida de la comunidad, en su poder político, están surgiendo grietas bajo el golpe de la vida externa, particularmente duro en tiempos de neoliberalismo, recesión y emigración masiva. El impacto en la comunidad de las “sociedades civiles” –la importancia de cuyo apoyo Marcos no se cansa de reiterar, en polémica contra los ultraizquierdistas que ponen a todas las ONG y a todos los voluntarios en un solo saco, el de la “*contrainsurgencia bien intencionada*”, *La Jornada*, 28 de julio–, y el impacto del propio EZLN son también muy fuertes y ayudan a la transformación interna de la comunidad.

Un ejemplo de ello es el intento de hacer que se cumpla la “ley revolucionaria de las mujeres”, que en buena parte es aún letra muerta, o de lograr que las niñas vayan a la escuela, o la propaganda por radio contra el machismo. Otro ejemplo, que Marcos destaca, es que la autonomía –cuya construcción es un proceso– sólo es posible con el apoyo de “*cientos de miles de personas de diferentes colores, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes lenguas, en fin, de mundos diferentes*”, *La Jornada*, 28 de julio (o sea, que no tiene una base puramente étnica o local).

Otra fuente de peligro es lo que Marcos llama “el problema principal” en la relación con “la sociedad civil nacional e internacional”. O sea, esa especie de “renta diferencial” que hace que los municipios autónomos más conocidos o con mejor acceso vial reciban más proyectos o más apoyo. Porque el problema es que el territorio rebelde no puede depender sólo de “proyectos y apoyos” de los voluntarios, ya que no puede aislarse del mercado del café, del de las artesanías, de la mano de obra, de la madera y otros recursos, sobre todo porque el maíz de la milpa y los productos de autoconsumo no alcanzan sino para comer un cuarto del año y todo lo demás –alimentos, medicinas, servicios, ropa, etcétera– hay que comprarlo en el mercado, con dinero en efectivo.

Esa es la principal tendencia disgregadora de la comunidad, porque una cooperativa que está en condiciones de exportar café orgánico debe cumplir con las reglas estatales sobre la exportación y la calidad de la misma, pagar los impuestos, etcétera, y no puede romper sus relaciones con el Estado ni basar su precaria acción mercantil en la distribución solidaria de los ingresos, porque se hunde. No es un problema de zapatismo o de antizapatismo de *“las cooperativas de producción y comercialización de café orgánico”*, *La Jornada*, 29 de julio, aunque quizás algunos de sus dirigentes no sean zapatistas o estén contra el EZLN: es que las cooperativas deben responder a los imperativos del mercado, como las vendedoras de artesanías que deben ir allí donde pueden vender, y además solas, o los que quieren beber refrescos.

Los indígenas que eligieron el zapatismo no eligieron la pobreza, que no es una virtud. El voto de pobreza pueden hacerlo algunos religiosos o algunos revolucionarios, pero no los campesinos ni los trabajadores, que quieren satisfacer sus necesidades, las cuales crecen con su cultura y su conocimiento de lo que podrían necesitar. Por eso no bastará redistribuir los ingresos provenientes de un proyecto con el “impuesto hermano” de 10 por ciento o decidir que los proyectos deben ir a otro municipio. Hay que elevar la producción de alimentos en los municipios autónomos y distribuir los bienes y servicios con equidad entre ellos. Pero, sobre todo, hay que buscar una solución política regional y nacional con la extensión de la autonomía a todas las regiones del país.

Distribuido por Correo de Prensa
germain@chasque.net

La guerra de ocupación

Charles André Udry

El 1 de mayo de 2003, George W. Bush, homérico piloto, aterrizaba en el portaviones Abraham Lincoln. El piloto Bush salía de la cabina para proclamar, ante las televisiones del mundo, que los combates habían acabado en Irak y que los objetivos de la “misión militar” de los Estados Unidos habían sido alcanzados. El espectáculo era conforme a las recomendaciones de Karl Rove, el consejero de comunicación de extrema derecha de Bush. Un propagandista que declara abiertamente que las elecciones americanas de 2004 “*no se ganarán con palabras, sino con imágenes*”... y decenas de millones de dólares.

Pero ahora el comercio de las imágenes comienza a desarrollarse en una dirección que no debe ser apreciada por Bush y su entorno. La tasa de audiencia de las cadenas de TV y la circulación de la prensa son mantenidas por los anuncios de “ataques terroristas” contra los soldados americanos, venidos “a traer la democracia” a Irak. El anuncio diario de soldados muertos en Bagdad o en Fallujah es un “buen tema”, tanto más si se acompaña con imágenes de los funerales militares y del aviso de defunción llevado por un oficial, que simboliza el “dolor nacional”, a la familia de un soldado.

Así, la lógica comercial del sistema mediático lleva a difundir una imagería poco conforme a los mensajes propagados, desde hace meses, por los mismos conformadores de opinión, sobre las razones y los objetivos de la guerra desencadenada contra Irak. La representación de la “misión de los Estados Unidos” se enturbia al ritmo en que las tropas de ocupación parecen empantanarse. Por otra parte, la expresión “*quagmire*” (cenagal, atolladero), que caracterizaba la situación del Ejército americano en Vietnam, comienza a reaparecer en los medios. Hay ya urgencia por poner a punto una nueva estrategia de comunicación.

Un mensaje claro

El lunes 7 de julio de 2003, el editorial del *Wall Street Journal* (WSJ) –uno de los órganos de prensa más influyentes en los círculos del *establishment* ligado a la Administración republicana– revelaba la inquietud que suscitan las dificultades encontradas en la puesta en pie de una ocupación neocolonial de Irak. El editorial se titula: “*El contraataque de Sadam*”. Se abre con una amonestación: “*Cuanto más rápidamente el presidente de los Estados Unidos, reconozca y explique la verdad, más rápidamente el público americano se unirá para apoyarle frente a los desafíos a los que debe enfrentarse*”. Pero esta vez, ¿cuál es la verdad? La que debe permitirle neutralizar a los opositores a la

guerra. Pues estos últimos “*están explotando las consecuencias (de la guerra) para insistir en el hecho de que nunca habría debido producirse*”. El WSJ está atento al giro que se opera en la opinión pública norteamericana.

A partir de ahí, hay que reconocer, alto y fuerte, que “*el propio Sadam puede suscitar ese esfuerzo de guerrilla*” contra las tropas estadounidenses. El objetivo de esa guerra “*es, en definitiva, un contraataque con el objetivo de infligir una derrota deprimente a la guerra contra el terrorismo que llevan a cabo los Estados Unidos*”. La conclusión es evidente: no se combate este terrorismo como “*se intenta bajar la tasa de criminalidad en Washington*” (una ciudad en la que la población negra es importante). Según el WSJ: “*Los Estados Unidos deben ir más lejos y contemplar arrestos a gran escala, especialmente en el corazón de la región sunita y baasista al norte de Bagdad. Los militares americanos no gustan de tener que guardar prisioneros, pues distrae recursos de las operaciones ofensivas; pero eso podría ser una tarea para tropas extranjeras que los Estados Unidos están reclutando*”. La vigilancia de amplios campos de prisioneros, ésa es una tarea que podría convenir a tropas polacas, egipcias o hindúes...

El mensaje está claro: las fuerzas armadas americanas llevan una guerra contrainsurreccional en Irak. Hay que reconocerlo. Por ello serán legítimas las operaciones de represión. En efecto, la resistencia multiforme de la población a la ocupación de su país y a la toma de control de sus riquezas es asimilada por el ocupante a “*acciones terroristas*”. Se encuentra ahí el vocabulario de todas las fuerzas de ocupación: las de la URSS en Hungría en 1956 o de Francia en Argelia.

Para intentar lograr un apoyo que se erosiona en los Estados Unidos, hay que presentar –siempre según el WSJ– este rechazo a la ocupación como algo similar a una *yihad* (aquí en el sentido de guerra santa) llevada a cabo por los restos del partido Baas de Saddam Hussein (“*the Baathist-jihadi*”). Así, según los cerebros neoconservadores, podría construirse un discurso sintético “*anti-terrorista*” de una eficacia superior.

Represión y control van parejos. Es lo que el procónsul americano Paul Bremer contempla cuando decreta la prohibición de “*toda incitación a la violencia*”. El periodista Robert Fisk plantea sobre este tema una pregunta: ¿*va a llevar ese decreto a Bremer a “detener a todos los imanes en las mezquitas, a detener a todos los periodistas que no obedezcan, a cerrar los periódicos”?* Como conocedor de la situación, Fisk concluye: “*Eso no funcionará*” /1.

Pues el problema central reside en la ocupación misma de Irak cuya población, que en su gran mayoría no se identificaba con el régimen de Saddam Hussein, no ha vivido la derrota militar del régimen dictatorial como su propia debacle. Lo que

1/ Robert Fisk es uno de los mejores especialistas sobre el Medio Oriente. Trabaja para el periódico inglés *The Independent*. Esta cita proviene de una entrevista concedida a *Z Magazin*.

reconocen “los oficiales de la ONU (que) afirman que los ciudadanos iraquíes y los partidos quieren tener un aumento del sentimiento de apropiación de su futuro” ¹². Eso anula numerosas analogías históricas hechas por algunos comentaristas.

La agricultura ocupada por Pradium

La Administración Bush debe intentar dominar la disposición de factores fuertemente contradictorios: un “compromiso masivo y duradero” en Irak, como acaba de admitir Bush; la cooptación de representantes de diversos sectores y comunidades de la sociedad iraquí, sin que éstos aparezcan demasiado abiertamente como sus fieles; un “mantenimiento del orden” que querría subarrendar a tropas del “mundo oriental” y que sigue siendo más que problemático; una cierta difusión de las responsabilidades de ocupación, sin perder el control de lo esencial, utilizando la OTAN o una estructura ad hoc internacionalizada; la obtención de una estabilización bastante rápida de la situación para permitir a las empresas privadas invertir y poder disponer, en un plazo no demasiado largo, de los recursos ligados a la explotación del petróleo; hacer sufrir a la estructura económica iraquí una terapia de choque (privatizaciones, etc) de efectos sociales mortíferos. Sobre el papel, esta combinación es quizá posible. En la realidad el asunto es muy diferente.

La elección del “responsable para la agricultura de Irak” da una indicación sobre la orientación efectiva del poder neocolonial estadounidense, que marca la distancia con las múltiples propuestas realizadas por determinados institutos de cara a ocupar Irak sin dar impresión de hacerlo. La Administración Bush ha encontrado un especialista: Daniel Amstutz, un antiguo director de la mayor multinacional del comercio de cereales, Cargill. Amstutz, antes de su nombramiento, presidía los destinos de la firma Pradium Inc., creada en 2000. Esta sociedad organiza una especie de red –que reúne a gigantes del *agrobusiness* como Cargill, Archer Daniels, Cenex Harvest, DuPont, Louis Dreyfus– que actúa a escala mundial para realizar compras y fijar precios en el mercado de cereales.

Amstutz ha proporcionado ya una primera evaluación de la situación agrícola iraquí: los campesinos dependían demasiado de las subvenciones, hay por tanto que introducir mecanismos de mercado que favorezcan las técnicas modernas. La traducción de este discurso no es difícil. En primer lugar, Amstutz va a asegurar la venta de sobreproducciones cerealistas (subvencionadas) de los Estados Unidos en Irak. Las rentas del petróleo deberán pagar la factura. En una segunda etapa será puesto en pie un sistema que hará depender una parte de la agricultura iraquí de los insumos (pesticidas, fungicidas, etc.) proporcionados por las multinacionales y simientes en manos de la multinacional Monsanto. En fin, los precios de los diversos cereales y demás productos de la agricultura iraquí sufrirán de lleno los efectos a la baja de una sobreproducción mundial dominada por redes como la

²/ “Iraq’s campaigning consul”, *Financial Times*, 5-6/7/2003.

puesta en pie por Pradium. No es extraño que el director de la ONG Oxfam Kevin Watkins, haya declarado: “Poner a Daniel Amstutz como responsable de la reconstrucción agrícola en Irak es como poner a Saddam Husein a la cabeza de una comisión de defensa de los derechos humanos” /3.

De la misma forma que la puesta de nuevo en funcionamiento de la electricidad o del aprovisionamiento en agua no es una prioridad de la Administración Bremer, tampoco hay medidas de urgencia en la agenda de Amstutz. Sin embargo, la agricultura iraquí está hundida en el abismo bajo los efectos combinados de la guerra, de la destrucción de las redes de irrigación, de las dificultades de transporte y de almacenamiento, de la falta de crédito (el sistema bancario no funciona) mientras que la cosecha pasada no ha sido pagada, de la desaparición del comprador central que era el Estado, de la falta de medios veterinarios, etc.

La mentira ordinaria

Hoy, los grandes medios se extasian con las “mentiras” proferidas por Bush a propósito de las armas de destrucción masiva. Se puede ciertamente realizar la lista de las declaraciones falsas que intentaban justificar la guerra. Pero, si se quiere ir más allá de las apariencias, hay que plantearse una cuestión. ¿En qué alimenta el sistema político y social americano –como por otra parte el europeo- la exigencia de la mentira oficial? En una sociedad tan marcada por la desigualdad social, por la brecha entre “ricos” y “pobres”, por el poder extendido de una oligarquía financiera, por una concentración enorme del poder mediático, la mentira se convierte en una norma de gobierno.

Así, una reducción masiva de impuestos a favor de los muy ricos es transformada en un medio de “crear empleos”; medidas autoritarias y represivas (el “*Patriot Act*”) se convierten en un instrumento de “defensa de la libertad”; recortes en los presupuestos públicos escolares son presentados como un “aumento de las oportunidades para los alumnos que lo merezcan”. Esta mentira institucionalizada amplificada es lo propio de la gestión política neoconservadora, autoritaria. Las contraverdades sobre las armas de destrucción masiva se integran en la mentira ordinaria.

Esta estrategia de propaganda falsa, que dispone de armas de desinformación masiva, ¿va a permitir camuflar, en los Estados Unidos la verdadera crisis que atraviesa la empresa de ocupación neocolonial de Irak? ¿Va a frenar la expresión visible de una desmoralización que comienza a afectar a una parte de las tropas americanas en el terreno? /4.

Teniendo en mente estos diversos elementos es como la movilización contra la guerra debe prolongarse en movilización contra la ocupación imperialista y a favor de los derechos democráticos y sociales de un pueblo iraquí efectivamente liberado.

3/ Ver “Nature and Politics”, *Eat The States*, 2/7/ 2003, vol. 7, n.22

4/ Ver el reportaje sobre la desmoralización de la tropa, “Troop morale in Iraq hits rock bottom”, en *The Christian Science Monitor*, 7/07/ 2003.

África y la compasión Made in USA Redacción a *l'encontre*

El presidente de los EE UU, durante la segunda semana de julio de este año, efectuó un viaje a África. Algunas semanas antes, en Ginebra, ante la OMC, cuatro países africanos –Chad, Benin, Burkina y Mali– presentaron una denuncia contra Washington. ¿Sobre qué versaba? Sobre las subvenciones concedidas por la Administración Bush a los productores americanos de algodón. Subvenciones por un montante de 3,9 millardos de dólares para el período 2001-2002, repartidos en 25.000 grandes plantaciones. Lo que resulta una asignación media de 150.000 dólares por unidad y por año. Un ejemplo: una gran plantación de Arkansas, la *US Tyler Farms*, ha recibido seis millones de dólares de ayuda en 2001. Lo que equivale a la renta anual de más de 20.000 campesinos de Malí.

Según el informe presentado por los cuatro países africanos –que se suman a una denuncia similar de Brasil interpuesta en septiembre de 2002, en la época del gobierno de Fernando Enrique Cardoso– el efecto de esas subvenciones sobre los algodóneros americanos es el siguiente. En primer lugar, aseguran a los grandes productores de los EE.UU. un precio el 73% más elevado del practicado en el mercado mundial. Ese precio no ha dejado de bajar durante los años 90. Luego, ese tipo de “incitación” –denunciada sistemáticamente por los EE UU y el FMI cuando se trata de los países de la periferia sometidos a planes de ajuste estructural– estimula una sobreproducción algodонера en los EE UU y apoya sus exportaciones. Lo que empuja a la baja los precios del algodón en el mercado internacional. En consecuencia, el sector del algodón africano conoce una crisis aún más profunda. Afecta a unos diez millones de personas dependientes de este cultivo en África. Las exportaciones de Benin son dependientes en su 70% del algodón, lo que muestra el impacto que su precio puede tener sobre un país así. Las pérdidas en rentas de exportaciones algodonerías se elevan, para África, a unos 300 millones de dólares por año. Una suma muy importante para ese continente hecho trizas. Ciertamente, se puede relacionar esa cifra con los 3,9 millardos de dólares gastados por mes –según los últimos datos del Pentágono– a fin de financiar la ocupación militar de Irak.

El misionero. Estas cuestiones quedan en silencio, con ocasión de la visita de cinco días a cinco países africanos del presidente americano. Bush es presentado como un misionero que se pone a la cabeza de una campaña evangélica contra el SIDA. Pero, ahí también, la realidad parece bastante alejada de los discursos y promesas.

Poca atención ha sido dedicada a la personalidad del coordinador de la política “de ayuda global para combatir el SIDA” del presidente americano. Se trata de Randall Tobias. Ha tomado posesión de su cargo el 1 de julio de 2003. Tobias

estaba a la cabeza de una de las más importantes firmas farmacéuticas de los EE UU: *Eli Lilly & Co.* Esta firma figura también entre los principales donantes del Partido Republicano. Un hombre de confianza. Hasta el punto que el economista neoliberal Jeffrey Sachs, consejero especial del secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha calificado esta nominación como “*surrealista*”. Paul Zeitz, el director de *Global AIDS Alliance*, subraya que esta decisión presidencial “*plantea numerosos interrogantes sobre los conflictos de intereses (entre la industria farmacéutica y una política de salud pública con urgencia) y de prioridades para la Casa Blanca*”. Zeitz insiste en los bloqueos sistemáticos efectuados por las firmas farmacéuticas americanas para frenar la aplicación de medidas que den un acceso gratuito y masivo a los medicamentos “*antisida*”. Salih Broker, director de *Africa Action*, ONG con sede en Washington, no se anda con rodeos: “*Este nombramiento indica donde se sitúa la política de Washington sobre el SIDA; del lado de las empresas farmacéuticas*”.

Preguntas clave. Poco tiempo será necesario para clarificar tres cuestiones. La primera: ¿Cuándo bajarán sus precios las grandes empresas de la farmacia, para ayudar a las poblaciones africanas diezmadas por el SIDA, a nivel de los practicados por las firmas privadas que operan en la India, Tailandia y Brasil, es decir a 300 dólares por persona y año para una combinación de tres antiretrovirus? La segunda: ¿Se convertirá Randall Tobias en el abogado del derecho de los países en situación de crisis sanitaria extrema a importar medicamentos genéricos, sin sufrir sanciones? Por el momento, en ruptura con los acuerdos minimalistas de Doha en noviembre de 2001, la Administración republicana concentra sus esfuerzos en acuerdos bilaterales. La tercera: Mientras los créditos para el Fondo Global para combatir el SIDA, la malaria, la tuberculosis –de los que se hizo mucha propaganda en la reunión del G-8 en Evian– debían elevarse a un millardo por año, ¿quedarán reducidos a 200 millones, como ha decidido la Administración Bush?

De Irak a África, la política de Bush ilustra la diversidad de sus armas de destrucción masiva.



II Asamblea preparatoria del Foro Social del Mediterráneo. Pedro Belmonte, Juan Antonio Conesa (Ecologistas en Accion Region Murciana)



Más de trescientos delegados(as) e invitados(as) se han reunido en Nápoles, del 3 al 7 de julio, en la segunda Asamblea preparatoria del Foro Social Mediterráneo que tendrá lugar en Barcelona durante el mes de marzo del 2004. Este espacio de debate y de acción, al que han asistido activistas de todos los países de las riberas Norte y Sur del Mediterráneo, tiene como referencia la Carta de Principios del Foro Mundial de Porto Alegre y se inscribe en el proceso de extensión de dicho movimiento a otros continentes y regiones.

La región mediterránea es un exponente de algunos de los principales desequilibrios y conflictos generados por la globalización en la última época. Las recetas y dogmas neoliberales se aplican de un modo generalizado a todos los países de la región. Las empresas y sectores públicos se privatizan uno tras otro en los países de todas las riberas de nuestro mar. Las y los trabajadores ciudadanos de toda la región sufren un proceso de erosión de sus derechos sociales y laborales, que se ha manifestado recientemente en los intentos de recortes sociales y del sistema de pensiones en Alemania y Francia y de las regresivas reformas laborales del gobierno Aznar en nuestro país. Se ha producido un aumento de las políticas de rearme, la presencia y el fortalecimiento del complejo bélico de Estados Unidos y de las bases de la OTAN, el apoyo a la agresión militar en Irak por los gobiernos de países de la región, la militarización de las fronteras contra la circulación de las personas son aspectos que intentan integrar totalmente el Mediterráneo al proceso de la guerra global permanente a pesar de las movilizaciones por la paz de la gran mayoría de ciudadanos(as). A esto se ha unido en muchas ocasiones el mirar a otro lado de países de la UE ante el genocidio constante del pueblo palestino y el cercenamiento de su proyecto de Estado por parte del gobierno de Israel.

La Asamblea preparatoria del Foro se organizó en mesas de trabajo específicas y plenarios. Las mesas y grupos de trabajo abarcaron un amplio abanico temático sobre: Mujeres; Soberanía alimentaria; Medio Ambiente y Agua; Migraciones; Trabajo, Paro, Renta Básica y Derechos Sociales. Hubo también reuniones específicas sobre organización, logística y preparación del encuentro de Barcelona. Este espacio de intercambio y debate culminó con una manifestación alegre, festiva y combativa que recorrió las calles de Nápoles criticando la política agresiva y antisocial de Berlusconi y señalando que: *Otro Mediterráneo es posible*.

Una idea común que recorrió toda la reunión fue: *Cosa facciamo* (¿Qué hacemos?), es decir, un mayor debate que ponga en colectivo muchos de los problemas comunes de este área de cara al desarrollo de redes y movilizaciones

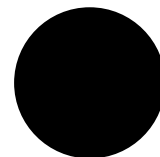
conjuntas en nuestro mar y nuestros territorios. Los y las participantes en el Foro Social entienden que sólo la acción colectiva de los agentes de los movimientos sociales, de la ciudadanía mediterránea, de los hombres y mujeres que están contra la guerra global permanente y los dogmas neoliberales, es un camino para hacer realidad la idea de otro Mediterráneo posible. Proponen que este espacio alternativo se convierta un marco idóneo para facilitar el encuentro y diálogo de todas las redes, movimientos y organizaciones sociales de la región, como medio de desarrollar la acción común por medio de iniciativas, campañas y que, a su vez, den una repuesta organizativa y de ideas al abismo existente Norte/Sur y Este/Oeste de nuestras riberas y a las injusticias y desigualdades flagrantes de nuestros territorios.

El problema del Agua. Una mesa de trabajo especialmente interesante en esta asamblea fue el tema del Agua en el Mediterráneo. Tuvo una participación nutrida de diferentes colectivos del Sur y Norte de Italia y de países de la ribera Sur de nuestro mar, como los de Marruecos, Libia o Palestina. Los compañeros y compañeras italianos intervinieron señalando la nueva escalada de privatizaciones de la gestión municipal y regional del agua, auspiciada desde el gobierno Berlusconi, los problemas de trasvases como el planteado en los Abruzzos y la propuesta de *La Carta dell'Acqua*. El compañero marroquí criticó el modelo de gestión del agua de su país, destinado a una agricultura en función de determinados productos agrícolas de exportación que entra en contradicción con la producción para el abastecimiento del mercado interno. La delegada palestina habló del control del agua por parte del gobierno israelí como un mecanismo de cercenamiento del proyecto de Estado palestino y la instalación de asentamientos israelíes sobre acuíferos subterráneos para el dominio del recurso, aludiendo también a las denominadas “guerras del agua” de la zona (Turquía, Siria, Irak). Desde el Estado español planteamos los impactos ambientales y sociales del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el Trasvase del Ebro, la esquilmación de los acuíferos, la contaminación y la presión urbanística sobre el litoral, planteando una crítica de fondo al modelo de desarrollo basado en una política de crecimiento imparable de la oferta del recurso agua. Hay que señalar que en las riberas del Mediterráneo nos enfrentamos a problemas comunes y mecanismos de agresiones similares, en ese binomio “agua-poder”, especialmente en lo que se refiere a la gestión y uso del agua. Esta puesta en común de los problemas del agua ha llevado al planteamiento de una primera agenda de temas a desarrollar, sobre la base de acciones comunes, en varios aspectos:

- Gestión del territorio, clima y desertificación (señalando las ambigüedades de este último concepto que se configura como un cajón de sastre para diferentes realidades).
- Unidad de las cuencas hidrográficas (frente a los modelos “trasvasistas”), captación, distribución y grandes infraestructuras.

- Derecho al agua, privatizaciones, guerras del agua.
- Calidad de las aguas, contaminación, ahorro y reutilización
- Agua y producción, usos agrícolas, turísticos y de ocio.

Y, unido a este abanico de temas, ¿qué hacer?, en los movimientos y movilizaciones sociales, en los consumidores, frente a los gobiernos de los Estados del Mediterráneo, UE y organismos internacionales. Desde esta perspectiva los compañeros(as) italianos plantearon una próxima reunión monográfica sobre el agua realizar en Catania (Sicilia), del 7 al 9 de noviembre del 2003; para ir avanzando en el desarrollo de un alternativa sobre el recurso agua en el ámbito del *Mare Nostrum*.



Se acerca el Foro Social Europeo. Josu Egireun

Cuando apenas quedan unas semanas para la celebración del II Foro Social Europeo, el tono que está adquiriendo el movimiento, que podremos medir mejor tras las movilizaciones contra la V Conferencia Ministerial de la OMC, parece indicar que del 12 al 15 de noviembre las villas de St. Denis, Bobigny, Ivry y Paris-La Villete van a quedar pequeñas.

No sólo el movimiento sindical va a tener una presencia superior a la del año pasado, a través del Foro Sindical organizado para la víspera, sino que la expectación abierta por el Foro de Mujeres está generando mayor interés que en Florencia. Así y todo no se trata sólo de los espacios que se vayan creando, sino de un estado de ánimo que recoge la incorporación de sectores nuevos a la movilización social y para quienes los espacios como los Foros (o las contracumbres) ofrecen la oportunidad de ir incorporándose con un compromiso mayor a la construcción del movimiento contra la globalización neoliberal.

No tiene mucho interés detenerse a recordar cuál va a ser el programa del Foro, ni las actividades en torno al mismo. Quien desee una información más detallada, puede visitar la página web (<http://www.fse-esf.org/>) o remitirse a los contactos de los distintos grupos de trabajos que se encuentran en ella. Quizás lo que interese destacar es que a diferencia de la edición anterior, en ésta la elección de conferenciantes se ha planteado mediante un reparto de cuotas por países, que además deberán de guiarse por criterios tales como: paridad hombre/mujer, equilibrio entre distintos sectores sociales (colectivos, redes, sindicatos, ONGs...) y entre gente “experta” y activistas sociales, fomentando la no repetición de quienes ya estuvieron el año pasado, etc.

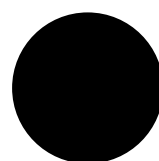
También se adoptó un programa de “restitución” de las conferencias con el doble objetivo, de que todo el mundo tenga en tiempo real información resumida de lo que se ha hablado en el resto de conferencias o seminarios a los que no ha podido acudir, así como ir construyendo una memoria del FSE que hasta el presente no existe, para lo que de entrada se solicitará a las y los conferenciantes un pequeño resumen de lo que vayan a desarrollar en sus intervenciones. Habrá que ver lo que da de sí esta iniciativa, pero en sí mismo tiene un valor positivo por cuanto va dejando un sedimento de las reflexiones y debates que se vayan dando y marca una referencia para las ediciones posteriores.

Y se articularon cinco fórmulas de financiación para favorecer la participación en el proceso de construcción del Foro y en el propio Foro de aquellos sectores que hasta ahora son víctimas de la falta de recursos económicos. Las propuestas van desde la que afecta a todo el mundo que se inscriba en el Foro (que el 10% de cada inscripción irá dedicado a alimentar ese fondo) hasta el que las delegaciones de distintos países puedan apadrinar a delegaciones de otros, tal como se hizo de cara al Foro de Florencia.

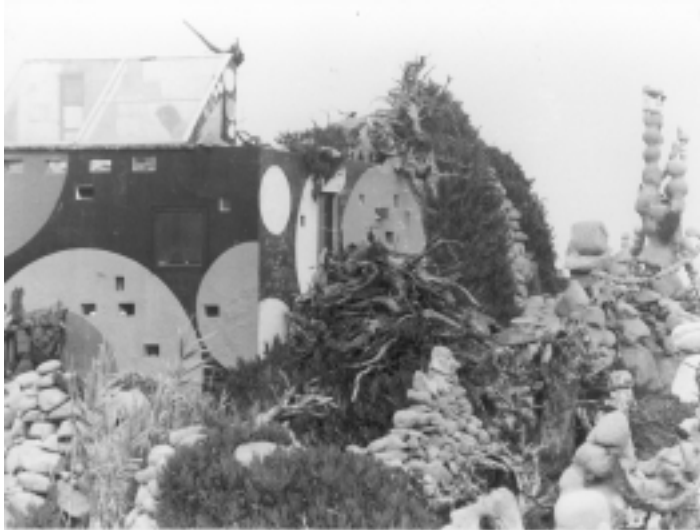
Por último, como plato importante de esta Asamblea preparatoria del FSE fue la parte dedicada a la agenda de movilizaciones y la construcción de la Asamblea de Movimientos Sociales dentro del FSE. Más o menos todo el mundo es consciente de que el 15-F no es repetible en una perspectiva a corto plazo y que los movimientos debemos fijar bien nuestras prioridades para dar pasos adelante en la lucha social.

Y en el marco de las prioridades, se vio la necesidad de prestar atención a dos ejes: el primero, todo lo que tiene que ver con el contexto social, pero también lo que deriva del proceso de Constitución Europea. El objetivo en ambos casos es articular un proceso de reflexión y alternativas con un punto de partida básico: construir la movilización social que permita hacer frente tanto a una Constitución al servicio del orden neoliberal. En cualquier caso no se trata ni de situar marcos comparativos con la manifestación de Florencia, ni con las movilizaciones contra la guerra, sino de alimentar un proceso que vaya construyendo un espacio común de lucha a nivel europeo en el que aún está todo por definir.

2 miradas voces



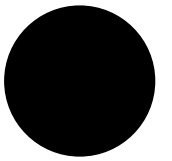
Carlos Pagán



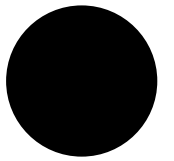
***En museo todo alquitrán dejar, tanto que posible.
Historia queda de alquitrán en museo de Camelle.
Museo para existe, yo al revés***

Estas son las últimas palabras de Manfred Gnadinger, “o alemán de Camelhe”, que saltó a la popularidad, fuera de Galiza, como el primer “mártir” del *Prestige*. A su entierro acudió todo el pueblo de Camelhe, que lo acogió (con sus más y sus menos, todo hay que decirlo) desde 1962, y personalidades del mundo de las artes. Pero este conocimiento y reconocimiento póstumo del hombre, de Man, eclipsó en parte su obra, la obra de toda una vida, que más de uno desechó como mera curiosidad antropológica más que artística. Estas fotografías de Carlos Pagán, tomadas hace ya más de dos lustros, quieren rendir homenaje al temperamento artístico de Manfred, al que podemos vislumbrar tras los cristales de su vivienda-museo.

Carlos Pagán regenta la taberna más emblemática de O Carvalhinho (Galiza), A *Bodega*, siempre abierta para una copa, una exposición o un concierto. En sus archivos fotográficos se conserva algo más que una crónica de varias generaciones de carvalhinheses y carvalhinhesas.









1 La privatización es un robo

El dominio público contra la privatización del mundo

Daniel Bensaid

La propiedad privada de los medios de producción y de cambio es, desde la Revolución Francesa, la piedra de toque de la cuestión social y de la cuestión democrática. Para los juristas y los filósofos liberales clásicos, de Grotius a Locke, el derecho de propiedad se justifica por una toma de posesión o por la huella legítima que deja el trabajo de transformación de un objeto. ¿Cuándo, pregunta Locke en el *Tratado del gobierno civil*, las cosas que come el hombre comienzan a “pertenerle propiamente”? Respuesta: “*Su trabajo distingue y separa esos frutos de los otros bienes que son comunes*” en la medida que “*añade a ellos algo más que la naturaleza*”. El trabajo “*que es mío, al poner esas cosas fuera del estado común en que estaban, las ha fijado y me las ha apropiado*”. Este derecho de propiedad permanece, sin embargo, limitado por el derecho a la existencia, heredero de ciertas tradiciones religiosas.

Este conflicto entre el derecho a la existencia y la institución social de la propiedad encuentra una solución en Hegel con la primacía concedida al “derecho de penuria”: “*El uso de los elementos de la naturaleza no es susceptible, según su esencia, de ser particularizado bajo forma de propiedad privada*” (*Principios de la filosofía del derecho*, &46), pues “*las reglas que conciernen a la propiedad privada pueden y deben ser subordinadas a esferas más elevadas del derecho*”, &52). Así, la naturaleza del Estado no consiste en las relaciones de contrato que transferirían “*los caracteres de la propiedad privada a una esfera más elevada de*

la naturaleza". Dicho de otra forma, "el Estado no es un contrato", ni siquiera una generalización del contrato (&100). Así pues, el interés general y el derecho de penuria pueden oponerse al derecho de propiedad. Hay "en el peligro supremo y en el conflicto con la propiedad jurídica de otro un derecho de penuria que hacer valer", pues "la penuria revela la finitud y como consecuencia la contingencia del derecho tanto como del bienestar" (&127). Hoy aún, los jueces pueden invocar en Francia un "estado de necesidad" "inspirado en este "derecho de miseria", para liberar a madres de familia en estado de necesidad, "culpables de robos en escaparates en período de fiestas para dar de comer a sus hijos o para regalarles juguetes". Se entrevé el alcance subversivo de este "estado de necesidad" extendido a las cuestiones de la vivienda o a cualquier otra materia de urgencia social.

Una cuestión fundadora de los movimientos socialistas

Toda la tradición surgida de la Revolución Francesa da fe de esta contradicción no resuelta. En el ilustre artículo 17 de la Declaración de 1789, el derecho de propiedad, proclamado inviolable y sagrado, sigue sometido a una cláusula de excepción "cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exige evidentemente, y bajo condición de una justa y previa indemnización". Igualmente, los artículos 544 y 545 del Código civil definen la propiedad como el derecho "a gozar y disponer de las cosas de la forma más absoluta", de forma que "nadie pueda ser obligado a ceder su propiedad, si no es por causa de utilidad pública". La cuestión es pues saber a qué condición una urgencia social puede ser reconocida de utilidad pública.

Radicalizando esta herencia, el movimiento socialista se formó en torno a una crítica del derecho de propiedad, desde los Niveladores ingleses a los Iguales de Babeuf, de Blanqui a Jaurés, pasando por Proudhon y Marx. Mientras la denuncia proudhoniana de la propiedad como un robo guarda fuertes acentos morales, la cuestión toma, en el *Manifiesto Comunista*, un lugar estratégico central: "Los comunistas pueden resumir su teoría en esta única fórmula: supresión de la propiedad privada"; en todos los movimientos, "plantean la cuestión de la propiedad, al grado de evolución que haya podido llegar, como la cuestión fundamental". Los puntos programáticos planteados en el Manifiesto ilustran esta recomendación: expropiación de la gran propiedad terrateniente; instauración de una fiscalidad fuertemente progresiva; supresión de la herencia de los medios de producción y de cambio; confiscación de los bienes de los emigrados rebeldes; nacionalización de los medios de transporte y creación de manufacturas nacionales; creación de un sistema de educación pública gratuito para todos; centralización del crédito mediante una banca pública única.

Este método constituye la prolongación lógica de la crítica efectuada por el joven Marx cuando opone, en sus artículos de juventud para la *Gaceta Renana* sobre los robos de madera, "el derecho consuetudinario de los pobres" al poder abusivo de

los propietarios. Igual que la “economía social” o “la economía moral” de las investigaciones del historiador E. P. Thompson sobre el origen de los movimientos populares 1/, estos “derechos consuetudinarios de la pobreza” prefiguran para Marx derechos futuros de una humanidad emancipada: “*Un cierto tipo de propiedad tenía un carácter indeciso, no pudiendo ser determinada ni como propiedad privada, ni verdaderamente como propiedad común (...). Así sobrevivió, en las costumbres de la clase pobre, un sentido instintivo de la justicia; su raíz es positiva y legítima, y la forma del derecho consuetudinario es aquí tanto más natural cuanto que la existencia misma de la clase pobre ha sido hasta hoy, una simple costumbre de la sociedad civil, costumbre que no ha encontrado aún su lugar apropiado en la organización consciente de la sociedad*” 12.

Esta crítica de la propiedad privada, inseparable de la lucha contra la lógica despótica del capital, fue común a las diferentes corrientes del movimiento socialista original, tanto a las libertarias como a las comunistas. Todos reconocían que “la propiedad es el poder”. La cuestión parece al contrario ser hoy tabú, tanto en las filas de la socialdemocracia pasada a un liberalismo tibio como para los dirigentes post-estalinistas traumatizados por el fracaso de la economía gestionada burocráticamente. Cuando un editorialista de *Le Monde* titula “*Quien posee, dirige*” 13, no hay que ver una crítica del poder propietario, sino ¡un llamamiento al reforzamiento de la propiedad de la que depende la potencia del poder! Este editorialista se muestra más lúcido –o más franco– que Laurent Fabius cuando remite el problema a la prehistoria del movimiento obrero: “*Ahora este problema, a pesar de su papel central en la práctica y la reflexión de la izquierda en el siglo XX, está detrás de nosotros, incluso si, como a veces la luz de las estrellas, se continúa discutiendo sobre ella después de haber desaparecido hace tiempo*” 14. No hay que extrañarse si el mismo Fabius expresaba, ya en 1988, una confusión profunda de identidad: “*Si bien es claramente democrático, ¿en qué es socialista nuestro proyecto? Para decirlo de forma provocadora, ¿qué queda de la inspiración anticapitalista del socialismo de los orígenes y de nuestro propio programa de 1972?*”.

“ ¡Quien posee, dirige! ”

Para el dirigente de los Chicago boys y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, la cuestión de la propiedad es sin embargo menos anodina que para Laurent Fabius: “*La cuestión crucial no es saber si se hará intervenir al mercado o no. Todas las sociedades se sirven del mercado. La distinción crucial*

1/ Ver entre otros. E. P. Thompson, “L'économie morale de la foule dans l'Angleterre du XVIII siècle”, en *La guerre du blé*, Paris. Editions de la Passion, 1988.

2/ Karl Marx. *Rhenische Zeitung*, 25 octubre 1842.

3/ *Le Monde*, 17 julio 1999.

4/ *La Revue Socialiste*, primavera 1999.

es la de la propiedad” /5. Lo que quiere decir entre otras cosas que la conciencia de clase está más viva entre la derecha que entre la izquierda renegada. Contrariamente a la ilusión según la cual el accionariado asalariado significaría una socialización pacífica de la propiedad, su control real no ha estado nunca tan concentrado. Según los datos de la CNUCED, el centenar de empresas gigantes que “configuran el mundo”, empleaban seis millones de asalariados en 2000; con 60.000 sociedades y 500.000 filiales, controlaban la cuarta parte de la producción mundial. En Francia, desde el comienzo de los años 80, las rentas de la propiedad han progresado fuertemente en detrimento de las rentas del trabajo. La capitalización bursátil se ha disparado. El 2% de los grandes grupos franceses emplean un asalariado de cada dos y poseen el 87% de los capitales propios. Los 84 grupos con más de 10.000 personas asalariadas controlan la cuarta parte de la mano de obra, la mitad de los capitales fijos y la mitad de las ganancias brutas de explotación. Más que nunca, “¡quien posee, dirige!”.

Vivimos en el momento de la mercantilización y la privatización generalizada del mundo. Una no va sin la otra. No se trata solo de la privatización de las industrias y de los servicios, sino también de lo vivo, del saber, del agua, del aire, del espacio, del derecho, de la información, de las solidaridades. Esta contrarreforma liberal planetaria alimenta una cuádruple crisis: social, ecológica, democrática, ética. Social: la competencia de todos contra todos destruye las relaciones de sociabilidad y de civilidad. Ecológica: los designios a corto plazo del todopoderoso mercado minan a largo plazo las condiciones de reproducción de la especie. Democrática: la privatización de los poderes reduce el espacio público y vacía el debate político y sus competencias. Ética: las bodas bárbaras de las biotecnologías y del mercado siembran la duda sobre el tipo de humanidad que podemos llegar a ser.

La cuestión de la propiedad no se reduce en efecto a una forma jurídica o a una técnica de gestión económica. Solidaria de la lógica mercantil y de la acumulación del capital, determina la separación de los trabajadores respecto a los medios de producción, el fetichismo de la mercancía y la reificación de las relaciones sociales que resultan de ello. Cuando los manifestantes de Seattle, Porto Alegre, Génova o Barcelona, gritan que el mundo no es una mercancía y que no está en venta, van al corazón del mal que mina la civilización: si el mundo no es una mercancía, si todo no se puede comprar y vender, ¿qué lógica debe pues triunfar sobre la, implacable, de la carrera por los beneficios, del interés privado y el cálculo egoísta? /6.

Esta cuestión se hace explosiva, a medida que la relación de propiedad sobre la que se basa la ley del valor entra en contradicción cada vez más aguda con la socialización creciente del trabajo y con una incorporación creciente del trabajo intelectual acumulado al trabajo social. Como Marx había previsto en sus

5/ Milton Friedman, *Le Monde*, 20/07/ 2000.

6/ Ver principalmente *Actuel Marx* n° 29, “Critique de la propriété”. Paris PUF 2001.

Manuscritos de 1857-58, “*el robo del tiempo de trabajo de otro sobre el que reposa la riqueza actual*” aparece así como ‘una base miserable’, pues “*en cuanto el trabajo deja de ser la gran fuente de la riqueza bajo su forma inmediata, el tiempo de trabajo deja necesariamente de ser su medida y, como consecuencia, el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso*” 17. La exacerbación de esta contradicción constitutiva del proceso de acumulación capitalista está en la raíz del desorden del mundo, de su creciente irracionalidad, de los angustiosos desastres sociales y ecológicos. Es este desbarajuste del mundo el que ilustran las apasionadas controversias sobre el patrimonio común de la humanidad, sobre las patentes de lo vivo, o sobre la propiedad intelectual.

Los nuevos cercamientos

El debate sobre este último punto es particularmente revelador de la contradicción entre la socialización del trabajo intelectual y la apropiación privada de sus productos, difíciles de cuantificar. ¿Cómo apropiarse de forma privatizada un flujo de ideas o de informaciones? Si ese flujo puede ser objeto de un servicio, ¿puede ser cristalizado bajo la forma de propiedad exclusiva? James Boyle establece así un paralelo entre las “enclosures” (cercamientos) (las expropiaciones que acompañaron a la acumulación inicial del capital, evocadas por Marx en un magnífico capítulo de *El Capital*), y las nuevas *enclosures* de bienes intelectuales. La privatización de la tierra fue defendida en su tiempo en nombre del aumento de la productividad agraria que permitiría hacer retroceder penurias y hambres, aunque fuera al precio de una nueva miseria urbana. Asistiríamos hoy a “una nueva oleada de *enclosures*” que sus partidarios justifican a su vez con la carrera por la innovación o, en el caso de los organismos genéticamente modificados, con las urgencias de la alimentación mundial.

Hay sin embargo, entre los dos movimientos, importantes diferencias: mientras el uso de la tierra es mutuamente exclusivo (lo que uno se apropia, no puede ser usado por otro), el de los conocimientos y de los saberes no tiene “rival”. El uso de una secuencia genética, de un programa informático, o de una imagen digitalizada es ilimitado: el bien no se agota en su uso. Es por lo que el coste de reproducción no ha dejado de bajar, desde el monje copista hasta el correo electrónico, pasando por la imprenta tradicional y la fotocopia. La justificación de la apropiación privada pone pues el acento en la estimulación de la investigación más que en el consumo privado del producto. El argumento es, sin embargo, discutible desde muchos puntos de vista. Recientes investigaciones del Inserm llegan a concluir que los resultados cerebrales no se ven mejorados por promesas de ganancias financieras: estas investigaciones “*van en contra del sentido común según el cual la promesa de una recompensa financiera multiplicaría por diez el rendimiento intelectual; a igual dificultad, la motivación*

7/ Karl Marx. Manuscritos de 1857-1858. Paris. Editions Sociales, 1980, tomo 2, pg. 192.

financiera no mejora los resultados intelectuales” /8. Es incluso probable que en lugar de estimular la innovación, la propiedad intelectual lleve a frenarla por los efectos de monopolio que genera.

Pues la apropiación privada pone en marcha un verdadero círculo vicioso de la apropiación /9/. Por otra parte, precisamente por esto la tradición liberal clásica se esforzó en fijar límites a la apropiación. En una célebre carta a Isaac Mac Pherson, el presidente Thomas Jefferson subrayaba ya que la idea puede propagarse como el fuego sin perder nada en densidad, igual que el aire que respiramos circula sin perder en calidad. Conclusión: *“La invención no puede pues, por naturaleza, ser objeto de una apropiación”*. Este principio no prohíbe, sin embargo, garantizar las invenciones con un monopolio temporal del Estado cuando el bien común está en juego: *“La sociedad puede atribuir un derecho exclusivo de explotación de las invenciones”*. En esta perspectiva liberal tradicional, los derechos de propiedad son reconocidos, pero el monopolio representa el peligro principal, como muestra el discurso de Thomas Macaulay ante la Cámara en 1841. Esta desconfianza se inscribe en la tradición de las luchas contra los monopolios reales. Remite más a una crítica del abuso de apropiación privada de los bienes intelectuales que a una defensa positiva del dominio público o del bien común como tales. Se preocupa por el libre acceso a esos bienes más que de su apropiación social.

En esta perspectiva, la crítica del peligro de monopolio en materia de propiedad intelectual no resuelve por tanto la definición del dominio público. En 1966, una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibía así al Congreso autorizar las patentes que *“retirarían el saber existente del dominio público o reducirían el libre acceso a materiales disponibles”*. Esta sentencia concerniría evidentemente a la introducción de derechos de propiedad sobre la compilación de datos implicada por la directiva europea sobre Data Base.

Pero ¿qué es en concreto un bien común? ¿Un recurso libre de acceso, como las calles, los parques, o las redes de comunicación? En términos jurídicos, la defensa de los programas informáticos libres por medio de una Licencia Pública General (GPL) se basa en un contrato que fija las condiciones de evolución de un producto, y no en un principio de dominio público. El *copyleft* [*permiso de libre reproducción de un libro, canción, programa informático, etc... NdT*] se opone así al derecho del *copyright* [*derechos de reproducción reservados NdT*]... ¡en nombre del derecho de propiedad! El objeto de la GPL imaginada por Richard Stallman es en efecto *“hacer el programa libre creando un fondo común al que cada cual pueda añadir, pero del que nadie pueda restar”* /10/.

8/ *Le Monde*, 13/05/ 2002.

9/ James Boyle, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, <http://james-boyle.com>: *“Cuando un nuevo derecho de propiedad es establecido sobre cualquier bien informático, la única forma de asegurar eficazmente su asignación es conceder al que posee ese derecho un aumento del control sobre el consumidor o el usuario gracias a un sistema de precios discriminatorio”*.

10/ Ver Eben Moglen, “La programación libre y la muerte del copyright”, en *Multitudes*, nº5. Editions Exil, mayo 2001.

Se afirma así una concepción del dominio público como “concepto negativo” trazando el límite de lo inapropiable más que definiendo positivamente derechos colectivos sobre un bien común. Tres planteamientos distintos toman forma entonces: el de una crítica liberal, antimonopolista, de la apropiación intelectual; el de una definición mínima de reglas jurídicas de acceso comunes; finalmente, el de una defensa de un dominio público libre de acceso. Esta controversia apenas esbozada anuncia quizá una mutación de las definiciones de la propiedad privada, del bien público, y de sus relaciones recíprocas.

Descubrimiento/invencción

La cuestión se plantea igualmente bajo el ángulo de la remuneración del trabajo intelectual, de su naturaleza y de su forma: ¿salario, cobro por servicio hecho, derecho a una renta universal?. La cuestión no es nueva. Bajo el Frente Popular de 1936, el proyecto de Jean Zay sobre el derecho de autor significó un deslizamiento de la representación del “autor creador” al “trabajador intelectual”. Convertido en trabajador, el creador no es ya desde entonces propietario exclusivo de su obra. Resulta de ello un desplazamiento del derecho de propiedad (limitado en el tiempo) sobre el producto, a un derecho social a su acceso, así como una distinción esencial entre un derecho patrimonial y un derecho moral sobre la integridad y la presentación de la obra. Estas evoluciones tienden a poner al orden del día una superación de la división social del trabajo en vigor y un aumento de la socialización de la renta.

Los debates sobre las diferentes formas de patente, en particular la secuencia del genoma, plantean otro problema: el de la distinción entre descubrimiento e invención y de su interpretación jurídica. ¿Se puede poseer una idea cuando un programa informático no es en el fondo más que un elemento de la lógica aplicada, dicho de otra forma, trabajo intelectual muerto? Más generalmente, ¿se podría imaginar patentar las matemáticas para someterlas a un derecho de propiedad? Según Yann Moulier-Boutang, la socialización del trabajo intelectual llegaría a un estadio en que generaría un “proletariado cognitivo”, debido a un proceso de trabajo cada vez más colectivo. Esta socialización comienza a fin de cuentas con la práctica del lenguaje, que constituye indiscutiblemente un bien común de la humanidad. Hoy los costes de duplicación de la información caen y los bienes inmateriales escapan cada vez más al control de la propiedad en la medida en que no se agotan en su uso inmediato.

El derecho de propiedad intelectual tiende pues a atropellar al derecho liberal clásico y su legitimación de la propiedad por el trabajo. Resultado de ello son las confusas batallas jurídicas sobre la explotación del genoma, Napster, el principio del copyleft, o también el *Digital Millenium Copyright Act* de 1998, que da a los editores un poder legal absoluto sobre todo lo que un lector podría hacer de un libro electrónico. En estos casos, la patente es asimilable a un derecho de propiedad industrial: si la invención es definida como una solución

técnica susceptible de aplicaciones industriales, no se puede patentar una idea, una teoría científica, o una fórmula matemática. Sin embargo, los Estados Unidos han introducido en 1988 la patente de un animal genéticamente modificado, una rata, tras haber patentado una ostra considerada como “*un producto del ingenio humano*”. Una directiva europea de 1998 prevé que “*un elemento aislado de un cuerpo vivo o producido por un procedimiento técnico, incluida la secuencia parcial de un gen, puede constituir una invención patentable*”. El ministro francés de la Investigación en el gobierno Jospin, precisaba: “*Cuando se identifica la función particular de un gen y a partir de ahí se ponen a punto nuevos tests diagnósticos o nuevos medios terapéuticos, eso se convierte en una invención biotecnológica*” /11. De ahí las patentes del test de Myriad Genetics sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Antropología de la corrupción

“*¿Hay aún bienes sin precio?*”, pregunta Marcel Hénaff en *Le Prix de la Vérité* /12. O también: “*¿Habremos perdido el sentido de la carencia de precio?*”. Sin duda alguna, en cuanto que el saber, lo vivo, la solidaridad caen en el campo de la transacción mercantil. El auge paralelo de la “*scientific charity*”, de la “*ética de la empresa*” (de la que Etchegoyen hace una disciplina lucrativa) o de los que Marc Abèlés llama “*los nuevos filántropos*”, aparece así como un movimiento reflexivo del capital sobre su propia expansión sin límite. Genera en efecto una desligazón y una inseguridad sociales en las que se deshace el resto de reconocimiento ceremonial que sobrevivía en la civilidad y en la educación en lo cotidiano. Mientras un movimiento como el Mauss opone al horror económico del capitalismo un “*paradigma del don*” (Alain Caillé) fundado en la circulación generosa de bienes, no se trata, para Marcel Hénaff, de dos lógicas antagónicas o cronológicamente sucesivas, sino de dos órdenes heterogéneos. El problema no residiría según él en la mercantilización generalizada, sino en la venalidad, según la cual todo puede ya venderse, incluso lo invendible. De ahí su propuesta de una antropología de la corrupción. Toda la cuestión está sin embargo en saber si la venalidad es disociable de la mercantilización o si constituye su corolario lógico, igual que las mafias privadas prosperan sobre las ruinas del espacio público.

Estos rompecabezas filosófico-jurídicos son el fruto de contradicciones cada vez más explosivas entre la socialización del trabajo intelectual y la apropiación privada de las ideas de una parte; entre el trabajo abstracto que es objeto de la medida mercantil y el trabajo concreto difícilmente cuantificable que juega un papel creciente en el trabajo complejo, de otra parte. De estas contradicciones

11/ Roger Gérard Schwartzberg, *Le Monde*, 21/07/ 2002.

12/ Marcel Hénaff, *Le prix de la Vérité*, Paris, Seuil, 2002.

resulta una desreglamentación generalizada de la ley del valor y de su medida miserable de la riqueza social. “*Bien has excavado, viejo ratón*”, ironiza Moulier-Boutang /13.

¿“ Un espectro recorre la red ” ? /14

Si la fórmula es, en una cierta medida, pertinente, no permite sin embargo responder a las cuestiones estratégicas planteadas por las metamorfosis del capital. Para la mayor parte de los colaboradores de un reciente número de la revista *Multitudes*, la nueva alternativa histórica se sitúa entre el “capitalismo cognitivo” y un “cyber comunismo” del que el “cognitariado”, y no ya el proletariado, sería el sujeto activo. Las aporías del derecho de autor o del copyright se resolverían así en la generalización de la renta universal garantizada, liberada de las cadenas de la ley del valor. La naturaleza misma del valor trabajo así como sus modalidades de extracción se verían, en efecto, afectadas radicalmente por esta gran transición en el interior mismo del capitalismo. La socialización del trabajo, culminando en la socialización del trabajo intelectual, llevaría lógicamente a la socialización integral del salario puesto que finalmente, “somos todos autores de una forma o de otra”. El “*capitalismo de la información*” tendería así espontáneamente “*hacia una cierta forma de comunismo*” /15, un “*comunismo de la información*” que se definiría no ya por la “*electricidad los soviets*”, sino por “*las redes y los flujos inapropiables y la renta universal*”.

Los cambios técnicos conllevarían así cambios culturales y estratégicos que obligarían a renunciar a las viejas estrategias apocalípticas del movimiento revolucionario: “*En otra época, la abolición del capitalismo era contemplada bajo sus aspectos apocalípticos: levantamientos revolucionarios, movilización de masas, y finalmente dictadura modernizadora. Es todo lo contrario con el cyber-comunismo que es vivido como una experiencia cotidiana sin ningún estrépito. En lugar de cavar la tumba de la economía de mercado, los americanos están superando tranquilamente el capitalismo*” /16.

Esta beatitud ante la revolución tranquila del cyber-mercado reposa en última instancia en un determinismo tecnológico furioso: poco importa que la sociedad se descomponga, el ordenador y la red asegurarán la marcha adelante hacia la cyber-utopía. Sin embargo, “el capitalismo cognitivo” no suprime más la división social del trabajo de lo que supera el fetichismo de la mercancía. Transforma solamente, y a veces refuerza, las formas de la alienación. Nada indica, en efecto, que los trabajadores eventuales del cybertrabajo sean más

13/ Ver *Multitudes* n° 5, op.cit.

14/ Richard Barbrook, *ibid.*, p. 186.

15/ Pierre Lévy, “L’anneau d’or, intelligence collective et propriété intellectuelle”, en *Multitude+*, n° 5, op.cit.

16/ Richard Barbrook, *Multitudes* n° 5, op.cit. p. 197.

capaces de resistir colectivamente a la heteronomía del trabajo impuesto y de encontrar en su práctica cotidiana las palancas para una resistencia colectiva a la explotación. Si cada vez es más difícil reducir un tiempo de trabajo heterogéneo y discontinuo a la abstracción de su medida mercantil, y si esta dificultad justifica teóricamente la idea de disociar el derecho a la renta del trabajo efectivo, la solución práctica puede llevar a resultados diametralmente opuestos según las relaciones de fuerzas. En una variante liberal, la renta universal garantizada se reduciría a una red de seguridad mínima que contribuiría bien a dismantelar el salario mínimo, bien a arrastrarle hacia abajo: ¡la nueva plebe tendría así derecho a una renta mínima de supervivencia, más algunos juegos televisivos. Inversamente, la garantía de una renta universal al menos igual al salario mínimo interprofesional debería significar un aumento de la socialización del salario y una extensión de las garantías contra la enfermedad, los accidentes, la vejez, y las intermitencias del trabajo y de la formación /17. Hay que precisar que, si este objetivo puede tener un valor prospectivo pedagógico, presupone una transformación cualitativa de las relaciones de fuerza entre las clases cuando en este momento nos encontramos defendiendo un sistema de solidaridad social duramente atacado por las políticas liberales. No haría falta menos que un nuevo junio de 1936 [*fecha símbolo del Frente Popular francés. NT*] un nuevo mayo de 1968.

En fin, una lógica alternativa a la de la mercantilización y de la apropiación privada del mundo no podría reducirse a una sola medida, por decisiva que fuera... Pasa, por supuesto, por un nuevo auge de la apropiación social y por una extensión sin precedentes del dominio público. Pero supone igualmente una revolución fiscal, una revolución de la educación permanente, una reducción radical del tiempo de trabajo y un debilitamiento de la división social del trabajo, una reorganización de los ritmos de vida (no sólo de los ritmos cotidianos o semanales de trabajo, sino su redefinición a lo largo de toda la vida activa), un cambio radical del derecho a la renta y a los servicios, en el sentido de una debilitación de las relaciones monetarias. No es muy verosímil que la “superación tranquila” del capitalismo por la extensión rizomática de las nuevas tecnologías baste para ello.

17/ Ver Dominique Mezzi: “Protection sociales: universalisation et abolition du salariat”, en *Critique communiste*, n° 166, primavera 2002.



2 La privatización es un robo

Estado y apropiación social

Thomas Coutrot

La nota de la Fundación Copérnico [*entidad pluralista en la que participan diversos especialistas en ciencias sociales de la izquierda francesa. NT*] sobre la “apropiación social” ^{1/}, intenta reactualizar un debate fundamental, abandonado por una izquierda gubernamental convertida de buen grado o por la fuerza a las privatizaciones. Dos puntos fundamentales resultan de la nota y logran la adhesión. Por una parte, la cuestión de la propiedad sigue siendo fundamental. El balance de las privatizaciones, esbozado de forma convincente, lo ilustra con largueza: de la electricidad norteamericana a los ferrocarriles británicos pasando por el agua o el teléfono, las privatizaciones han implicado en la mayoría de los casos subidas de precios, bajada de las inversiones, degradación de la calidad y de la seguridad y aumento de las desigualdades de acceso. Para que la colectividad democrática pueda controlar aunque sea un poco su destino, y que un proyecto de real transformación social pueda ver la luz, las principales palancas estratégicas de la economía (servicios públicos, sistema de crédito, grandes empresas que tienen un poder oligopolístico) deben escapar a la lógica reductora y cortoplacista del beneficio máximo, y destacar formas de propiedad social, para que el interés general pueda prevalecer. Por otra parte, la nacionalización no basta. Hay que desarrollar un proceso de democratización permanente del poder y de la gestión, que incluya a la vez a los actores internos de esas empresas (los asalariados) y los actores externos (los usuarios, consumidores, poderes públicos locales y nacionales). El objeto del concepto de apropiación social es dar cuenta de este proceso. La nota es rica en elaboraciones y proposiciones sobre este tema, y de ahí su gran interés.

^{1/} Ed. Syllepse, 2002; nota firmada por Tony Andreani, Alain Baron, Laetitia Clair, Anicet Le Pors, Michel Rovere y Yves Salessse.

Sin embargo, los autores se quedan a medias. La renovación de perspectiva propuesta por el concepto de apropiación social sigue siendo insuficiente, a falta de un análisis suficientemente crítico de la naturaleza del Estado (y más particularmente del Estado francés), y de una subestimación de las potencialidades de la democracia participativa. El balance de las nacionalizaciones revela con la mayor claridad el primer callejón sin salida, que se refiere a la sociología crítica del Estado. La crítica principal que se dirige en la nota a las nacionalizaciones llevadas a cabo por la izquierda a partir de 1981 es la siguiente: *“Se supone que los poderes públicos representan el interés general (...) (pero) dejan a menudo en la práctica el poder a la dirección de las empresas, es decir a su tecnoestructura”* (p. 95). Deseo mostrar que este análisis superficial deja en la sombra un debate esencial y socava la credibilidad de las argumentaciones en su conjunto.

El Estado, ¿" garante del interés general" ?

Según los autores de la nota, es por falta de voluntad política que “los poderes públicos” dejarían a los dirigentes de las empresas públicas dirigirlas a su guisa. Pero ¿cómo podría ser de otra forma en la configuración estatal actual?. La nota propone que el “Estado”, apoyándose en los asalariados y usuarios que estarían en unos Consejos de Administración (CA) democratizados, imponga a la tecnoestructura de las empresas públicas una política correspondiente al “interés general”. Para que un esquema así funcione, es preciso que el “Estado” sea capaz: 1) de hacer emerger de forma democráticamente satisfactoria la expresión del “interés general”; 2) de determinar de forma unívoca las decisiones de gestión conformes a ese “interés general”, y 3) de obtener y controlar su aplicación estricta por la tecnoestructura. Sin embargo esto supone un grado de independencia muy considerable entre Estado y tecnoestructura, a fin de que: 1) la formulación misma de las alternativas de política (la definición de las opciones posibles entre las que el CA deba decidir) pueda evitar ser desviada al comienzo por el prisma de los intereses de esta tecnoestructura, 2) que las auto-denominadas “limitaciones técnicas” o “de gestión” no vengan inopinadamente a imponer decisiones operativas contradictorias con las orientaciones democráticas, y que 3) ninguna colusión venga a manchar el buen control de la aplicación de las decisiones. Estas hipótesis me parecen contradictorias con un mínimo de análisis sociológico del Estado, que es en mi opinión el gran ausente de la nota sobre la “apropiación social”.

Gobierno y Estado

Despejemos en primer lugar una confusión demasiado corriente, que la nota no evita claramente: el gobierno no es el Estado. El término “poderes públicos” que amalgama gobierno y Estado, no permite plantear la distinción indispensable

entre los “políticos” (ministros y sus consejeros) y los altos funcionarios profesionales de la gestión administrativa. Los primeros tienen opciones partidarias proclamadas, programas más o menos ideológicamente marcados y cuentas que rendir a sus electores. Poseen oficialmente la autoridad que emana del sufragio universal, pero sería ingenuo creer que pueden imponer sus puntos de vista a los segundos, que serían simples ejecutantes. Menos aún, por otra parte, en la medida en que las orientaciones de los “políticos” estarían en ruptura con el consenso en vigor en el seno de las élites estatales. En realidad, el ejercicio del poder ministerial es una incesante negociación entre los “políticos” y los altos funcionarios, que poseen armas decisivas como el dictamen de los expedientes y el dominio de los procedimientos.

Sin embargo ahí no está lo más importante. La fórmula de Engels sobre el Estado, “consejo de administración de la burguesía” no agota el tema, pero indica bien una de las principales facetas del Estado en una sociedad capitalista: garantizar la reproducción de las condiciones generales de la acumulación. Estas condiciones son económicas (una tasa de ganancia satisfactoria, estabilidad monetaria, infraestructuras...), sociales (mantenimiento de la paz social) e ideológicas (reproducción de la ideología dominante, a través de los “aparatos ideológicos del Estado”). Más allá de esos aspectos funcionales, el Estado es también una capa social específica (la alta burocracia, de la que sale en su mayor parte la “clase política”), que ejerce su dominio de una forma específica, apoyada en la legitimidad de los títulos escolares y justificada por la promoción del “interés general”, tal como es definido por el bloque histórico en el poder. La “nobleza de Estado”, como dice Bourdieu, “*sirve a los ‘intereses superiores’ del Estado –en nombre de la idea de entrega al ‘servicio público’– en la medida en que haciéndolo, sirve sus propios intereses*” /2. El análisis de Bourdieu, aunque datado en los años 80, no me parece que haya perdido en nada su pertinencia: describe cómo “la oligarquía financiera de Estado” /3, constituida en la “intersección de la banca, la industria y el Estado” /4, ha acumulado a la vez capital económico (fortunas familiares) y capital cultural (sobre todo gracias al aumento de poder de la ENA [*institución en la que se forma la élite de la Administración en Francia. NTJ*]), para constituirse en fracción dominante de la gran patronal francesa. Dicho de otra forma, la interpenetración de las redes de poder entre el capital económico y el poder político lleva a una fusión, ilustrada por la gran fluidez de los movimientos del alto personal del Estado entre el servicio de éste y la alta finanza o la dirección de grandes grupos públicos o privados /5.

2/ *La Noblesse d'Etat. Grandes écoles et esprit de corps*. Ed. de Minuit, 1989, p.537.

3/ *Ibid.*, p.476.

4/ *Ibid.* p.472.

5/ Concerniente a Bercy, el caso de Dominique Strauss-Kahn (abogado de negocios de alto nivel entre dos puestos ministeriales) o de Francis Mer (ex-PDG del mayor trust siderúrgico europeo) están suficientemente frescos en las memorias.

La Nota de la Fundación Copérnico parece al contrario tomar al pie de la letra la pretensión de los “poderes públicos” de “representar el interés general”, sin explicitar por qué mecanismos la representación dominante del interés general es predominantemente construida de forma que coincida milagrosamente con los imperativos de la reproducción del orden establecido, por injusto u opresor que sea, y con los intereses de las élites capitalistas y estatales. En cualquier caso, ningún análisis sociológico crítico del Estado viene a aclarar los contenidos reales de la construcción del “interés general” 6/.

Sin embargo, es por supuesto en nombre del “interés general” como han sido llevadas a cabo las políticas neoliberales de privatización y de desreglamentación: interés general construido sobre la base de una representación de la sociedad en la que los monopolios burocráticos y las rigideces administrativas eran el principal obstáculo para el despliegue de la libre competencia y de la creatividad de los empresarios, fuentes exclusivas del crecimiento y de la riqueza social. Hay pues que poder criticar la forma en que ha sido construida esta representación, y para eso analizar el poder de los aparatos ideológicos de Estado que son el sistema universitario y sobre todo las grandes escuelas (en particular Ciencias Políticas y la ENA), así como las revistas (*Esprit*, ...) y fundaciones (*Saint Simon*...) y demás *think tanks* privados. Para actualizar el trabajo de Bourdieu, habría que describir la interpenetración de las capas burocráticas de las altas esferas del Estado (principalmente de su fracción “económica”: Direcciones Centrales del Ministerio de Hacienda, Inspección General de Hacienda, Banco Central, ...) con la esfera de la finanza, analizar el dominio creciente de las finanzas sobre los medios y la prensa, incluso la prensa escrita “de izquierdas” 7/, etc...Estos mecanismos de construcción del interés general son particularmente eficaces, como lo ilustra el hecho de que la agenda neoliberal, veinte años después de su invención, continúa dominando las representaciones del conjunto de la clase política, e incluso del electorado (... aunque con dificultades crecientes), a pesar de los innumerables desmentidos a las promesas de bienestar social hechas por sus promotores.

Redefinir el modo de construcción del “interés general”

Ningún proyecto progresista radical podrá discutir seriamente la hegemonía liberal sobre la definición del interés general, sin socavar profundamente esos mecanismos de producción de consenso por las élites procapitalistas. Lo que está en juego es ganar la batalla por una redefinición alternativa del “interés general” que corresponda efectivamente a los intereses de la mayoría de la población. Es,

6/ Se podría por otra parte hacer el mismo reproche al libro de Yves Salessse, *Réformes et Révolution*, Agone 2001, que es sin embargo más preciso que la Nota Copérnico sobre la crítica del funcionamiento del aparato estatal.

7/ Serge Halimi y el Acrimed aportan preciosas contribuciones a este respecto.

por supuesto, importante que las representaciones críticas de este consenso y las visiones alternativas puedan acceder al sistema mediático, y consiguientemente asegurar un verdadero pluralismo en este terreno, condición que como vemos todas las noches en el telediario de France 2 [*cadena pública francesa. NT*], la existencia de cadenas “públicas” no basta para cumplir... Pero se trata sobre todo de permitir la emergencia de verdaderas “agendas” /8 alternativas, que expresen de forma coherente y convincente las necesidades y aspiraciones de las capas sociales mayoritarias abandonadas o sacrificadas por el neoliberalismo. La construcción de tales perspectivas alternativas, a escala nacional, europea e internacional, es sin duda decisiva para aumentar la cohesión de las capas populares, mejorar la relación de fuerzas entre clases y comenzar a poner en crisis a la hegemonía liberal. Se podría entonces asistir a fracturas en el seno del aparato del Estado, y principalmente en las direcciones de las grandes empresas públicas, entre los dirigentes más integrados en las nuevas élites transnacionales de dominante financiera, y los tecnócratas o técnicos más adeptos de la ética y la calidad del servicio público (por otra parte sin duda los menos dotados en capitales económicas y simbólicos...).

Pero esto /9, supone definir, tanto en la esfera política como en la esfera económica, formas nuevas de democracia, basadas en la circulación más amplia de la información y el reparto de los conocimientos, permitiendo a cada persona apropiarse, individual y colectivamente, de los contenidos de los debates sociales y políticos sobre el futuro de los servicios públicos, y rechazar el pretendido apoliticismo de los expertos y los tecnócratas. De forma más general, más allá incluso de la cuestión de los servicios públicos, este tipo de perspectiva apunta a la radicalización de la democracia en todos los terrenos: supone y favorece al mismo tiempo un neto retroceso de la resignación y de la indiferencia de la población, una elevación del nivel de politización y de interés por el bien común, una capacidad de apropiarse de los términos de los debates para reformularlos de forma diferente, rechazando los marcos de pensamiento impuestos por los dominantes, abriendo el campo de lo pensable y por tanto de lo posible. Supone nuevas alianzas entre “expertos” y trabajadores-ciudadanos, entre técnicos, científicos y movimientos sociales. Es el segundo callejón sin salida de la Nota Copérnico: se mantiene en una visión tibia de la gestión pública, en la que los sindicatos y los asalariados se contentarían con un papel de contrapoder o de influencia ante las tecnoestructuras políticas o económicas, que continuarían poseyendo el monopolio de la formulación de los problemas estratégicos y de la elaboración de las soluciones.

8/ En el sentido anglosajón de “puesta al orden del día”: los politicistas han mostrado cómo la hegemonía política se construía haciendo aceptar como prioritarias ciertas cuestiones en el debate público e institucional (ej.: la inseguridad en las últimas campañas electorales), y ofreciendo de forma sistemática y articulada un abanico de soluciones coherentes con los diagnósticos popularizados.

9/ Este parrafo (y sin duda otros...) debe mucho a discusiones siempre fructíferas con Catherine Samary.

A falta de un movimiento de esta amplitud, no será posible desestabilizar el consenso neoliberal e influir sobre las líneas potenciales de fractura que existen en el interior del aparato estatal. Este movimiento de democratización radical, puede ser denominado “autogestión” en el caso de la economía y “desestatalización” en el caso de la política. Intenta erosionar, a falta de poder abolirlas completamente, las barreras y privilegios materiales y de información que aíslan a los dirigentes de los dirigidos, favorecen la esclerosis de la participación democrática, reproducen los esquemas de sumisión y de dominación económica y simbólica. La Nota Copernico afirma –y es difícilmente discutible– que “*en el contexto actual, dominado por el mercado, marcado por la volatilidad de los compromisos de los partidos, la pobreza del debate político y una gran autonomía de las tecnoestructuras, sería peligroso para los representantes de los asalariados y de los usuarios emprender otra cosa que una participación conflictiva*” (p.104). De ahí el rechazo de la “*cogestión a menudo sinónimo de compromiso*”. Pero, ¿estamos condenados a permanecer “en el contexto actual”? Un proyecto de transformación social, ¿no apunta justamente a restaurar el debate político, la credibilidad de los compromisos, la responsabilidad de los dirigentes ante los poderdantes?

La autoorganización democrática en el corazón de la apropiación social

No se puede seriamente rechazar las perspectivas de desestatalización (calificada de “*consigna sumaria e imprudente*” p.66) y de autogestión (término ni siquiera evocado en el texto), como lo hace Copérnico, con el único motivo de que en el “contexto actual” tendrían consecuencias perversas y llevarían a “compromisos”. Ciertamente los autores llaman al desarrollo de la “*autoorganización del trabajo*” (p.98). Pero reservan a esta última un papel muy modesto: “*suprimiendo los despilfarros, liberando la inventividad técnica, ella (la autoorganización) aumenta la productividad de los asalariados (...) y reduce los riesgos para los asalariados pero también para el medio ambiente*”. La autoorganización es pues evocada no para contestar la división del trabajo entre concepción y ejecución, para asociar a cada uno (individual y colectivamente) a la definición de las grandes orientaciones estratégicas mediante una intensa actividad democrática y deliberativa, sino... para mejorar la eficiencia técnica y ecológica de la producción. A la inversa, una real perspectiva de apropiación social del poder político y económico no puede ignorar el papel estratégico de la autoorganización de los trabajadores, de los consumidores, de los usuarios... y de los ciudadanos.

Al esquema “copernicano” de un conflicto entre tecnoestructura y asalariados en el que estos últimos jugarían un papel de contrapoder, se debe oponer un proyecto que apunte a una superación tendencial del corte entre dirigentes y dirigidos, a la

reducción drástica de las zonas de delegación ciega, a la participación democrática más directa posible en las decisiones importantes (incluso la elección y la revocación de los dirigentes). Por supuesto la tecnoestructura continuará existiendo, y la división del trabajo entre concepción y ejecución no se extinguirá en unos años, ni siquiera en unos decenios. Por supuesto, legalmente, habrá que encontrar una articulación entre la necesaria primacía de las decisiones políticas nacionales y europeas (el plan democrático) y las orientaciones de los grandes servicios públicos. No se trata de entregar “*todo el poder a los soviets*”; los asalariados y usuarios autoorganizados deberán inscribirse en las grandes prioridades generales producto del debate democrático.

Pero sin un esfuerzo consciente y voluntarista para reducir tendencialmente la división del trabajo, sin una inversión a largo plazo en procedimientos e instituciones que permitan a la mayoría normalmente silenciosa plantear ella misma las cuestiones y aportar respuestas, se caerá en las hábitos del pasado. Ciertamente, puede tratarse a veces de inversiones aparentemente pesadas y poco rentables. Ciertos comentaristas del presupuesto participativo de Porto Alegre se preguntan así para saber si una buena planificación centralizada del desarrollo urbano, apoyándose en una amplia consulta de las asociaciones de barrio, no llegaría en la práctica a los mismos resultados que el pesado y complejo proceso de democracia directa repetida todos los años, que pasa por centenares de reuniones de barrio, millares de páginas de proyectos de las comunidades locales, múltiples complicados compromisos. Quizá, en términos de carreteras asfaltadas o de redes de saneamiento, pero seguramente no en términos de politización de los habitantes, de elevación del nivel democrático de la ciudad, de instauración de una cultura hegemónica de democracia radical. Sin embargo, éstas son condiciones primordiales, en el plano político, de la profundización de una experiencia alternativa que explore otros caminos que los del dogma neoliberal. A pesar de la hostilidad casi unánime de los medios patronales y de los medios, el PT de Porto Alegre ha ganado cuatro veces sucesivas las elecciones municipales, e incluso desde la primera vuelta en las dos últimas elecciones, sin que se cristalizara una nueva élite “rosa” o “roja” que pensaría en defender sus intereses propios ¹⁰. La apropiación social no puede ignorar las conquistas de Porto Alegre...

10/ Esto a pesar de los desgarramientos internos en el PT, que amenazan con hacerle perder el poder a nivel del Estado de Río Grande do Sul en las próximas elecciones de octubre 2002 [*así ocurrió. NT*].



3 La privatización es un robo

El debate sobre la financiación de las pensiones

Michel Husson

El movimiento contra el proyecto de reforma de las pensiones habrá tenido por efecto un muy rápido desplazamiento del debate ideológico en Francia ^{1/}. Frente a un gobierno tensado sobre el principio thatcheriano según el que “no hay alternativas”, el movimiento reclamaba, justamente, un discurso ideológico que permitiese legitimar el rechazo del plan Fillon, presentado como inevitable.

Los escenarios alternativos

Ese discurso se ha construido progresivamente alrededor de un escenario basado en las dos siguientes reglas:

- la masa salarial (incluidas las cotizaciones) debe aumentar como el ingreso nacional
- la pensión media debe progresar tan rápido como el salario medio neto.

Se demuestra entonces que el poder de compra de cada persona, activos y jubilados, puede aumentar cada año como la productividad del trabajo, menos un cierto “coeficiente corrector” que corresponde al más rápido incremento del número de jubilados que el de activos. Las estimaciones medias conducen, en el caso francés, a las siguientes magnitudes cifradas: la productividad aumentaría de media el 1,8% anual entre los años 2000 y 2040, de la que sería preciso detraer el 0,5% para los nuevos jubilados. Quedaría, pues, una progresión del 1,3%, es decir, el doble de lo que se ha conocido durante los últimos 20 años. A ese ritmo, el poder de compra de todo el mundo habrá aumentado en dos tercios

^{1/} Se encuentran numerosas contribuciones a ese debate en el portal “Vive la réparti!”: <http://reparti.free.pdf>.

desde ahora hasta el 2040. No hay pues explosión del sistema de pensiones y la sacrosanta competitividad no resulta amenazada, ya que la parte de los salarios permanece constante.

Se trata de un esquema posible, explícitamente validado por el muy oficial Consejo de Orientación de las Pensiones y al que no se puede oponer ninguna objeción previa de tipo económico. Las negativas gubernamentales en cuanto a la posibilidad de otras alternativas no expresan otra cosa que una voluntad muy ideológica de cerrar el debate desde su inicio. Sirven de cobertura al principio extremadamente rígido de la patronal consistente en rechazar cualquier aumento del tipo de cotización, incluso aunque no afecte a los beneficios. Por otra parte, tiene razón en un sentido. En efecto, si la movilización social fuese lo suficientemente fuerte para imponer esa solución, es muy probable que no se detuviese a medio camino y pusiese en cuestión la actual distribución de los ingresos.

Hay que decir que el balance de los últimos veinte años es particularmente claro en el caso francés, aunque también se asemeja a la evolución media en Europa. Entre 1982 y 2002, la parte de los salarios sobre el valor agregado de las empresas ha retrocedido ocho puntos (desde el 72% al 64%). Contrariamente a las afirmaciones neoliberales, la tasa de inversión ha permanecido aproximadamente constante, en los alrededores del 20%. Es, pues, el beneficio no invertido (dicho de otra forma, los ingresos financieros) el que ha progresado en ocho puntos, en detrimento de los salarios, pasando desde el 8% al 16% aproximado del valor agregado de las empresas. Esa enorme transferencia no ha tenido ningún efecto saludable, ni sobre la competitividad, ni sobre la acumulación, ni sobre el empleo. Se trata de una pura captación de riquezas, sin contrapartida alguna. El fondo del asunto es, pues, simple: la progresión virtual de la parte de los ingresos destinada a los pensionistas representa una amenaza para la actual forma de distribución. Hay que escoger entre las remuneraciones de los accionistas y las pensiones. Así, es esencial impedir que la cuestión se plantee en esos términos, ya que la alternativa aparece entonces con una simplicidad bíblica: sí se pueden pagar las pensiones, pero a condición de pagar menos ingresos financieros.

Morder sobre los ingresos financieros

La forma más simple y más directa de incrementar la parte salarial en el ingreso es incrementar el tipo de cotización, y, más precisamente, el tipo de cotización patronal, a fin de indicar claramente que ese incremento no debe ser compensado por un freno del salario directo, sino que debe, al contrario, morder sobre los ingresos financieros. Sin embargo, otras dos proposiciones han aparecido en el debate y adquirido una cierta popularidad. La primera consiste en ensanchar, más allá de la masa salarial, la base sobre la que se calcula la cotización; la segunda en la tasación de los ingresos financieros. Los argumentos avanzados a favor de uno u otro de estos dispositivos merecen discusión.

El ensanchamiento de la base de cotización suele ser presentado como una puesta a contribución más apropiada de las empresas, ya que las cotizaciones serían calculadas a prorrata del valor agregado, en lugar de sobre la masa salarial. Esta medida solo tiene pues sentido a escala sectorial: las empresas que utilizan mucha mano de obra contribuirían menos al alza de las cotizaciones que aquellas en las que el peso de los salarios es menos elevado. Esta idea según la que un mejor reparto de las “cargas” podría asegurar más fácilmente la financiación de las pensiones, parece obvio /2: el hecho de que las empresas de mano de obra paguen muchas cotizaciones constituiría una desigualdad de trato que sería, además, una especie de prima a la mecanización contra el empleo. Sin embargo, ese debate choca con varias objeciones.

Todo ese razonamiento se plantea como si, debido a las modalidades de imposición de las cargas sociales, las empresas con débiles gastos directos de salarios hiciesen mucho más beneficio que las otras. Tal no es la situación: existe en efecto una tendencia –perfectamente localizable estadísticamente– a la igualación de las tasas de beneficio. Ella se realiza a través de la formación de los precios relativos de los diferentes sectores, los intercambios entre ramas y la indización del salario sobre la inflación. Los precios se fijan aplicando una tasa de beneficio medio al coste total, sin distinguir entre el salario y el resto (materias primas, compras intermedias o amortización del capital fijo). Las empresas cuyas cotizaciones aumenten van a reaccionar incrementando su precio y haciendo presión sobre sus suministradores de fuerte contenido de mano de obra para que repercutan las reducciones de cargas sobre sus precios /3. Cualquier modificación en el reparto del salario indirecto sería así tendencialmente absorbida por movimientos de los precios relativos, de los que nadie puede asegurar que tuvieran un efecto global positivo.

En fin, la sustitución capital-trabajo es muy poco sensible al costo relativo del capital y del trabajo. Tasar las máquinas o el valor agregado significa en ambos casos tasar al capital. Haciendo a la máquina un poco más cara y al trabajo un poco menos caro, se espera frenar la mecanización y favorecer un mayor contenido en empleos de la producción. Pero ello es situarse en el marco del pensamiento dominante, admitir que los neoliberales tienen razón y que una baja del coste del trabajo sería la vía real de la creación de empleos. Tal como funciona el sistema, la inversión permanece como uno de los elementos determinantes de la competitividad “no de precios”, basada en la calificación del trabajo. El ensanchamiento de la base de cotización, admitiendo que desempeñase un papel de incitación, se pondría a la búsqueda de esta forma de competitividad.

2/ El debate no es nuevo. Es por lo que retomo, sin cambiar gran cosa, un artículo ya antiguo: Michel Husson, “Financement de la protection sociale: ne pas lâcher la proie pour l’ombre”, *Collectif* n° 27, julio de 1995.

3/ Jacques Bass, “Valeur ajoutée et impôt machine: avantages et limites pour l’emploi”, *CFDT-Aujourd’hui* n° 111, diciembre de 1993. Este artículo ha sido redactado “a partir de la exposición de un experto obligado a guardar el anonimato”.

Una idea próxima la encontramos en la propuesta de economistas del PCF /4 de una modulación de los tipos de cotización. Según ellos, “las empresas que incrementan la parte de los salarios y de la formación en el valor agregado serían sometidas a tipos más bajos de cotización, lo que las incitaría a desarrollar el empleo y aumentaría las cotizaciones”. Este discurso es incoherente. En efecto, de dos cosas una: si las empresas obedecen a los comportamientos descritos por la teoría dominante, van a desarrollar el empleo hasta el punto en que las bajas de cotización compensen el aumento de salarios y, así, esa medida milagro para el empleo no conseguirá, además, “incrementar las cotizaciones”. Y si las empresas son poco sensibles al costo del trabajo, entonces esas bajas de cotizaciones no pueden ser una respuesta a la financiación de las pensiones. Las empresas se aprovecharían del “chollo”, sin contratar más. Las modulaciones deberían limitarse a un papel de sanción en relación con un recurso exagerado a las diversas formas de trabajo precario.

Una perturbación fundamental

Esta proposición tiene el mérito de ir al fondo del asunto, ya que se trata precisamente de reducir los ingresos financieros y aumentar los salarios. Sin embargo, no está exenta de críticas: esa medida transfiere la volatilidad financiera a los recursos de la seguridad social; crea una ligazón positiva perversa con la buena salud de los rentistas, puesto que la financiación de las pensiones quedaría mejor asegurada cuanto más elevados fueran los ingresos financieros. Esta objeción se aplica igualmente a la sugerencia de Dominique Plihon de una “especie de Tasa Tobin” establecida sobre las transacciones de bolsa /5. Esa voluntad de anclar el salario sobre las finanzas es sin duda muestra de una insuficiente comprensión de las raíces de la financiarización, que se nutre del bloqueo salarial.

Una tal medida tendría por efecto la fiscalización de una fracción del salario socializado. Esta disociación entre las pensiones y los salarios introduciría una perturbación fundamental en el funcionamiento del régimen de reparto. Su equilibrio contable, muy simple (pensión x número de pensionistas = masa salarial x tipo de cotización) se resuelve naturalmente mediante el tipo de cotización. El agregado de recursos suplementarios muy irregulares tendría como consecuencia la disolución de ese equilibrio contable. Se introduciría así una peligrosa ambigüedad en las reglas de equilibrio del sistema. Si aumenta la necesidad de financiación, ya nada precisa como se debe realizar el ajuste. La dualidad de los recursos será invocada por la patronal para rechazar cualquier progresión de la cotización, mientras que se ejercerán continuas presiones sobre los impuestos que graven a los ingresos financieros.

4/ PCF: Partido Comunista Francés (nota del traductor).

5/ Paul Boccara, Yves Dimicoli y Catherine Mills, “L’illusion de la non-taxation du capital”, *Libération*, 30 de junio de 2003.

Evidentemente, estas reservas no cuestionan la reivindicación que exige que cualquier forma de remuneración salarial esté sometida a cotización, de forma que se evite la “canibalización” que pondría en competencia un salario “cargado” frente a pagos a fondos de ahorro exentos de cotización.

En fin, ¿estas mismas reservas no significan que haya que estar en contra de la tasación de los ingresos financieros! Pero ésta debe constituir un ingreso del presupuesto del Estado y, en ese concepto, contribuirá al pago de las pensiones de los funcionarios. En otro caso sería necesario imaginar un complicado circuito en el que el producto de esa tasación sería devuelto a la caja de pensiones que, a fin de carrera, abonaría lo que en el fondo es salario. ¿Desde cuando se debe crear un impuesto para pagar los aumentos de salario que se reivindican? Entrar en ese sistema implica el riesgo de desencadenar una mecánica infernal que conduciría a nuevas regresiones. El recurso al impuesto supone admitir que el coste del trabajo es demasiado elevado y que se debe financiar una parte de forma desviada, de otra forma que por el salario. Se entra entonces en la temible lógica del impuesto negativo (la “prima por el empleo” de Fabius en el caso francés) que consagra los bajos salarios y los completa mediante recursos fiscales.

En todo caso siempre habrá un Michel Rocard para inventar una nueva CSG (Contribución Social Generalizada) que hará pagar a los asalariados lo esencial de lo que se habrá decidido nunca reclamar a los empresarios.

Una coherencia temida

Finalmente, el salario constituye una especie de deducción en la fuente sobre los ingresos financieros y no se ve mal que ventajas estas fábricas de gas presentarán en relación con un aumento regular y programado del tipo de cotización. No hay, además, ninguna razón para pensar que su puesta en práctica fuese políticamente más fácil que el aumento de la cotización y de los salarios. Si se renuncia a ésta por nuevas fuentes de financiación, existe el riesgo de “confundir la presa con la sombra” y, sobre todo, de abrir una gran vía a la contraofensiva.

Es, en efecto, llamativo constatar que son los social-liberales quienes han subido a la almena para defender el proyecto gubernamental. Pero ello solo debería sorprender a mitades. Después de todo, Balladur en 1993 no hizo más que aplicar el Libro Blanco sobre las pensiones de Rocard. En cuanto a Fillon, se sitúa en la línea del Informe Charpin y se reclama de los planes de ahorro salarial instaurados por Fabius /6.

6/ Miembro del Consejo de Análisis Económico y consejero científico de Attac, Dominique Plihon sostiene la idea de una punción, tanto sobre los ingresos del capital como sobre los del trabajo. Habría una innovación: un impuesto -moderado y casi indoloro, asegura- sobre las transacciones bolsísticas, cuyo producto sería abonado al fondo de financiación de las pensiones: *Le Monde*, 13 de mayo de 2003.

Los liberales se apoderan hábilmente de los puntos débiles de sus contradictores, en particular de esas tentativas aproximativas de encontrar una financiación-milagro que sustituiría al incremento de la cotización. Les resulta fácil demostrar que esos dispositivos rompen con la lógica del reparto sin, por otra parte, conseguir nuevos márgenes de maniobra. Así, logran evitar la discusión sobre el argumento central que les molesta y que consiste en observar que se puede financiar muy bien las pensiones, incluso conservando la actual distribución de los ingresos, a pesar de ser la misma especialmente desfavorable para los asalariados.

Esta operación de diversión supone un alineamiento discreto con el dogma de la patronal, que se justifica inventando una ley nueva según la cual todo aumento del tipo de cotización penalizará a fin de cuentas a los asalariados. Esa negativa es una medida preventiva con respecto al escenario-catástrofe que cuestionaría lo que es verdaderamente intocable, es decir, el beneficio financiero. Todas las argucias liberales sobre la imposibilidad de modificar duraderamente el régimen de reparto obedecen en el fondo a esa única preocupación: impedir que la alternativa aparezca con toda su coherencia, tan temible para las finanzas.

Traducción: Mikel de la Fuente

El feminismo transnacional y la lucha por la justicia global

Johanna Brenner

La globalización capitalista ha supuesto un impacto profundo aunque contradictorio en la vida de las mujeres y en las posibilidades de responder a la dominación masculina, tanto en el centro como en la periferia del sistema capitalista mundial. Por un lado, se han minado viejas formas de dominación masculina; por otro, las condiciones de vida de las mujeres están empeorando en muchos aspectos.

La profunda penetración capitalista en la periferia rural ha desbaratado las economías establecidas que apoyaban “el patriarcado clásico” –sistema en que el poder de los hombres se apoya económica y políticamente en la posesión masculina de la propiedad y ser cabeza de familia /1. En las ciudades de los países periféricos, el “régimen fordista de género” –el hombre trae el salario/la mujer es ama de casa– que surgió en los 60 y los 70, la “edad de oro” del desarrollo económico en algunas partes del Tercer Mundo, también se está desmoronando dado que el salario masculino ya no es el salario familiar. Al mismo tiempo, debido a la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, y su acceso a la alfabetización y educación, el feminismo ha surgido como una fuerza política organizada. Las mujeres del sur global no sólo se están enfrentando a retos en sus propios países sino que están participando en un movimiento feminista global capaz de afectar las políticas de organizaciones transnacionales como las de Naciones Unidas y la Unión Europea /2.

En contraposición a este desarrollo, las mujeres y los niños/as más que los hombres, son las víctimas de la restructuración del capitalismo global. La inseguridad económica, el empobrecimiento, la exposición a productos tóxicos, la degradación del agua, los porcentajes altos de mortalidad materno-infantil, la migración forzosa, el incremento de horas de trabajo tanto asalariado como no, son algunos de los indicadores de la carga de las mujeres a nivel mundial /3. Las organizaciones de mujeres que han surgido para defender a las mujeres de clase obrera y pobres tanto urbanas como rurales, se encuentran atrapadas en un campo contradictorio de relaciones de poder definido por tres fuerzas en pugna: estados nacionales, movimientos religiosos fundamentalistas y los centros globales que dirigen los asuntos neoliberales.

1/ Linda Gordon and Allen Hunter, «Not All Male Dominance is Patriarchal,» *Radical History Review*, n° 71, 1998; Denis Kandoyti, *Bargaining with Patriarchy*,» *Gender & Society*, vol. 2, n° 3 (September, 1988), pp.274-290.

2/ 114 organizaciones de mujeres asistieron a al primer forum de ONGs de mujeres, organizado por NU en México DF en 1975, 3.000 fueron a Beijing en 1995. Hoy miles de ONGs participan en conferencias y encuentros internacionales. Amrita Basu, *Globalization of the Local/Localization of the Global: Mapping Transnational Women Movements*,» *Meridians: Feminism, race, transnationalism*, vol. 1 n° 1 (Autumn 2000), p.73.

3/ Asoka Bandarage, *Women Population and Global Crisis*, (London: Zed Books, 1998).

Los gobiernos del Tercer Mundo, de dominación masculina, a menudo poco eficientes, plagados de amiguismos y algunas veces corruptos; y las presiones de los programas de ajuste estructural que les impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ciertamente han agravado estas tendencias. Su fracaso en el reparto de los beneficios del “mercado libre” ha alentado el crecimiento de los movimientos políticos fundamentalistas que tienen al feminismo en el punto de mira y retan el poder gubernamental. Los gobiernos nacionales responden a estos movimientos con represión política y adaptación, principalmente a costa de las mujeres –por ejemplo, cediendo la autoridad civil local a órganos judiciales y líderes religiosos. Estas políticas refuerzan el patriarcado tradicional y sus funciones de control social mientras que la transformación capitalista de las economías locales priva a las mujeres de la protección y seguridad que les daba el sistema patriarcal /4.

En contraste con el Estado nacional débil y de dominación masculina y los movimientos fundamentalistas, las instituciones claves del orden neoliberal, principalmente el Banco Mundial, aunque también las agencias de gobiernos del Primer Mundo, como USAID [*Organismo que gestiona la cooperación pública al desarrollo de los EE UU. NdT*], proclaman su apoyo a la modernización y democratización. Ofrecen recursos para el desarrollo económico de las mujeres, servicios sociales y sanitarios, los dirigentes del nuevo orden económico mundial se presentan como aliados del feminismo liberal. Las aspiraciones centrales feministas –ciudadanía plena, acceso igualitario a la educación y al empleo y finalización del derecho legal y cultural de los hombres del control del cuerpo de las mujeres, de su capacidad sexual y reproductiva– son completamente compatibles con el neoliberalismo. Las fuerzas que tienen más que perder con la institucionalización de objetivos políticos del feminismo liberal no son el Banco Mundial, el FMI o las corporaciones transnacionales. La mayoría de fuerzas que responden al feminismo, por ejemplo, dentro de los círculos de políticas de desarrollo y de conferencias en las que las Naciones Unidas intenta regular las políticas de desarrollo no son las del nuevo orden económico, sino organizaciones que representan a grupos que se sienten amenazados por la pérdida de las antiguas formas de poder patriarcal político y económico: gobiernos islámicos, organizaciones no gubernamentales conservadoras musulmanas, organizaciones católicas y el Vaticano, protestantes evangélicos y el Comité Internacional de Derecho a la Vida /5.

Desde luego un orden económico neoliberal nunca daría cabida a la igualdad de género. Pero, dado que el capitalismo ofrece más espacio para la auto-determinación y la autoorganización de la gente de lo que lo hizo el feudalismo,

4/ Shelly Feldman, «Exploring Theories of Patriarchy: A Perspective from Contemporary Bangladesh,» *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 25 no 4 (Summer 2001), p. 1108; Rita Raj et al., «Between Modernization and Patriarchal Revivalism: Reproductive Negotiations Among Women in Peninsular Malaysia,» in *Negotiating Reproductive Rights: Women's Perspectives Across Countries and Cultures*, ed. Rosalind P. Petchesky and Karen Judd (London: Zed Books, 1998).

5/ Basu, p. 72.

también el orden de género neoliberal permite a las mujeres más espacio para participar en la vida pública y competir con hombres por poder y espacio. Aunque tanto en el Tercer Mundo como en el Primero, la responsabilidad del trabajo de cuidados sigue siendo de las mujeres y esto las sitúa en desventaja respecto a los hombres dentro de las esferas política y económica, cada vez más competitivas e individualizadas en consonancia con las demandas del capitalismo global. Esta diferencia de relación de hombres y mujeres respecto al importante y necesario trabajo de cuidados –el cual está aumentando su privatización debido a la desaparición del estado de bienestar– está preservando la dominación masculina, aunque de una nueva forma /6.

En la situación actual, las feministas, especialmente aquellas que desean crear un movimiento que refleje las necesidades e intereses de las clase obrera y de las mujeres pobres rurales y urbanas, se encaran a dilemas políticos intensos y difíciles. Podemos apreciar estos dilemas a través de un análisis en tres áreas de acción política:

1. Si las relaciones de clase y de dominación racial se reproducen o disminuyen entre las organizaciones feministas tanto a nivel transnacional como dentro de las políticas nacionales.
2. Las presiones particulares que encaran las ONGs de mujeres y las posibilidades de resistencia así como las de captación.
3. Las líneas de tensión como las de alianza entre el feminismo global y los movimientos de justicia globales.

Políticas feministas en el espacio entre nacionalismo patriarcal y neocolonialismo

En lo que ha sido más efectivo el feminismo organizado tanto a nivel local como transnacional, ha sido en promover derechos políticos liberales para las mujeres e incluso en destacar elementos que anteriormente eran invisibles –tales como acoso sexual y violencia doméstica. Aunque sigue habiendo un largo camino que recorrer, no se puede negar que en un país tras otro las organizaciones feministas han forzado el debate sobre la violencia sexual y doméstica dentro de las políticas nacionales además de obtener algunos beneficios en el acceso a las políticas formales /7. Tanto local como internacionalmente, las feministas continúan encarando el difícil y agobiante aspecto de cómo argumentar y definir los derechos de las mujeres de un modo que no posicione al feminismo con las relaciones neocoloniales de dominación. Las mujeres del Tercer Mundo se ven forzadas a competir con dos fuerzas opuestas poderosas. Por un lado un nacionalismo masculinizado que define las tradiciones y la nación de forma selectiva que fuerza a las mujeres a ser las que soporten las

6/ Para profundizar en esta argumentación ver, *Women and Politics of Class* de Johanna Brenner (New York: Monthly Review, 2000).

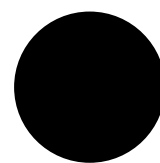
7/ Basu, p. 81.

diferencias culturales mientras que los hombres son libres de participar en un mundo con poder político y económico modernos. Por otro lado está el capital transnacional que en la fase actual amenaza con dominar al estado nacional y someter a las mujeres junto con los hombres a nuevas formas de explotación económica, o incluso excluirlos de la economía –al mismo tiempo que ofrece oportunidades de escapar del control masculino tradicional. Del mismo modo que las mujeres de color de Estado Unidos retaron a las feministas para que reconocieran que sus categorías de análisis asumían la universalidad de experiencias de blancas de clase media y definían la igualdad de oportunidades en términos que marginaban los intereses políticos de las mujeres de clase obrera y de color, las mujeres del Sur neocolonizado han retado las voces dominantes de las mujeres del Norte.

Desde el primer encuentro internacional de mujeres convocado por Naciones Unidas en 1975, el feminismo internacional ha debatido la cuestión de cómo definir los intereses de las mujeres, incluyendo según se desarrollaron las conversaciones, cuestionarse la categoría unitaria de “mujeres”. Un resultado importante de estas conversaciones es la adopción de una plataforma de “derechos humanos” como agenda organizativa donde las mujeres pueden cooperar a nivel transnacional al igual que usarla a nivel local. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, organizada por Naciones Unidas en 1993, los grupos de mujeres argumentaron que “Los Derechos Humanos son los Derechos de las Mujeres y que los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos” e hicieron un llamamiento en la Conferencia para que se reconociera “la violencia de género como violación de los derechos humanos que requiere acción inmediata”. Esto incluía apoyar la Convención sobre la eliminación de Todas la Formas de Discriminación de las Mujeres, que finalmente fue adoptada en 1979 por Naciones Unidas pero que Estados Unidos sigue sin ratificar.

A nivel nacional las organizaciones de mujeres han utilizado la Declaración Universal de Derechos Humanos, desarrollada por Naciones Unidas en 1966, para incluir derechos económicos, sociales y culturales, para demandar responsabilidades a sus gobiernos. Sin embargo, tal como se esperaba, dada la actual dominación de las fuerzas capitalistas, en la práctica sólo los derechos políticos y civiles tienen apoyo real, mientras que los derechos sociales de las mujeres, junto con los de los hombres, están siendo violados y marginados cada vez más, debido a la destrucción de los servicios públicos tanto en el centro como en la periferia. Además, sigue existiendo el problema de quién definirá el contenido de estos derechos, es decir, qué criterios deberían usarse para definir las prácticas que violan los derechos humanos de las mujeres.

El aumento de la importancia de los derechos humanos como discurso político no es de ninguna forma la confirmación de relativismo cultural –las mujeres del Sur global conocen muy bien cómo las afirmaciones de diferencia cultural pueden utilizarse para legitimar las prácticas patriarcales. Las mujeres del Tercer Mundo también conocen muy bien la necesidad de defender sus naciones y culturas contra la hegemonía del Primer Mundo –una hegemonía que tiene a las prácticas occidentales como medida de



progreso para las mujeres y para la sociedad y por tanto legitima la dominación neocolonial. Dado que las feministas del Primer Mundo han participado en este tipo de discurso político “universalizante” y por tanto han negado la posibilidad de que la modernización definida por culturas no occidentales pudiera ofrecer a las mujeres en algunos casos más dignidad, poder y respeto, han facilitado a las fuerzas antifeministas del Tercer Mundo el definir el feminismo como parte del proyecto imperialista occidental. No hay mejor ejemplo de la apropiación de “los derechos de las mujeres” para fines imperialistas que las declaraciones de George Bush diciendo que la guerra de Estado Unidos contra Afganistán se llevó a cabo para promover los derechos humanos de las mujeres afganas. La excusa para estas declaraciones se la dio en parte la campaña de los derechos internacionales de las mujeres iniciada en 1997 por una coalición occidental de organizaciones de mujeres /8. Esta campaña, que llamaba a “la comunidad internacional” a negar reconocimiento e inversiones a los talibanes, ignoraba por completo la complicidad de occidente en la instalación de los talibanes en primer lugar y que las formas de tolerancia de Washington a las reglas talibanes estaban relacionadas con sus intereses globales neoliberales y geopolíticos.

Bajo la dirección de feministas del Tercer Mundo, algunas organizaciones han intentado trazar un camino entre el nacionalismo patriarcal y el feminismo colonizador. Por ejemplo, las mujeres que viven bajo leyes musulmanas se enfrentan al fundamentalismo político-religioso dentro del marco del discurso islámico, redefiniendo, tal como lo han hecho los hombres históricamente, lo que constituye la práctica islámica. Rita Coomaraswamy formula la pregunta: ¿cómo proteger los derechos humanos en esencia a nivel local mientras evitamos caer en manos de la estrategia imperialista? Ella propone dos líneas 1) cualquier práctica que cause dolor y sufrimiento severo a las mujeres debe ser considerado delito y 2) otras prácticas deberán ser evaluadas mediante el debate, diálogo y la construcción de una coalición por parte de las mujeres, de una sociedad en particular, que hayan “luchado contra el racismo y comunidades de diferentes formas, pero que también hayan luchado contra el patriarcado y por los derechos de las mujeres. Incluso dentro de este grupo hay grandes diferencias /9. El papel de las organizaciones feministas dentro de los países imperialistas sería el apoyar este diálogo local con recursos y con respeto.

Las tensiones y conflictos paralelos que hacen referencia a quién define los intereses y derechos de las mujeres sirven para marginar las voces de las mujeres de clase obrera y pobres dentro de las coaliciones feministas nacionales y transnacionales. Una primera mirada a la insistencia feminista de que el derecho a la no violencia sexual es un derecho humano de las mujeres ofrece una base obvia de alianza interclase. Aunque las mujeres de clase obrera y pobres del Sur global a menudo determinan su interpretación de la violencia masculina en términos de clase, colocando la violencia masculina como

8/ Basu, p. 73.

9/ Radhika Coomaraswamy, «Are Women's Rights Universal? Re-Engaging the Local,» *Meridians: feminism, race, transnationalism*, vol. 3 no 1 (Autumn 2002), 2 16.

consecuencia de un contexto social en particular –por ejemplo, la promoción de gobiernos de la venta de alcohol en distritos pobres o el aumento del desempleo y la desaparición del trabajo masculino tradicional. En contraste con esto, cuando abogados de clase media traen las políticas de derechos humanos internacionales a la arena local, se inclinan más por enfocarla en la necesidad de cambiar leyes y prácticas políticas aislándolo de causas más amplias de violencia contra las mujeres /10.

El feminismo transnacional no ha dependido para su crecimiento como organización de fondos generados por sus miembros sino de recursos provenientes de instituciones poderosas como Naciones Unidas, gobiernos socialdemócratas en el Norte y fundaciones privadas en los países capitalistas. Al principio de los 90, Naciones Unidas, como consecuencia de presiones feministas en su interior, se comprometieron a financiar la implicación de grupos de mujeres locales en las conferencias nacionales proyectadas para tratar temas de desarrollo /11. Dentro del Tercer Mundo, las ONGs de mujeres cuentan con fuentes de financiación externas. Este contexto ha agravado lo que podría ser en todo caso un proceso inevitable de profesionalización y burocratización cuando los grupos de base se transforman en organizaciones de movimiento social y entonces en primer lugar solicitan en lugar de movilizarse. Algunas organizaciones lo han hecho mejor que otras a la hora de mantener contacto y responsabilidad con su base social /12. Sin embargo, la estratificación entre grupos de mujeres se ha incrementado y aquellos con lazos elitistas, acceso a subvenciones internacionales y las características organizativas que quienes subvencionan quieren apoyar, pueden manejar más recursos y tener más influencia política. En su posición estructural vis a vis entre los Estados nacionales y las subvenciones internacionales, estas ONGs llegan a ser consejeras y expertas en “género” jugando un rol de arbitraje entre el Estado y su clientela /13.

ONGs, el feminismo popular y los problemas de las alianzas interclasistas

Una de las ironías de esos Estados que lograron el desarrollo económico en las décadas doradas de los 60 y 70 era que, incluso si los derechos políticos estaban relativamente limitados, algunos de los excedentes producidos por el desarrollo se

10/ Basu, p 76. Beth E. Richie, «A Black Feminist Reflection on the Antiviolence Movement» in *Feminisms at a Millenium*, ed. Judith A. Howard and Carolyn Allen (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

11/ Basu, p. 74. La mayoría de las subvenciones a las organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres y contra la violencia a las mujeres se incrementó trece veces entre 1988 y 1993. Los dos años anteriores a la cumbre de Beijing en 1995, la Coordinación de ONGs de América Latina y el Caribe recibieron 1.007.403 \$ de N.U. Sonia E. Alvarez, «Translating the Global: Effects of Transnational Organizing on Local Feminist Discourses and practices in Latin America.» *Meridians: feminism, race, transnationalism*, vol. 1, no 1 (Autumn 2000).

12/ Millie Thayer, «Traveling Feminisms: From Embodied Women to Gendered Citizenship.» in *Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginarios in a Postmodern World*, ed. Michael Burawoy et al. (Berkeley: University of California Press, 2000).

13/ Alvarez, pp 55-58.

destinaron a la expansión de servicios básicos, concretamente educación y salud, lo que realmente mejoró la salud maternal e infantil, bajando la tasa de mortandad maternal e infantil en muchos países. La lucha para establecer y expandir los derechos sociales o de colectivos ha sido fundamental para la movilización política de mujeres de clase trabajadora, pobres urbanas y rurales y de comunidades indígenas. La destrucción de los standards de vida en zonas urbanas, la destrucción de vida rural y la reducción del estado bajo los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el FMI crearon una explosión virtual del activismo de mujeres en las últimas dos décadas. Este activismo tiene tres características. Está motivado por necesidades de supervivencia; está basado en redes de ayuda mutua y apoyado por valores comunales; está legitimado en primer lugar por los roles tradicionales de género de las mujeres al mismo tiempo que estos roles se expanden para incluir el compromiso de las mujeres en la vida pública separada de los hombres. En un primer momento una política basada en el cuidado maternal no desafía el rol de género tradicional, e incluso puede que refuerce la identificación de las mujeres con la maternidad. Sin embargo, el compromiso político también puede llevar a activistas de base a desafiar el poder masculino y a rediseñar las identidades de género, si esto tiene lugar en un contexto que incluya ideas feministas sobre los derechos de las mujeres relacionadas no solamente con el estado sino también con los hombres de sus propias comunidades, la casa y las organizaciones de los movimientos /14.

En los años 70 y principios de los 80, hubo luchas entre mujeres activistas tanto en países del Tercer Mundo como a nivel internacional que tendían a contraponer políticas de las necesidades de las mujeres a políticas de derechos liberales (civiles y políticos), con mujeres obreras y campesinas que argumentaban que los derechos colectivos y sociales son “más importantes” para las mujeres del Tercer Mundo que los derechos civiles individuales. Este conflicto se determinó en parte por el encorsetamiento de las mujeres activistas en las políticas de los órganos tradicionales de la clase obrera y de movilización política popular –sindicatos, organizaciones de personas desempleadas, partidos políticos de izquierda y organizaciones campesinas. Sin embargo, al pasar el tiempo, y en parte como resultado de los intercambios entre organizaciones feministas del Tercer Mundo, y en parte a través del incremento de recursos externos que se utilizaron para apoyar organizaciones de mujeres autónomas, grupos de mujeres de base que emergieron de las luchas de mujeres pobres rurales y urbanas y las mujeres del nuevo proletariado de las zonas de libre comercio desarrollaron su propia versión de un feminismo de clase obrera/popular. Separándose de las políticas masculinas de los movimientos sociales y políticos locales, las mujeres de clase obrera y rurales empezaron a tratar temas de política sexual y a desarrollar modos de organización feministas: emerger de la conciencia, participación y toma de decisiones y atención

14/ Petchesky and Judd, p. 310.

al “empoderamiento” [anglicismo por “empowerment” que, lamentablemente, ha adquirido carta de naturaleza en la jerga de las ONG, en perjuicio de palabras castellanas como “potenciación”. NdT] personal como base para el “empoderamiento” colectivo /15. Esta evolución política podría haberse truncado sin la existencia de organizaciones feministas transnacionales. Conferencias regionales e internacionales, talleres y encuentros que dieron a las organizaciones marginales de mujeres de base apoyo moral y práctico.

La mujeres de clase media y de élite fueron las primeras en articular un programa de igualdad y participación de las mujeres, y en identificar nuevos objetivos de lucha feminista ampliamente entendidos como “política sexual”. Aunque se crearon fuera de la clase obrera, estas organizaciones feministas juegan un rol crítico en abrir espacios políticos y, lo que es mejor, en dotar de recursos organizativos que pueden empujar hacia adelante la emergencia de diferentes tipos de política feminista entre las mujeres de clase obrera, campesinas y pobres urbanas. Sin embargo, estas mismas organizaciones pueden también jugar un papel muy negativo ya que reproducen relaciones de privilegio de clase y de dominación dentro de los movimientos, enmarcando la ideología y estrategia feminista dentro de los límites de un proyecto político liberal, estableciendo alianzas conservadoras con élites políticas y económicas.

No se puede encontrar mejor ejemplo de esto último que la proliferación de ONGs a través de todo el Sur global que dirigen programas de préstamos a pequeña escala –microcréditos– para las mujeres. A pesar de que la plataforma de acción de Beijing en 1995 propuso una amplia línea de reformas e intervenciones para mejorar la posición de las mujeres en la economía del Tercer Mundo, no sorprende que las ONGs de mujeres hayan tenido tanto éxito al promover programas de microcréditos. Surgiendo de instituciones como USAID y el Banco Mundial, estos programas han cosechado la mayoría de fondos de desarrollo dirigidos a las mujeres. Con la apariencia de ofrecer a las mujeres independencia económica a través de propiedad compartida, los microcréditos han tenido el efecto opuesto en muchos casos –incrementando la integración de mujeres en sectores de economía informal, forzándolas a explotar a sus propios hijos/as, especialmente sus hijas, para poder terminar el trabajo, incrementando las relaciones de competitividad entre las mujeres y haciendo muy poco para sacar a las mujeres o a sus familias de la pobreza /16. Además, ideológicamente, los microcréditos refuerzan el punto de vista neocolonial

15/ Janel Gabriel Townsend et al., *Women and Power: Fighting Patriarchy and Poverty* (London Zed Books, 1999); Yvonne Corcoran-Nantes, «Female Consciousness or Feminist Consciousness? Women’s consciousness raising in community-based struggle in Brazil,» in *Global Feminism Since 1945*, ed. Bonnie G. Smith (New York: Routledge, 2000); Alvarez, pp 36-37.

16/ Deborah Mindry, «Nongovernmental Organizations, ‘Grassroots’, and the Politics of Virtue,» *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 26, no 4. (Summer 2001), pp. 1187-1212; Winifred Poster and Zakia Salime, «The Limits of Microcredit: Transnational Feminism and USAID Activities in the United States and Morocco,» in *Women’s Activism and Globalization*, ed. Nancy A. Naples and Manisha Desai (New York: Routledge, 2002) pp 189-219.

y atribuye a las mujeres del Tercer Mundo características morales y poder personal que mitigan la necesidad de un desarrollo regulado y controlado por el estado. Al valorar las virtudes maternas y la fuerza de supervivencia de “las mujeres populares”, las ONGs piden que sean las mujeres a quienes se dirijan “por ser la mejor inversión” las subvenciones de desarrollo. Dado que los hombres son menos inclinados que las mujeres a devolver préstamos, y más inclinados a gastar sus ganancias en ellos mismos en vez de en sus familias y en participar en la pequeña corrupción que es el camino para tener influencia política a nivel local, estas peticiones verdaderamente tienen fuerza. Por otro lado, como todas las ideologías poderosas, también se apoyan en un cuadro muy parcial y tienen como consecuencia inintencionada la futura solidificación de cuestiones neoliberales. Las mujeres del Tercer Mundo se imponen como un reproche, no a la fuerzas de dominación capitalista, sino a aquellos que supuestamente carecen de coraje y determinación para negociar en el mercado –es decir, los hombres “dependientes” de países pobres que han dependido del estado para que los proteja de los retos competitivos del mercado.

El surgimiento de la “industria de microcréditos” nos cuenta la historia de cómo ONGs en las que trabajan mujeres de clases privilegiadas del Tercer Mundo encuentran caminos para el empleo, viajes internacionales e influencia política a través de un trabajo en el que se autoproyectan como representantes de mujeres que son marginadas y excluidas del nuevo orden económico. Dada la enorme fuerza que muestran las poderosas fuerzas económicas y políticas con las que se enfrentan, las mujeres defensoras de las mujeres están forzadas a estar en una posición que, de forma simultánea, les da y les quita poder –al incorporar a las representantes de las mujeres en el proceso de distribuir recursos estatales, con el coste de distanciarlas de su base social y de reforzar en vez de responder a las políticas e ideología neoliberal. Las ONGs que trabajan los derechos reproductivos de las mujeres se enfrentan a un tipo de presiones similares.

Derechos reproductivos

Desde los años 50, bajo la presión del Banco Mundial, USAID y otras agencias de desarrollo, los estados de países en desarrollo empezaron a implementar programas de control de población. Estos programas han sido minuciosamente descritos y designados para bajar la fertilidad de las mujeres “necesaria desde todos los puntos de vista”, y sus miles de abusos se han documentado muy bien /17. Empezando en los 70, las redes internacionales feministas, la mayoría a través de ONGs y de Naciones Unidas, intentaron cambiar la política dominante sobre población enfocada en la fertilidad por la promoción de la salud y bienestar de mujeres y

17/ Betsy Hartman, «The Changing Faces of Population Control,» in *Policing the National Body: Race, Gender and Criminalization*, ed. Jael Silliman and Anannya Bhattacharjee (Cambridge, MA: South End, 2002), pp. 259-284.

niños/as. El argumento era que los gobiernos deberían promover el desarrollo económico real, asegurar que las mujeres tuvieran igualdad de acceso a los beneficios del mismo y proveer de las condiciones necesarias para la autonomía personal de las mujeres (educación, cuidados sanitarios para mujeres y niñas/os, cambios en la familia, leyes, etc.) en vez de intentar controlar las vidas reproductivas de las mujeres. Aunque el descenso de la tasa de nacimientos no debería ser el objetivo de estas iniciativas, realmente el resultado de dichos programas no solo sería una mejora en la vida de las mujeres sino también el descenso de la fertilidad de las mujeres. Esta iniciativa feminista transnacional obtuvo una importante victoria en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, que adoptó una “plataforma de acción” reafirmando los derechos reproductivos de las mujeres y condenando específicamente las políticas de gobiernos diseñadas con objetivos de población numéricos. Por desgracia, en parte como resultado de compromisos estratégicos gestionados por las grandes ONGs de mujeres que dominan los procesos políticos en los encuentros internacionales, la “Plataforma” también confirmó el ataque neoliberal en el estado, reclamando mayor confianza en el sector privado y a las ONGs en los servicios.

Mientras que se obtuvo un éxito considerable a nivel teórico y retórico por parte de NU (e incluso del Banco Mundial), las ONGs han fracasado rotundamente al promover los derechos reproductivos en la práctica a nivel nacional. En todo el Tercer Mundo las tasas de fertilidad se han hundido, en muchos casos alcanzando en sólo 20 años una transición demográfica que en Occidente llevó un siglo. Mientras que la disminución de la fertilidad en Occidente es el resultado del aumento de la calidad de vida de la clase obrera, la transición económica y los ajustes estructurales en el Tercer Mundo han producido una “crisis que ha llevado a la disminución de la fertilidad”. Es importante señalar que las causas de esta disminución son complejas y reflejan, al menos en parte, el deseo de las mujeres de controlar su vida reproductiva, el aumento de la demanda de la mano de obra femenina y la promoción agresiva de planificación familiar que ha facilitado las operaciones de esterilización, implantación del DIU y contraceptivos hormonales. Sin embargo, la rapidez y profundidad del cambio de patrones en fertilidad es también el resultado de factores más negativos: pobreza de las mujeres, el incremento de familias monomarentales, incremento en la demanda de mano de obra femenina mientras que también se reduce sus riesgos en contactos heterosexuales sin protección; el peligro para la salud de las mujeres con los riesgos de embarazos, incluyendo la mortandad maternal (como resultado de abortos ilegales); la relación de las condiciones de salud con la pobreza, la ausencia de asistencia sanitaria pre y post natal /18.

Aunque puede que los objetivos numéricos no sean los que guían ahora a los

18/ Bandarage, pp 170 y 183.

programas de gobiernos, los abusos de los derechos de las mujeres a sus cuerpos continúan impregnando el sistema. Y, en todo caso, incluso donde a las mujeres no se las trate despectivamente, se les hayan ofrecido sobornos o amenazado para que acepten riesgos en embarazos y control de maternidad o esterilización, el contexto institucional global restringe tan severamente la decisión de las mujeres que resulta intrínsecamente, si no resueltamente coercitivo. Las tasas de esterilización entre mujeres pobres, especialmente mujeres pobres en comunidades oprimidas por cuestión de raza, son mucho más altas que entre mujeres que son económica y racialmente privilegiadas /19.

El feminismo en el movimiento de justicia global

Al final del siglo, los dirigentes del capitalismo global, reunidos en el Forum Económico Mundial de Davos fueron forzados a reconocer una crisis profunda de legitimidad en el orden neoliberal /20. En otro lado del globo, en Porto Alegre, los activistas reunidos en el Foro Social Mundial intentaron crear una agenda política para el movimiento de justicia global que había puesto a las élites globales a la defensiva. La participación de mujeres como líderes y como representantes de movimientos de base en Porto Alegre, parece una gran promesa, y también la implicación de organizaciones feministas en la organización de redes que constituyen fuerzas “antiglobalización” locales. Hace treinta años habría sido impensable, incluso en movimientos sociales radicales, el que hubiera mujeres líderes en grupos mixtos o el tratar temas de opresión de género más que, en el mejor de los casos, la ayuda a una mujer. Las organizaciones que tienen una mayor consideración con su militancia, visión revolucionaria y valentía están profundamente influenciados por el feminismo, en sus ideas políticas y en sus cuadros dirigentes. Por ejemplo, en 1993, siguiendo un proceso de convocatoria de comités locales de mujeres y manteniendo cientos de asambleas locales, el FZLN aprobó las Leyes Revolucionarias de Mujeres. Este programa de derechos de las mujeres incluye su derecho a decidir el número de hijas/os que quieren tener y cuidar, el derecho de las mujeres al trabajo asalariado y a recibir un salario justo, el derecho a elegir a sus parejas, etc /21.

Junto a estos claros progresos siguen existiendo áreas de tensión entre el

19/ En el noreste de Brasil, una región empobrecida con mucha población negra, la proporción de mujeres que utilizaba la esterilización como método contraceptivo se incrementó el porcentaje en 16,49 puntos entre 1986 y 1992, en ese tiempo el 64,39 por ciento de las mujeres que utilizaban la contracepción «elegían» la esterilización. En el mismo periodo la mortalidad maternal mostró un importante aumento. Thayer, p. 228.

20/ Walden F. Bello, *The Future in the Balance: Essays on Globalization and Resistance* (Oakland, CA: Food First Books, 2001), p XV.

21/ Jane H. Bayes and Rita Mae Kelly, «Political Spaces, Gender and NAFTA,» in *Gender Globalization and Democratization*, ed. Rita Mae Kelly et al. (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001), pp. 160-161.

feminismo transnacional y otros elementos de la justicia global que reflejan unos intereses complejos entre sus fuerzas, estos “desacuerdos” no se pueden analizar aquí en profundidad. En los apartados siguientes ofrezco algunas observaciones preliminares sobre dos ejemplos de los problemas que el movimiento de justicia global tendrá que resolver: 1) las tensiones entre las ONGs de mujeres y los sindicatos y 2) los silencios estratégicos sobre aborto y orientación sexual.

Las ONGs de mujeres y el movimiento obrero

Las formas tradicionales de organización sindical han demostrado ser ineficaces para organizar a trabajadoras en torno a razones específicas de género que atraviesan a todas las industrias. Las estrategias para organizar a las mujeres son aquellas que tratan la división entre público/privado y trabajo asalariado/familia, reconociendo las responsabilidades de las mujeres en el cuidado y sus fuertes lazos con sus comunidades. El tipo de industrias que actualmente emplea mayoritariamente a trabajadoras en el sector formal privado de la economía no se adecúa a las estrategias organizativas desarrolladas por y para trabajadores hombres. Las industrias de trabajo intensivo donde se concentran mujeres pueden responder a una huelga simplemente transfiriendo la producción a otra parte. Las trabajadoras se están incorporando a los sindicatos en todo el mundo, pero también han surgido ONGs, algunas veces formadas por trabajadoras que han dejado los sindicatos dominados por hombres y algunas veces creadas cuando no había ningún sindicato interesado. Con el aumento de la mano de obra femenina y la militancia de las mujeres, las ONGs de trabajadoras representan una parte importante del movimiento obrero. Dadas las limitadas oportunidades que tienen las mujeres en el mercado laboral formal, las ONGs se esfuerzan en preservar los puestos de mujeres en las industrias de trabajo intensivo, mientras tanto se organizan para mejorar las condiciones laborales y salariales. Han tendido a confiar más en formas organizativas comunales, la persuasión moral, fundaciones internacionales y apoyo político que en las acciones y formas de lucha tradicionales sindicales, especialmente la huelga. Si los sindicatos no son comprensivos con las razones estratégicas de las ONGs, fallarán al intentar alianzas con los grupos de trabajadoras de base, empujando a las ONGs fuera del movimiento sindical. Por su parte, las ONGs se harán más vulnerables a la cooptación por comités dirigidos a nivel internacional por la patronal, que son la mejor herramienta que tienen las corporaciones transnacionales para hacer frente al movimiento antiexplotación /22. Esta trayectoria no es inevitable, pero depende de la politización continua del Movimiento Sindical que, como hemos

22/ Jennifer Brikham Mendez, «Creating Alternatives from a Gender Perspective: Transnational Organizing for Maquila Worker's Rights in Central America,» in *Naples and Desai*, pp. 121-141.

visto en otros momentos y lugares, abre más espacios al feminismo obrero para rebatir y cambiar las prácticas estratégicas y organizativas de los sindicatos.

Mientras que el aumento de la importancia de las mujeres como grupo dentro del movimiento obrero representa un cambio histórico, el activismo de las mujeres en comunidades de base, que ha movilizad a un gran número en las dos últimas décadas, refleja continuidad histórica. Durante siglos las mujeres han entrado en la lucha política para asegurar las vidas de su familia y su comunidad. Además de organizar la demanda de recursos al gobierno local –recogida de basuras, agua potable, electricidad, etc.– muchas comunidades, al no poder conseguir mucho del estado, empezaron a organizarse en formas alternativas de producción y provisión de servicios, con esquemas de trabajo cooperativo para producir ropa y comida, construir guarderías y casas, organizar recogida de basuras, etc /23. Lo novedoso de estos movimientos populares es la aparición de mujeres líderes y la incorporación de demandas feministas en sus programas políticos. Este caso se da especialmente cuando las comunidades de base forman parte de movimientos más amplios que llevan a cabo políticas radicales integrales (por ejemplo los/as zapatistas en México o el PT en Brasil). Este desarrollo refleja un enorme avance y ofrece enormes esperanzas. Aunque hay mucho trabajo por hacer. Dentro del movimiento de justicia global algunas ideas y demandas feministas se expresan más fácilmente que otras. El contraste entre el claro progreso con el tema de violencia doméstica y los silencios notorios con los temas de aborto y orientación sexual es interesante.

Una razón posible para esta diferencia puede ser que algunas manifestaciones feministas son más compatibles que otras con una política maternal. Por ejemplo, la demanda del derecho a ser libres de la violencia doméstica o de controlar el número de sus embarazos y tiempo entre estos, puede enmarcarse de forma que preserve las relaciones esenciales de la familia heterosexual tradicional. El control de la fertilidad puede y ha sido a menudo aliado a las demandas de preservar la salud de la madre y de sus hijos/as. La noción de que los hombres tienen la obligación de cuidar a las mujeres de sus familias –y no deben esperar mantener la autoridad familiar si incumplen esta obligación– no es fundamentalmente antagonista con las normas de género paternalistas. No se malinterprete: estos cambios aumentan sustancialmente el poder y autoridad de las mujeres dentro de las relaciones maritales y representan una victoria para el feminismo. Pero por muy difíciles que han sido estos cambios, el aborto ha generado mucha más oposición al feminismo. El aborto podría ser considerado como una simple forma de contracepción (y en algunas sociedades dentro de una “regulación menstrual”). Pero en su lugar, se define como un acto de rechazo maternal y un símbolo poderoso de la capacidad de las mujeres de separar heterosexualidad de procreación y de reclamar su propio placer sexual. Claro que el reconocimiento de la sexualidad

23/ Adriana Ortiz Ortega, Ana Amuchastegui and Marta Rivas, «'Because They were Born From Me': Negotiating Womens Rights in Mexico,» in *Petchesky and Judd*, pp. 145-147.

lesbiana van incluso más allá en la dirección de negar lo inevitable, el estatus natural y moral de las familias organizadas alrededor de un vínculo heterosexual.

Una segunda razón posible para los silencios sobre temas que son centrales para la liberación sexual podría ser el papel que las organizaciones religiosas, en particular la Iglesia católica, juegan al dar apoyo económico e institucional a movimientos populares. Aunque pudiera parecer que su componente religiosa los inhibe de tratar los temas políticos como lo hacen los organizadores, los es, al menos, en el tema de aborto, la ilegalidad del aborto es un hecho vital para muchas mujeres católicas que encuentran formas de abortar compatibles con sus creencias religiosas /24. Diría que es la dependencia de las organizaciones de la jerarquía católica en subvenciones y legitimidad política, más que las creencias religiosas de sus mujeres, lo que fuerza este código de silencio.

Conclusión

Los conflictos y tensiones sobre relaciones de género y políticas feministas dentro del Movimiento de Justicia Global ofrecen esperanza y, al mismo tiempo, palabras de precaución. Los conflictos existen porque las mujeres activistas y sus organizaciones son jugadoras importantes en la escena política, respondiendo a la dominación masculina no desde fuera, sino desde dentro de las redes del Movimiento de Justicia Global. Que el feminismo llegue a dar la visión radical y formar parte de la política cotidiana de hombres y mujeres activistas de justicia global, depende de cómo los movimientos puedan sostener coaliciones políticas participativas y dispuestas al diálogo. Los movimientos que den espacio a las intervenciones políticas y estratégicas de feministas activistas obreras y populares y sus organizaciones constituirán un polo de atracción poderoso, una alternativa para quienes creen que no tienen más opción que comprometerse con el orden neoliberal.

Traducción: Pura Blasco

24/ Simone Grilo Diniz et al., «Not Like Our Mothers: Reproductive Choice and the Emergence of Citizenship Among Brazilian Rural Workers, Domestic Workers and Housewives,» in *Petchesky and Judd*, pp. 61-62.

EDUCACIÓN
S A L U D
TRANSPORTE
VIVIENDA
TRABAJO
MAYORÍA
A N T E
A R R E
F U E R Q D
T I E R R A
MAR

SE VENDEN

4 voces miradas

Fábulas feministas

Suniti Namjoshi (Estado de Maharashtra, India, 1941)

Suniti Namjoshi es una de las escritoras feministas más conocidas en el ámbito de lo que se conoce como literatura poscolonial. Perteneciente a una familia de clase y casta alta, educada en una escuela americana de la India, trabaja durante un tiempo como funcionaria de la administración pública de su país, más tarde como profesora de literatura inglesa en la Universidad de Toronto, en la actualidad vive en un pueblecito de East Devon, en Inglaterra. Le gusta definirse como una autora india, canadiense y británica; desde una perspectiva lesbiana y feminista tiene una amplísima obra que abarca desde la poesía (*Poems*, 1967) a la prosa (*Because of India*, 1989; *Goja: An Autobiographical Mith*, 2000) o el intento de crear un espacio feminista en internet con la novela interactiva *Building Babel* (1996).

La publicación de *Fábulas Feministas* en 1981 fue muy bien acogida y ha sido traducida al italiano y holandés, convirtiéndose en un clásico del feminismo. Ahora Ana García Arroyo la ha prologado y traducido al castellano (Suniti Namjoshi, *Fábulas Feministas*, col.lección *Sendes*, Universitat Jaume I, Castelló, 2003). La ironía, el sarcasmo, la ternura o la crueldad están presentes en esta reelaboración de cuentos infantiles, mitos sánscritos y griegos que nos propone Suniti Namjoshi y siempre una lúcida mirada que dinamita la lógica y los estereotipos de la sociedad patriarcal. El libro de Namjoshi es ya el tercero de la colección *Sendes* que, dirigida por Rosalía Torrent, está publicando textos esenciales y, como todo lo que pasa por sus manos, primorosamente editados; una iniciativa más, junto a la revista *Asparkía* y *Dossier Feministes*, de ese grupo de mujeres, siempre entusiasta y cada vez más amplio, que constituye el *Seminari d'Investigació Feminista* de la Universidad de Castellón quizá una de las experiencias más hermosa, más abierta, más libre y exigente que ha tenido lugar en el, tantas veces anquilosado, ámbito académico. Están, como siempre atentas a cualquier propuesta, en: www.sif.uji.es y en sif@uji.es.

Antonio Crespo Massieu

LA LECCIÓN

Y después de que el Emperador hubiese aparecido desnudo y de que nadie hubiera interrumpido la solemne ocasión, una niña pequeña se fue a casa en silencio y se quitó la ropa. Luego le dijo a su madre:

- Mírame, por favor, soy un Emperador.

Ante esto, su madre le respondió:

- No seas tonta, cariño. Sólo los niños pequeños crecen para convertirse en Emperadores. En cuanto a las niñas pequeñas, ellas se casan con Emperadores; y aprenden a morderse la lengua, especialmente sobre el tema del traje del Emperador.

LA MUJER PÁJARO

Una vez hubo una niña a la que le salieron alas. Brotaron de sus hombros, y al principio eran rudimentarias. Pero crecieron rápidamente, y en muy poco tiempo tuvo alas de una medida considerable. Los vecinos estaban horrorizados.

- Se las tenéis que cortar – les decían a sus padres.

- ¿Por qué? – preguntaban ellos.

- Bueno, es evidente – alegaban los vecinos.

- No – dijeron los padres, y sonó tan rotundo que al final los vecinos se marcharon.

Pero unas semanas más tarde los vecinos regresaron.

- Si no se las queréis cortar, al menos recortádselas.

- ¿Por qué?- quisieron saber los padres.

- Bueno, al menos demuestra que estáis haciendo algo.

- No- contestaron los padres, y los vecinos se marcharon.

Entonces los vecinos aparecieron por tercera vez.

- Al menos en dos ocasiones nos habéis despachado – informaron a los padres -, pero pensad en esa niña. ¿Qué estáis haciendo con la pobrecita?

- Le estamos enseñando a volar – respondieron los padres tranquilamente.

HISTORIA DE DOS HERMANOS

Había una vez un hombre que pensaba que podía hacer cualquier cosa, incluso ser mujer. Así pues, se hizo con un niño, le cambió los pañales y alimentó al llorón tres veces cada noche. Hizo todas las tareas del hogar, se mostró respetuoso con los hombres y se acabó hartando. Pero tenía un hermano, Jack Chicolista, que se alquiló una esposa, y lo tuvo todo hecho.

LA BRUJA MALVADA

Una lesbiana bien parecida caminó con paso largo por el bosque y llamó a la puerta de una pequeña casa, que pertenecía a una bruja. La bruja abrió la puerta y la lesbiana dijo:

- Siento molestarla, pero he venido buscando algo. Tengo una pregunta y he creído que usted me podría ayudar.

La bruja lo consideró un momento, luego la hizo pasar. Hizo té.

- ¿Cuál es tu pregunta? – quiso saber la bruja.

- ¿Qué es lo Real?

- ¿Qué?

- Ésa es mi pregunta – contestó la lesbiana -, me enamoré de una hermosa mujer, y aunque me mostró algo de afecto, me aseguró de todos modos que lo que yo sentía por ella no era Real.

- ¿Y le preguntaste que quería decir?

- Si – respondió la lesbiana -, dijo que el amor entre un hombre y una mujer es Real.

- Comprendo – dijo la bruja -. Bien, he aquí tus posibilidades. Vuélvete hombre, vete donde esa mujer y dile esta vez: Mira, soy un hombre, y por lo tanto capaz de lo Real.

- No – dijo la lesbiana, no soy un hombre. ¿Cómo puede una persona irreal sentir algo real?

- Bien, entonces – dijo la bruja -, busca 500 personas para ir donde esa mujer y que le digan muy alto que, en su opinión, lo que tu sientes por ella es Real.

- No – dijo la lesbiana -, yo siento lo que siento, ¿qué importa que otra gente diga lo que piensa sobre lo que yo siento?

- Sirve de ayuda – dijo la bruja encogiéndose de hombros -, se conoce como el Principio de Realidad Corroborante. De cualquier manera, aquí va tu tercera posibilidad. Olvídate de la gente y averigua tu misma lo que realmente sientes.

- Comprendo – dijo la lesbiana -, ¿Y cuándo y dónde y cómo empiezo?

- ¿Ahora? – sugirió la bruja, y sirvió el té.

LA LUNA BRILLÓ

Cuando ella se enamoró, quería soñar, pero los sueños se torcieron. Quería cantar, pero no había canciones, al menos ninguna que pudiese cantarle a otra mujer. Quería una voz. Quería gestos. Quería una forma. Y no podía tener nada de esto.

- Te quiero – dijo con desesperación a su amiga.

- Y yo a ti – respondió esta -. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes este aspecto tan desesperadamente triste?

- Porque no sé como decirte que te quiero – dijo.

- Pero acabas de hacerlo – replicó su amiga, y sonrió, tímidamente al principio, y luego las dos juntas.

No tardaron en abrazarse. ¿Y luego? Y luego la luna brilló, la hierba estaba verde, las flores brotaron, era probablemente primavera, eran amantes después de todo.

TROGLODITA

La mujer de aspecto brutal vivía en una cueva: su pelo estaba desgreñado, sus piernas eran peludas y sus dientes grandes, fuertes y amarillentos. Cazaba para sí misma, y pasaba el tiempo libre dibujando y pintando. Tenía talento, y sus compañeros de cueva admiraban sus dibujos. Eran principalmente de mamuts y tigres, bisontes y pájaros, y algún que otro pez. Entonces, un día se enamoró. Podía no haber sido amor, quizá era deseo, o quizá amistad. Cualquiera que fuese la naturaleza exacta de la relación, trabajó frenéticamente. En el transcurso de su vida pintó cientos de bocetos de la otra mujer de la cueva. Con el tiempo, ambas murieron; y, con el tiempo, también, la cueva se desplomó, la tribu desapareció. Ahora, se ha establecido firmemente que esta mujer nunca existió, que nunca pintó, y nunca vivió.

UN CUARTO PROPIO PARA ÉL

A la quinta vez las cosas fueron diferentes. A ella le dio instrucciones, le dio las llaves (incluida la pequeña) y se marchó solo. Exactamente cuatro semanas más tarde reapareció. La casa estaba limpia, el suelo encerado y la puerta que conducía al cuarto pequeño no se había abierto. Barbazul estaba pasmado.

- ¿Pero no tuviste curiosidad?- le preguntó a su esposa.
 - No - respondió ella.
 - ¿Pero no quisiste descubrir mis secretos más íntimos?
 - ¿Por qué?- preguntó la mujer.
 - Bueno – contestó Barbazul-, es natural. ¿No quisiste saber quién soy realmente?
 - Eres Barbazul y mi esposo.
 - Pero las cosas de la habitación. ¿No quisiste ver lo que hay en esa habitación?
 - No –dijo la criatura-. Creo que tienes derecho a un cuarto propio.
- Esto lo enfureció tanto que la mató allí mismo. En el juicio, alegó provocación.

LÓGICA

- Muy bien –le dijeron-, quieres los mismos derechos, lucha en la guerra.
 - Muy bien –respondió ella-, lucharé en la guerra.
- De este modo salió de allí y se alistó en el ejército y se marchó a luchar. Todos los soldados, sus compañeros, eran varones. Le hicieron la vida muy desagradable. Pero después de unos pocos años la guerra terminó y ella regresó. Los periodistas la rodeaban y le pedían comentarios.
- Bueno –contestó ella-, era lo normal. Los hombres mataban a hombres, y las mujeres eran violadas. Yo maté algunos hombres, pero no violé.
 - ¿Así que ahora estás capacitada como un ser humano completo?
 - Sí –respondió ella-. La violación, de hecho, no es obligatoria.

LA DOTE

Hubo una vez un rey que tenía tres hijas. Cuando la primera niña nació, el Rey quedó muy decepcionado, había querido un hijo; pero se sintió un poco mejor cuando su esposa le explicó que esta niña en particular era especial: por donde ella caminaba, brotaban las flores. Cuando nació su segunda hija, ocurrió lo mismo. Esta vez la reina le dijo a su marido que por donde la niña caminase, se encontrarían perlas. De nuevo él se sintió mejor. Pero cuando por tercera vez nació otra hija, se enfadó realmente, y esta vez, por desgracia, no hubo consuelo, porque la Reina, su madre, había muerto en el parto. Las tres princesitas no eran muy felices, pero crecieron de todos modos. Y, con el tiempo, la primera y la segunda se casaron con los príncipes de reinos vecinos. Pero la boda de la tercera presentaba un problema: ella no tenía nada que ofrecer. Por supuesto, era posible que la tercera princesa también tuviese un talento, pero nadie sabía cuál era. Ciertamente, cuando caminaba, no ocurría nada en absoluto. El Rey, su padre, se exasperó más y más. La gente comenzó a rumorear que su tercera hija no era una princesa de verdad, porque cuando una princesa caminaba algo debía pasar. Las cosas fueron de mal en peor, pero entonces, repentinamente, ocurrió un milagro: la princesa se cayó y se cortó en el pie y un rubí se formó donde brotaba la sangre. El Rey estaba satisfecho, la gente se quedó anonadada. Acto seguido se decretó que la tercera princesa siempre tendría que caminar descalza. Nunca hubo un Rey más rico o más feliz, nunca la gente tuvo más posibilidades de prosperar, y, con respecto a la princesa, sus pies estaban hechos trizas, y su camino se cubrió con cristales y piedras.

Final alternativo: Antes de que el milagro ocurriera, el Rey, en plena desesperación, la casó con un pobre cuidador de cerdos, que vivía a las afueras del reino. Ella y el porquero eran muy pobres, así que sus zapatos se desgastaron y ella se lastimó los pies. Por supuesto que un rubí se formó allí donde apareció su sangre. Afortunadamente para ella el porquero era sensible. Vendió la joya y le compró unos zapatos.

Otro final: La primera princesa se convirtió en florista. La segunda princesa negociaba con perlas. Y la tercera princesa ocasionalmente producía un rubí, pero sólo cuando le venía bien.

LA NIÑA OSTRA

Érase una vez una niña ostra. Nunca decía una palabra, no le importaba en absoluto, tan sólo vivía tranquilamente en el fondo del océano, y hacía lo que podía, que, en realidad, quería decir nada, excepto permanecer quieta, para protegerse. Esto requería un esfuerzo constante y desarrolló una úlcera; pero continuó igual, protegiéndose en sí misma y manteniendo la boca bien cerrada. Entonces, un día, un buzo la encontró y la abrió. Dentro de la ostra estaba la perla más hermosa que nadie había visto jamás. Casi perfecta, su tamaño extraordinario y su brillo deslumbrante eran absolutamente asombrosos. Todo el mundo venía de lejos y de cerca únicamente para admirarla. ¿Y, estaba contenta la ostra? Probablemente lo estaba, pero por razones evidentes no dijo nada.

- Pregunta: ¿Por qué no dijo nada la ostra?
- Por costumbre.
 - Porque para entonces ya estaba muerta.
 - Por pura modestia.

CORAZÓN

Y por aquel entonces había una mujer que no tenía cabeza, era todo corazón. Incluso se llamaba Corazón, y no (como se podría suponer) La Mujer Sin Cabeza. Su función en la vida era servir a la gente y esto lo hacía de todo corazón. Cocinaba, limpiaba, hacía pasteles, fregaba, y era siempre amable y cariñosa y dulce, y nunca se quejó por sentirse cansada. Con el paso del tiempo sus hijos crecieron, su marido se hizo viejo, acabó muriéndose y fue enterrado. La Mujer Sin Cabeza se quedó sola. Así que acudió a las Autoridades a solicitar una pensión. Y no la obtuvo. Con esto no sugiero que las Autoridades fueran despiadadas. El problema era que ella no tenía cabeza y no podía reclamar.

EL BAUTIZO

Una Reina dio a luz a una preciosa niña, y cuando llegó el momento de bautizarla, invitaron a todo el mundo, pero se olvidaron de invitar a la Malvada Bruja. Ella enfureció. Se presentó de todas maneras, y a gritos lanzó su maldición:

- La niña no tendrá rostro por el resto de vida.

Hubo una consternación general. La Bruja desapareció y los padres de la niña sufrieron amargamente. Entonces la Bruja Buena dio un paso al frente.

- ¿No puedes hacer algo? – suplicó la Reina.

- Puedo mitigar la maldición – contestó la Bruja -. Aunque no tenga rostro, no se notará.

Traducción de Ana García Arroyo

5 notas y documentos

Más allá del caso Tamayo-Sáez. La política de los negocios y las urnas

Jaime Pastor

La ausencia de dos miembros del Grupo Parlamentario socialista en la sesión inaugural del Parlamento madrileño el pasado 10 de junio supuso sin duda una gran y dura sorpresa para el “pueblo de izquierdas” de esa comunidad, ya que contribuyó decisivamente a frustrar la mayoría que con la suma de PSOE e IU permitía impedir la continuidad en el poder del PP mediante la formación de un gobierno presidido por Rafael Simancas. Significó, por tanto, un fraude al resultado electoral y abrió paso a un intenso debate público sobre las “razones” que pudieron llevar a Tamayo y Sáez a adoptar esa actitud extrema, entre las que podían estar su relación con el sector inmobiliario y su aspiración a una mayor parcela de poder; todo ello desembocó en la formación de una comisión de investigación, cuyo desarrollo se caracterizó por una mayor hostilidad verbal entre PP y PSOE, echándose la culpa mutuamente por lo acaecido. Finalmente, la convocatoria de nuevas elecciones ha aparecido como la única vía posible de resolución de la crisis, en beneficio del PP y en un contexto de crisis de credibilidad del “mundo de la política” y especialmente del PSOE. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto?

En primer lugar, habría que empezar constatando que, pese a las trabas en la lista de comparecientes, la audiencia alcanzada por la retransmisión televisiva de muchas de las sesiones de la comisión de investigación demuestra que, sin ignorar la parte que en ello ha podido tener el morbo por seguir lo que se ha llamado el “culebrón del verano”, había un interés de la ciudadanía madrileña por seguir un proceso en el que se ha terminado dando un fenómeno contradictorio: por un lado, la comprobación de que la imbricación entre el “mundo de la política” y el “mundo de los negocios”, especialmente los inmobiliarios, salpica a las dos grandes formaciones; por otro, una preocupación por sacar algo en claro, al menos por parte de una minoría, para ver si cabía alguna esperanza en que la autorreforma de “los políticos” fuera posible; esto último parece haber quedado en mera ilusión, mientras que lo primero parece imponerse como algo “inevitable”.

Corrupción y globalización. La asociación cada vez más estrecha entre “política” y “negocio”, aunque en este caso no haya podido demostrarse con pruebas concretas (ya que, probablemente, las compensaciones simbólicas y materiales llegarán después del 26

de octubre si gana el PP), no es, desde luego, algo que definiría un “hecho diferencial” madrileño o una tendencia reciente. Forma parte de la historia de la Humanidad, como se nos ha recordado en algunas intervenciones con referencias a los “clásicos” durante este cálido agosto; pero es evidente que desde que el capitalismo trató de establecer una separación formal entre las esferas de la política y la economía, la corrupción de “los políticos” ha ido manifestándose como una tendencia en ascenso, acentuada además por la configuración de partidos “electoral-profesionales”, la competencia interpartidaria y el coste creciente de las campañas electorales. Si añadimos a todo esto la relativa novedad que introduce la “globalización” financiera neoliberal, con todas las facilidades que está dando para eludir el control estatal y público por parte del sector que se mueve en la “economía criminal” junto con especuladores y rentistas de todo tipo, así como mediante la lucha de los principales partidos por ganar la “confianza” empresarial e inversora, tendremos como resultado el desarrollo de lo que Pizzorno denominó hace tiempo como *“políticos de los negocios”, o sea, “individuos que conjugan la mediación en asuntos lícitos e ilícitos y, en general, la participación a título personal en la actividad económica con la mediación política en sentido tradicional”* 1/.

La aspiración ideal a “vivir para la política” ha terminado sucumbiendo ante la configuración de elites que, después de “vivir de la política” durante un tiempo, han ido pasando a vivir también de los negocios y del papel de intermediación que juegan entre lo privado y lo público, en beneficio tanto de su partido –para financiar sus campañas– como de sí mismos. Así, la historia reciente de muchos cargos públicos procedentes de la socialdemocracia ha sido la de una rápida transición hacia su conversión en políticos profesionales que pasan a formar parte de la clase dominante o, al menos, de la clase media-alta, bien sea por promoción individual o de grupo. En realidad, esto es lo que ocurrió en nuestro país dentro del PSOE durante la década de los 80 y que únicamente su desalojo del gobierno pudo frenar, pero sin que se hayan roto todos los canales de comunicación con el “mundo de los negocios”, como se puede comprobar en el ámbito local, debido precisamente al peso que en él tiene el sector de la construcción y de las inmobiliarias. Por eso la categoría de “políticos de los negocios” parece adecuada para los casos Tamayo, Sáez y...Balbás, verdadero cerebro gris y ejemplo de promotor de una verdadera facción capaz de hacerse valer en la configuración de las coaliciones ganadoras, primero en UCD y luego en el PSOE. Pero sin que la lista empiece ni acabe con ellos: no hay que olvidar, por ejemplo, el papel de intermediario jugado por Felipe González, todavía en fechas recientes, entre las multinacionales españolas y los gobiernos mexicano y argentino.

Nos encontramos, por tanto, ante un escenario en el que dentro de los partidos que no cuestionan “la política” dominante a escala global, la disponibilidad para verse corrompidos por los poderes económicos es creciente a medida que tienden a disminuir en su seno los elementos ideológicos y críticos del sistema y, en cambio, van pesando más los ligados a la posibilidad de una movilidad social ascendente: en suma, utilizando los términos de Panebianco, en las coaliciones dominantes de esos partidos han ido creciendo los “arribistas” frente a los “creyentes”. Obviamente, cuando sale a la luz pública la corrupción, la propia necesidad de autodefensa del sistema político obliga a

1/ Donatella della Porta e Yves Mény ampliaban esa definición en un artículo reproducido, bajo el título “Los negocios de la política. Un análisis comparado”, en *VIENTO SUR*, nº 20, marzo-abril 1995, cuya (re)lectura sigue siendo recomendable.

hacer la depuración consiguiente, pero sin que ello evite el desgaste de los partidos, especialmente los de izquierda, y sin que en más de un caso los beneficiarios sean... los corruptores, como ha sucedido en Italia con Berlusconi. Aquí, tenemos el caso de Marbella, en donde ya la competencia ha terminado dándose entre dos corruptores metidos a “políticos”, con la supuesta izquierda local de subalterna de uno frente a otro.

Ni “tránsfugas” ni oligarquías partidarias. En segundo lugar, la crisis de Madrid ha significado un daño enorme a la nueva relación entre lo político y lo social que se había empezado a establecer tras el ciclo de luchas que va del 20-J del 2002 al 15-F de 2003 y que se reflejó también en una voluntad de voto de castigo al PP incluso entre sectores tradicionalmente abstencionistas y muchos jóvenes. El retorno de la corrupción al primer plano y la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte de la dirección del PSOE han frustrado ese proceso y muy probablemente van a conducir a este partido a una pérdida de votos en la confrontación electoral del 26 de octubre.

La dirección de IU no se ha visto afectada directamente por esta crisis pero tanto la tendencia a generalizar sobre “los políticos” desde los medios de comunicación como su tímida (ni siquiera ha defendido abiertamente el “giro copernicano en la política de vivienda” que propugna en su programa electoral) y en ocasiones confusa actuación mantenida durante estos meses (con propuestas tan desconcertantes y desafortunadas como la presión para que Simancas gobernara con los votos de los tránsfugas o, luego, la formación de un “gobierno tripartito de gestión”) no garantizan que pueda mantener los apoyos electorales que obtuvo el pasado 25-M. Haría falta que IU desarrollara un discurso y unas propuestas que conectaran abiertamente con la búsqueda de otra política, otra democracia y otro Madrid por parte de lo que es la base fundamental de su electorado potencial, la de la gran mayoría que se movilizó el 15-F y que desconfía cada vez más de la coherencia del PSOE entre lo que dice y lo que hace. La superación del “desencanto” vivido debería obligar también a una mayor concreción en materias que han estado en el centro de la crisis anunciando, por ejemplo, su firme disposición a aplicar un programa de lucha por el derecho a una vivienda digna y barata, pese a quien pese, y exigiendo la revisión de tantas operaciones urbanísticas que sólo están beneficiando a una burguesía inmobiliaria que tiene entre sus representantes “ilustres” al presidente del Real Madrid.

Pero, además, la reacción de las direcciones del PSOE e IU ha sido contradictoria: por un lado, han denunciado la existencia de una trama político-inmobiliaria dirigida a impedir la victoria de la izquierda, pero se han quedado muy cortos –incluso en el caso de IU, como acabamos de recordar– en la concreción de sus propuestas para luchar contra los responsables del *boom* inmobiliario y del altísimo precio de la vivienda para la mayoría de la población; por otro, se han dedicado a debatir sobre las posibles medidas a tomar contra el “transfuguismo” y la indisciplina en los grupos parlamentarios, cayendo en una preocupación por el monolitismo interno que, de reflejarse legalmente, convertiría a esos partidos en algo más parecido a unos ejércitos bajo el mando de líderes con plenos poderes. Porque si, por ejemplo, se tiende a adoptar un trato disciplinar similar a lo que en este caso ha sido una ruptura con lo que expresaba el resultado electoral del 25-M (y que, por tanto, suponía una vulneración clara del mandato recibido) y a las diferentes ocasiones de desobediencia individual que puede haber por parte de un cargo público en función de los temas de que se trate, se corre el riesgo de criminalizar el disenso y el pluralismo intrapartidario, como en la práctica ocurre, para sustituirlos por un sistema basado en los liderazgos plebiscitarios.

Escalas jerárquicas. A este respecto parece importante distinguir entre lo que son *grupos de interés, lobbies* o “familias extensas”, por un lado, y lo que son o deberían ser *corrientes de opinión*, por otro. Basta haber escuchado a José Luis Balbás y a Eduardo Tamayo para sospechar, en la mejor de las hipótesis para ellos, que lo que ambos parecían buscar era el control de algún sector clave dentro del nuevo gobierno que les sirviera además para proseguir en mejores condiciones sus negocios, compartidos a lo que parece con algunos militantes del PP. Por eso, y aún con la distancia que nos separa en tantas cosas de Javier Pradera, uno no puede dejar de coincidir con su valoración de este caso como una prueba de la existencia de una “*trama de corrupción transversal al PP y al PSOE organizada por especuladores inmobiliarios y por cargos públicos venales de segunda fila emboscados en ambos partidos*” /2. El problema está en por qué esos “cargos públicos venales” tienen acceso a los grupos dirigentes de los partidos, ya que, como muy bien escribió hace tiempo Panebianco, frente a unos arribistas sin opinión política propia sólo “*caben dos alternativas: o cooptarles dentro de la escala jerárquica del partido o estimular de un modo u otro su ‘salida’ del partido*” /3. Desde un punto de vista de izquierdas, es claro que la elección debía haber sido la segunda; sin embargo, Zapatero, Blanco y Simancas se inclinaron por la primera para terminar decidiéndose, tarde y mal, por la segunda y sin dimitir ninguno de ellos luego por los graves errores cometidos.

En cambio, las corrientes de opinión no tienen –o no deberían tener– nada que ver con los grupos de interés, aunque sean éstos los que más tiendan a proliferar en los últimos tiempos dentro de los grandes partidos por las razones que antes se ha comentado. Un partido de izquierdas necesita del debate político y de la integración en su seno de las diferentes sensibilidades políticas, ideológicas y culturales que recorren a la izquierda social, con mayor razón en un momento histórico de refundación como el que hoy vivimos. Excluir el reflejo de esa pluralidad en la representación pública y convertir al cargo público en un “mandado” de su jefe de grupo, sería un error garrafal que terminaría ahondando más la distancia entre “los políticos” y la ciudadanía y, por tanto, la crisis de credibilidad de los partidos. Por el contrario, un partido de izquierda transformadora y alternativo debería abrirse más a los movimientos sociales, ofrecer la oportunidad a activistas no afiliados de presentarse en sus listas y, por supuesto, buscar al mismo tiempo algún protocolo de acuerdo que permitiera hacer compatible la defensa común del programa electoral (aunque la primera condición para ello sería que hubiera voluntad de cumplirlo por parte de los portavoces del grupo parlamentario) con el respeto a la libertad individual de conciencia y de opinión en temas concretos y la búsqueda del consenso dentro del grupo sobre la posición de voto a adoptar en materias conflictivas. Debería estimularse también una política de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios privados y una aplicación estricta de la limitación a dos mandatos en la permanencia en cargos públicos (condición necesaria para evitar la consolidación de la categoría de “profesionales de la política”), así como la regulación de mecanismos de elección (primarias), rotación y revocación de esos cargos por parte de los afiliados y votantes y la rendición de cuentas (incluyendo ingresos personales) periódica de sus actividades; otra medida fundamental para evitar que el ejercicio de un cargo público sea concebido como un privilegio debería ser que el salario a cobrar no fuera superior al sueldo medio de una persona trabajadora o, al menos, que eso fuera así

2/ *El País*, 1/7/03

3/ *Modelos de partido*, Alianza Editorial, 1990, pág. 78.

en los partidos de izquierda. Ninguna de esas medidas debería ir acompañada por otras que impidieran el reflejo de la pluralidad de los partidos también en las instituciones.

Pero, precisamente porque el proceso de corrupción política no sólo está ligado a las expectativas individuales de ascenso social sino también a la creciente búsqueda de recursos financieros de todo tipo por parte de las direcciones de los partidos, a medida que se acercan las confrontaciones electorales, debería haber una restricción sustancial de los gastos en campaña y una mayor posibilidad de utilizar espacios gratuitos y fomentar los debates en los medios de comunicación públicos. De esta forma evitaríamos también uno de los rasgos más negativos del proceso de “norteamericanización” de las democracias liberales realmente existentes.

Otra democracia es posible. En tercer lugar, ha sido la crisis madrileña la que de nuevo ha vuelto a poner de relieve la creciente tendencia a la desafección ciudadana frente a unos sistemas que se dicen democráticos y que, en realidad, se encuentran cada vez más sometidos a los dictados de los poderes económicos, ya sean globales, nacionales o locales. El clamor popular que se oyó durante las movilizaciones contra la guerra de Iraq, denunciando a un gobierno y una democracia que pretendían ignorar la opinión mayoritaria de la población, no puede ser olvidado. Por eso la lucha contra la corrupción y contra el “transfuguismo” no debería ser utilizada ahora para un blindaje mayor de los grupos burocráticos que hoy dominan en el seno de los partidos y una exigencia de “fidelidad” a sus directrices; al contrario, exige denunciar con mayor firmeza a los poderes económicos y, en el ámbito local y autonómico, luchar sin reparos contra ese fenómeno de la “especulación concertada” /4 entre sectores de la burguesía inmobiliaria y cargos públicos; también hace más urgente la necesidad de socializar la política y de construir otra izquierda libre de toda sospecha de corrupción mediante la máxima democratización y transparencia interna posible; y obliga, en fin, a poner todavía más en primer plano la aspiración a otra democracia, la basada en una democracia participativa y, más concretamente, en la puesta en pie de propuestas como la adopción de presupuestos participativos que estimulen la implicación de la ciudadanía en los procesos de deliberación y decisión sobre las prioridades a aplicar en las principales áreas, como las de urbanismo y vivienda, con el fin de poder satisfacer las necesidades de la población y no las de los especuladores de todo tipo /5.

Por último, la crisis vivida en Madrid ha significado también un nuevo desafío para muchas organizaciones sociales que han estado especialmente activas en las movilizaciones anteriores. La indignación que ha provocado en muchas de las personas afiliadas a las mismas el fraude electoral vivido, ha generado una reflexión y un debate sobre cómo responder ante esa situación inédita. El resultado ha sido insatisfactorio, ya que hay que reconocer que no se ha logrado un discurso compartido que acompañara la denuncia de lo ocurrido –y de quienes se han beneficiado de ello, el PP y un sector, al menos, del empresariado–, con una crítica nada complaciente al PSOE y, sobre todo, con la reivindicación de la necesidad de otra política y otra democracia. También sobre esto habrá que extraer enseñanzas de cara al futuro.

4/ Albert Recio, “Corrupción y transformaciones económicas”, *VIENTO SUR*, nº 20.

5/ Antonio Cruz desarrolla este tema en su artículo “Corrupción político-inmobiliaria y presupuestos participativos”, publicado en el sitio web. attacmadrid.org

“ Intentamos llevar una práctica asamblearia y defendemos un sindicalismo participativo”

Entrevista a Luis Blanco, miembro de la Comisión Coordinadora de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)

Pregunta: ¿Podrías explicarme cuando y con qué objetivos se creó la IAC y qué balance haces de estos años de existencia?

Luis Blanco: La IAC se constituye a finales de 1997 como una confederación, una intersindical en la que forman parte sindicales sectoriales del sector público, de la administración, enseñanza y sanidad. Participan en su constitución el sindicato de enseñantes USTEC-STEs, CATAC-sanidad, CATAC-administración, y CAU (un sindicato del personal de administración y servicios de las universidades públicas). Estos sindicatos llevaban tiempo existiendo, con una presencia importante en sus respectivos sectores, y eran y son de tradición asamblearia.

Durante estos años, nuestro principal objetivo ha sido intentar sensibilizar y motivar a los trabajadores de los servicios públicos donde tenemos presencia para defender el carácter público de estos servicios. Para ellos hemos impulsado y participado en la creación de plataformas unitarias, coordinadoras en defensa de los servicios públicos, etc. Como IAC hemos participado también activamente en las principales luchas sociales y sindicales de carácter general que se han planteado en los últimos años. Quizá algo que no hemos conseguido es que la IAC sea conocida en cuanto tal, los sindicatos sectoriales que la integran siguen siendo más conocidos que la propia intersindical.

Nuestra participación en las luchas concretas para la mejora de las condiciones de trabajo se han hecho más desde la perspectiva sectorial que desde la perspectiva confederal, pero en todo caso los sindicatos que componemos la IAC hemos tenido una presencia importante en todos los procesos de negociación colectiva y movilización de los empleados públicos, y como organización hemos salido fortalecidos en la medida en que hemos ido creciendo en afiliación y representación.

P.: ¿Qué objetivos os habéis marcado en vuestro reciente segundo congreso?

L.B.: En el primer congreso, a nivel organizativo el objetivo que nos habíamos marcado era conocernos, necesitábamos un proceso de conocimiento mutuo, de trabajo en común entre las diferentes organizaciones sindicales de la intersindical. En este aspecto el balance de trabajo de los últimos años es plenamente satisfactorio, con lo cual en este segundo congreso nos planteamos dar un paso adelante, hacia una mayor cohesión e interrelación entre los sindicatos sectoriales. Nos planteamos también la apertura de la IAC hacia sectores distintos de los de los sindicatos fundacionales. Hemos acordado la creación de una federación de “otras actividades”, que servirá de puente para la integración en la IAC de colectivos de trabajadores y de pequeñas organizaciones de empresa que hasta ahora no tenían una vía para integrarse en la IAC, hasta que se pueda constituir una federación sectorial en cada uno de sus ámbitos.

Queremos mantener una estructura organizativa basada en organizaciones sectoriales con una amplia autonomía en aquellas cuestiones que afecten a su ámbito. Los acuerdos confederales se referirán a aquellos temas generales, y no hay mecanismos para que los órganos confederales impongan directrices a los sindicatos sectoriales o colectivos de empresa en los temas en que les afecta exclusivamente a sus ámbitos. La federación de

otras actividades permitirá que pequeños colectivos de trabajadores, en el marco de una empresa por ejemplo, pero también autónomos o parados, puedan integrarse de forma real y efectiva en la IAC. Ya se han integrado en la IAC diversos sindicatos de empresas de cajas de ahorros que han montado una federación, con unos 900 afiliados/as de cajas de ahorros y 40 delegados, y pensamos ir incorporando otros colectivos de empresa y otras organizaciones más pequeñas.

En otro sentido, hemos acordado potenciar la estructura territorial, con el objetivo de facilitar la cohesión entre los diferentes sectores de la intersindical, creando ámbitos formales de participación y coordinación de los militantes en cada ámbito territorial, que van a tener representación en los órganos de dirección. El sistema de toma de decisiones seguirá siendo el consenso, ya que hasta ahora nos ha permitido ir avanzando, quizá de forma no muy rápida pero sin generar tensiones. Por ejemplo, la comisión coordinadora, en caso de no haber consenso, necesita una mayoría de 4/5 partes para tomar acuerdos.

P.: ¿Qué estrategia sindical defendéis para hacer frente a estos procesos de privatización y desregulación?

L.B.: Nosotros planteamos como prioridad la lucha contra la privatización de los servicios públicos, que están realmente en peligro con todo el proceso de discusión en la OMC con el AGCS y las políticas del gobierno y la UE. Nuestro objetivo es luchar contra el proceso de desregulación de los derechos laborales, de privatización o supresión de los servicios públicos, de privatización del sistema público de pensiones...

La privatización de los servicios supone un mayor coste para los usuarios, y una degradación de la calidad del servicio y de las condiciones de trabajo. Frente a ello hay que poner en marcha una estrategia de resistencia. Hemos hecho un trabajo de sensibilización, no sólo entre los empleados públicos sino también entre los usuarios de los servicios (sanidad, enseñanza, gestión del agua...) y al mismo tiempo hemos trabajado para crear plataformas unitarias en defensa de la sanidad pública, el MUCE en la enseñanza, que es el marco unitario de la comunidad educativa, y también hemos planteado movilizaciones concretas entre los empleados en defensa del carácter público de los servicios.

En general las grandes movilizaciones se han producido en el momento en que el gobierno ya ha tomado iniciativas concretas de privatización. No hemos conseguido realizar movilizaciones amplias antes de que los procesos de privatización sean ya proyectos concretos, aunque sí que hemos realizado acciones minoritarias por parte de nuestros afiliados o delegados como concentraciones, ocupación de algún centro, reparto de materiales de sensibilización...

P.: Vuestra intersindical está basada en sindicatos sectoriales. ¿Como evitáis el riesgo de caer hacia posiciones corporativistas?

L.B.: El corporativismo es un peligro real, y nosotros hemos tenido un conflicto con una sección sindical, de muchos afiliados, que han caído en posiciones corporativistas, y que nos creó un conflicto que se saldó con la salida de la mayoría de estos afiliados. La única manera de combatir el corporativismo es incorporar a la práctica sindical diaria, a las luchas y a los objetivos sindicales, aquellos elementos que son comunes a todos los trabajadores en sentido amplio, incluido parados, sectores desfavorecidos, inmigrantes, sin techo, marginados, gente con problemas para pagar una vivienda... que nos permitan tener una visión general sobre los problemas sociales.

La mejora de las condiciones concretas de trabajo, sueldos, jornada laboral..., es algo fundamental pero si sólo te centras en esto es cuando puedes caer en el corporativismo. Ser un sindicato de empresa no significa ser corporativista, generalmente estas organizaciones que surgen desde la base y que muchas veces son producto de rupturas y salidas de los grandes sindicatos, se producen precisamente en contra de estas prácticas corporativistas que hoy se están dando por parte de los grandes aparatos sindicales. Por mucho que se proclamen sindicatos de clase o intersectoriales la realidad es que su práctica es defender los intereses de los trabajadores más estables, mientras que hay una despreocupación general hacia los parados, inmigrantes, precarios.

La única forma en que se puede evitar el riesgo del corporativismo es teniendo una política coherente de lucha contra todo tipo de explotación, exclusión social y desregulación laboral. La solidaridad con Sintel, por ejemplo, la están llevando más pequeños colectivos y sindicatos de empresa que los grandes aparatos sindicales. Entonces es evidente donde está el corporativismo.

P.: Vosotros habéis sido muy activos en el movimiento antiglobalización, como mínimo desde la campaña contra el Banco Mundial en el 2001. ¿Qué motivos os han llevado a implicaros en el movimiento y qué estrategia habéis seguido?

L.B.: Nosotros nos hemos considerado siempre un movimiento social, que ha intentado además funcionar internamente de forma muy parecida a como funciona el movimiento antiglobalización. Intentamos llevar una práctica asamblearia y defendemos un sindicalismo participativo. Cuando surgió el movimiento antiglobalización pensamos que nosotros formábamos parte de él, que había que estar en las campañas. Valoramos muy positivamente que por fin a través del movimiento antiglobalización se incorporaran a las luchas mucha gente joven. Una vez decidido que había que estar en estas luchas, la única forma posible de hacerlo para nosotros era ir allí a aportar nuestras experiencias, sin más. No nos hemos planteado que había que ir allí porque allí estaban los jóvenes y había que ampliar nuestra base militante. Entre la gente joven existen muchas suspicacias y reticencias frente a cualquier organización que intente manipular o aprovecharse del movimiento. Nos hemos sentido cómodos en las campañas donde hemos estado, y lógicamente hemos tenido más incidencia en los temas que nos son más próximos, los temas relacionados con los derechos sociales.

Hemos apostado por la elaboración de una Carta de Derechos Sociales que sea un instrumento de movilización a nivel europeo, hemos estado en las movilizaciones concretas de defensa de los servicios públicos que se han apoyado desde estas campañas, después de la campaña contra el BM estuvimos en la campaña contra la OMC por la cumbre de Qatar, en la campaña contra al Europa del Capital y la Guerra, y ahora en la movilización por el encuentro de la OMC en Cancún, y en los comienzos de la preparación de la campaña contra el Foro de las Culturas del 2004 que organizan las instituciones en Barcelona.

Hemos estado también en todas las convocatorias del Foro Social Mundial desde el primer año, el FSE en Florencia y ahora en París y en la preparación del Foro Social Mediterráneo del año próximo en Barcelona. Seguiremos participando en todas las campañas que se planteen desde los movimientos sociales alternativos e impulsando campañas específicas en aquellos temas que afectan de forma más directa a los trabajadores, contra la privatización, desregulación, cierres de empresas...

P.: ¿Cómo lleváis dentro de los centros de trabajo las cuestiones del movimiento “antiglobalización”, y cómo tratáis de conectarlas con los problemas laborales concretos?

L.B.: Nosotros incorporamos a nuestro discurso sindical en los centros, a través de nuestros medios de comunicación (boletines...) o el debate en las asambleas, informaciones y valoraciones de lo que es el movimiento antiglobalización y las campañas en marcha con el objetivo de alentar la participación de los trabajadores en las movilizaciones.

Decimos que hay que estar contra los procesos de privatización no sólo porque nos afecta a nosotros, sino que lo relacionamos con todo el proceso de mercantilización que suponen las políticas neoliberales. Buscamos relacionar los efectos de las decisiones tomadas a nivel internacional con nuestros intereses como trabajadores y ciudadanos. Incorporamos a nuestro discurso la necesidad de luchas para conseguir que toda la sociedad tenga unos mínimos de bienestar y cuestionamos el sistema capitalista y neoliberal relacionándolo con aquellas cosas que afectan a los trabajadores.

P.: En paralelo al empuje del movimiento antiglobalización y del Foro Social Europeo, está habiendo procesos de coordinación de las izquierdas sindicales europeas y también de creación de redes sectoriales específicas. ¿Qué tipo de participación tenéis en todo esto?

L.B.: En el tema de las relaciones internacionales hasta ahora hemos participado en proyectos concretos, como la elaboración de una Carta de Derechos Sociales, pero no hemos mantenido una relación estable con otros sindicatos europeos, salvo en algún sector como la sanidad donde desde el primer momento hemos participado activamente en el proceso de creación de una red europea en defensa de la sanidad pública.

En este segundo congreso hemos acordado buscar una conexión más estable e intensa con los sindicatos alternativos en el resto de Europa ya que creemos que es algo cada vez más necesario para hacer frente a las políticas neoliberales.

P.: ¿Qué relaciones tenéis en Catalunya y en el Estado español con otras organizaciones sindicales?

L.B.: En el Estado español tenemos relaciones estables con varias organizaciones que queremos intensificar. En octubre tenemos un encuentro estatal donde, aparte de nosotros, están convocados la confederación STEs, la Intersindical Murciana, la Intersindical Valenciana, la Intersindical de Baleares, la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias, la Mesa Sindical Andaluza, el SOC, la Plataforma Sindical de Madrid donde hay sindicatos de la EMT, del Metro, Telefónica. Invitaremos también a ESK-CUIS de Euskadi y otras organizaciones. Queremos intentar establecer mecanismos de coordinación que hagan más eficaces nuestras luchas y movilizaciones, y que sirvan para intercambiar experiencias y solidaridad.

En Catalunya tenemos relaciones estables con otras organizaciones más pequeñas que la IAC pero que tienen importancia en sus sectores o empresas, como la FTC (Federación de Trabajadores de Catalunya), con la que, por ambas partes, hay una voluntad en que se produzca una confluencia organizativa, CO.BAS de Telefónica, el Sindicato Unitario del Metro, el Colectivo de Trabajadores Asamblearios de Banesto, el Sindicato Unitario Ferroviario... Con ellos tenemos reuniones periódicas, y nos planteamos luchas y actividades comunes.

Nuestra relación con CC OO y UGT es bastante más difícil porque no tenemos coincidencias en orientación y propuestas, aunque en los centros de trabajo nosotros defendemos la unidad sindical en los conflictos.

Con CGT tenemos unas relaciones correctas y cordiales, pero no se han podido plasmar más en una unidad de acción en determinados aspectos donde pensamos que las coincidencias son bastante amplias. Son temas que están ahí abiertos. Pensamos que hace falta una coordinación estrecha entre los sindicatos alternativos y la izquierda sindical.



El III Foro Social Mundial, que tuvo lugar en Porto Alegre, fue un éxito, según la opinión general. Este acontecimiento ha significado el final de una etapa, abriéndose así un período de reflexión y cambios necesarios para el desarrollo de un proceso que se ha confirmado como el más reconocido símbolo internacional de la lucha contra la globalización neoliberal.

El libro se basa en diecinueve entrevistas a personas significadas del Foro. Constituyen una exposición rica e interesante del momento actual del Foro Social Mundial y de los debates políticos y organizativos que van a determinar su futuro, incluyendo opiniones diversas, y en ocasiones contradictorias, sobre el papel de los movimientos sociales y los partidos políticos, las relaciones entre la unidad del

Foro y la radicalidad de las iniciativas que se basan en él, la modificación de la composición y tareas del Consejo Internacional, la función de la recién constituida Red Mundial de Movimientos Sociales, etc.

Los coordinadores del libro, miembros de la redacción de *VIENTO SUR*, aportan su punto de vista sobre el balance de logros y problemas del III Foro y sobre lo que consideran las “tres necesidades básicas” para el futuro del proceso: “*necesitamos ganar tiempo*”, “*necesitamos ganar espacio*” y “*necesitamos política*”.

Precio especial *VIENTO SUR* 10 €

Pedidos a la redacción

c/ Limón, 20 - Bajo ext. dcha.

28015 - Madrid

Teléfono y Fax: 91 559 00 91

vientosur@vientosur.org

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN



c/ Limón, 20 - Bajo ext. dcha. • 28015 - Madrid • Tel. y Fax: 91 559 00 91
Correo electrónico: vientosur@vientosur.org

Apellidos Nombre

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia C.P.

Correo electrónico

SUSCRIPCIÓN NUEVA SUSCRIPCIÓN RENOVADA CÓDIGO AÑO ANTERIOR

MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN ANUAL (6 NÚMEROS)

ESTADO ENVÍO COMO IMPRESO 35 euros EXTRANJERO ENVÍO COMO IMPRESO 50 euros (45 \$)
ESPAÑOL ENVÍO COMO CARTA 42 euros ENVÍO COMO CARTA 70 euros (60 \$)

SUSCRIPCIÓN DE APOYO
70 euros

MODALIDAD DE ENVÍO

ENTREGA EN MANO
ENVÍO POR CORREO

MODALIDAD DE PAGO

EFFECTIVO
DOMICILIACIÓN BANCARIA

DATOS BANCARIOS

BANCAJA. Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. c/ Caballero de Gracia, 28 - 28013 Madrid
Número de cuenta:
2077 // 0320 // 33 // 3100822631

DOMICILIACIÓN BANCARIA - AUTORIZACIÓN DE PAGO

Apellidos Nombre

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia C.P.

ENTIDAD	OFICINA	CONTROL	NÚM. CUENTA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fecha:

Firma:

Observaciones